

I. AS NOSAS LEIS

COMENTARIO AL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE RÉGIMEN FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE GALICIA

CÉSAR GARCÍA NOVOA

*Profesor Titular de Dereito Financeiro e Tributario
Universidade de Santiago*

I. INTRODUCCIÓN

Con fecha 5 de noviembre de 1999, el Diario Oficial de Galicia publicó el Decreto-Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia, que posteriormente aparecería en el Boletín Oficial del Estado de 8 de diciembre. La causa remota de esta norma es la autorización contenida en la Disposición Adicional Octava de la Ley 6/1998, de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 1999 para, en el plazo de un año, elaborar un texto refundido a partir de la Ley 11/1992, de 7 de octubre.

Este Decreto-Legislativo, bajo la fórmula de delegación al Gobierno para refundir la normativa vigente, responde al modelo que se recoge en el art. 82, 2 del Texto Constitucional y en el art. 10, 1, a) del Estatuto de Autonomía de Galicia¹. Su finalidad es, como dice DE OTTO, “reconducir a unidad la normativa dispersa y fragmentaria”² y su razón de ser, la tendencia a la disgregación que frecuentemente se da en las normas referidas a la actividad financiera de los entes públicos. En el caso de las normas financieras de la Comunidad Autónoma Gallega, la anterior Ley de régimen financiero y presupuestario, Ley 11/1992, de 7 de octubre, constituía la norma financiera básica de la Comunidad Autónoma³. Había venido a sustituir a la Ley 3/1984, de 3 de abril, de gestión económica

¹ Aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril.

² DE OTTO, I., *Derecho Constitucional*., Sistema de Fuentes, Ariel S.A., Barcelona, 1991, pag. 187.

³ La Exposición de Motivos de la Ley 11/1992, de 7 de octubre, definía este precepto como un modelo legislativo basado en la existencia de una norma legal, que regula con carácter general la actividad financiera pública, recogiendo tanto los principios generales de la misma como sus aspectos instrumentales.

y financiera pública de Galicia, y había experimentado sucesivas modificaciones a través de las Leyes de Presupuestos⁴. Esta tendencia en menor medida, se reprodujo respecto a la Ley de 1992; las distintas leyes de presupuestos han ido introduciendo innovaciones y modificaciones, a lo que hay que añadir diversos cambios normativos en las normas estatales, que el Estado ha dictado al amparo de su competencia sobre condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes – art. 149, 1, 1ª -, bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas – art. 149, 1, 18ª - y competencia exclusiva sobre Hacienda General – art. 149, 1, 14ª -. Es por eso que, llegado un determinado momento, se consideró necesario acudir a un Decreto-Legislativo. Y, en concreto, se ha autorizado al Gobierno para dictar un texto refundido, técnica normativa que, como señala CUBERO TRUYO, tiene una función de “simplificación del ordenamiento”⁵. El texto refundido es, como señala el propio CUBERO TRUYO, “el mecanismo de racionalización normativo por antonomasia”, dirigido *ex profeso*, a la clarificación, sistematización y cognoscibilidad de las leyes vigentes.

La función de esta norma legal será por tanto proceder a reunificar en un único texto una serie de disposiciones dispersas, normalmente a través del modelo de polarizar en torno a un texto principal, en este caso, la derogada Ley 11/1992, una serie de disposiciones desperdigadas. No se ha pretendido, por tanto, una actuación normativa innovadora del ordenamiento; se ha querido *restaurar* derecho vigente, más que crear. Si se hubiera pretendido una verdadera modificación normativa se hubiera acudido a una ley de bases para que el Gobierno gallego adoptase un texto articulado. Al recurrir al instrumento del texto refundido, se excluye la potestad de innovación normativa, más allá de los eventuales efectos innovadores que pueda tener la interpretación sistemática que conlleva todo proceso de refundición. Conviene recordar que la autorización de la Disposición Adicional Octava, sólo habilita para formular un texto único, pero no hace mención a la posibilidad de “regularizar, armonizar y aclarar” los textos legales que han de ser refundidos, a que se refiere el art. 82, 5 de la Constitución. Ello podría suponer, en un entendimiento radical, que cualquier precepto que se extralimitase a la simple reunificación normativa incurriría en un *ultra vires*, y habría de ser catalogado como disposición meramente reglamentaria, si nos atenemos a lo que se desprende del art. 1,1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa⁶.

⁴ Entre otras, las modificaciones a través de la Ley 1/1986, de 29 de octubre, que reformó algunos aspectos legales relativos al sistema de pagos a justificar y de ordenación de pagos; la Ley 13/1988, de 30 de diciembre, que introdujo cambios significativos en las normas sobre créditos y modificaciones presupuestarias y la Ley 2/1990, de 21 de junio, que modificó las normas relativas a empresas públicas y organismos autónomos comerciales, industriales y financieros o análogos.

⁵ CUBERO TRUYO, A.M., “Leyes de bases y textos articulados. Su aplicabilidad en el Derecho tributario”, *Civitas, REDF*, nº 96, 1997, pag. 502. Véase también, CALVO ORTEGA, R., “Consideraciones sobre la delegación legislativa en materia de impuestos directos”, *RDFHP*, nº 80, 1969.

⁶ El artículo 1,1 de esta norma establece que los juzgados y tribunales de lo contencioso conocen de las pretensiones que se deduzcan en relación con “los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

Independientemente de los efectos que pueda tener la inclusión en el Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de disposiciones innovadoras, es evidente que el instrumento normativo por el que se ha optado no es el más adecuado. La regulación jurídica de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma de Galicia es acreedora de importantes modificaciones, puesto que muchos han sido los cambios desde la anterior Ley de 1992. En algunos casos por la necesidad de adaptar la norma autonómica al modelo de la Ley General Presupuestaria estatal – que ha sido reformada, por ejemplo, a través de la Ley 11/1996, de 27 de diciembre de medidas de disciplina presupuestaria -, o a otras normas importantes como la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) o la Ley 1/1998, de 26 de febrero de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. En otros supuestos– caso de las fundaciones públicas – por la palmaria ausencia de regulación, contraria a la seguridad jurídica⁷. Y por último, por la necesidad de perfeccionar el régimen jurídico de algunas instituciones a las que iremos haciendo referencia a lo largo de este trabajo. Frente a estas necesidades, el Texto Refundido se ha limitado a correcciones puramente terminológicas –cuando no, meramente estilísticas-, hasta el punto de que si este trabajo se limitase a comentar las novedades realmente reseñables su extensión sería ínfima. Una valoración crítica del Decreto-Legislativo 1/1999 merece tener en cuenta no sólo lo que éste ha aportado, sino las distintas ocasiones perdidas para adecuar determinados preceptos de la Ley 11/1992.

El recorrido que a continuación haremos va a desarrollarse intentando respetar la sistemática del Decreto-Legislativo 1/1999.

II. FUNCIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE GALICIA

La Exposición de Motivos de la Ley 11/1992, antecedente del Texto Refundido que nos ocupa, definía la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario como norma destinada a contener los elementos básicos suficientes para precisar la definición conceptual de la Hacienda pública de la Comunidad. Utilizando aquí la idea de Hacienda Pública “en cuanto ordenamiento jurídico”⁸, esta norma pretende recoger el régimen general de los recursos económicos de la Comunidad Autónoma, y disciplinar las normas referidas al gasto público. Se trata, por tanto, de un conjunto normativo destinado a hacer efectiva la autonomía

⁷ La única norma que somete a las *fundaciones públicas*, carentes en nuestra Comunidad Autónoma de una regulación propia, al mismo régimen que las entidades de Derecho Público, es la Ley 10/1996, de 5 de noviembre, de actuaciones de entes y empresas participadas en las que tiene participación mayoritaria la Junta de Galicia en materia de personal y contratación.

⁸ Concepto ordinamentalista de la Hacienda Pública, defendido en su momento, por VICENTE-ARCHE DOMINGUEZ, F., “Hacienda Pública y Administración Pública”, *HPE*, nº 26, 1974, pags. 101 y ss.

financiera de la Comunidad Autónoma gallega (art. 42 del Estatuto de Autonomía de Galicia), autonomía que se pone, como se deduce de la redacción del art. 156 de la Constitución, al servicio de las competencias que les son propias y con la finalidad de facilitar su ejecución y, por tanto, al servicio de la autonomía política de que gozan todas las Comunidades Autónomas. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones, la autonomía financiera consiste en “la plena disposición de medios financieros para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, las competencias propias” (sentencias 201/1988, 13/1992 y 68/1996, entre otras) y supone el desarrollo de un poder normativo relativo a esa disposición y orientación del gasto público y determinación de los ingresos de la Comunidad Autónoma⁹. Esta norma pone de manifiesto una de las expresiones más claras de la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma gallega, y ordena, a través del ejercicio de la potestad legislativa autonómica, la *Hacienda Propia*, a que se refiere el art. 42 del Estatuto de Autonomía de Galicia.

Nos hallamos, al mismo tiempo, ante una norma que responde también a los modelos más clásicos de codificación en el Derecho Financiero, que, a diferencia de la función codificadora en otras ramas del Derecho¹⁰, pretenden simplemente superar el carácter temporal de las normas presupuestarias y recoger de modo indefinido disposiciones relativas a la ordenación del gasto público¹¹. El problema de esta norma con pretensión de ley codificadora es, sin embargo, que la misma puede ser desconocida e, incluso, derogada por normas posteriores de igual rango. Especialmente si esas normas posteriores son las leyes de presupuestos, que en el futuro podrían desconocer el contenido del Texto Refundido. Recordemos que las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia son también Leyes plenas, como se deduce del régimen de las Leyes de Presupuestos contenido en el art. 134 de la Constitución¹², aunque el Tribunal Constitucional haya dicho, incomprensiblemente, que este artículo no se aplica a las leyes de presupuestos de las Comunidades Autónomas¹³. No tiene excesivo valor el intento del propio Texto Refundido de primar su aplicación, frente a las Leyes de Presupuestos – art.

⁹ Sobre la distribución de competencias en materia económica, sentencia 75/1989, de 21 de abril, donde se señala que el *sepending power* o potestad de gasto no es fuente autónoma de competencias estatales. Doctrina que es más ampliamente desarrollada por la sentencia 13/1992, de 6 de febrero, sobre las Leyes de Presupuestos de 1988 y 1989. Sobre los límites al poder normativo de las Comunidades Autónomas, VANDELLI, L., *El ordenamiento español de las Comunidades Autónomas*, IAL, Madrid, 1982, págs. 274 y 275.

¹⁰ Sobre la función codificadora en el Derecho Financiero y sus diferencias con otros sectores del ordenamiento, véase DE LOS MOZOS, J.L., Voz “codificación”, *Enciclopedia Jurídica Básica*, Vol. I., Civitas, Madrid, 1995, 1064.

¹¹ Véase al respecto, PALAO TABOADA, C., *Derecho Financiero y Tributario*, Colex, Madrid, 1985, pag. 49.

¹² Así se ha reconocido en la sentencia del Tribunal Constitucional 27/1981, de 20 de julio y, posteriormente, 76/1992, de 14 de mayo.

¹³ En concreto, la sentencia del Tribunal Constitucional 116/1994, de 18 de abril, según la cual, el art. 134, 7 de la Constitución, que impide a las Leyes de Presupuestos crear tributos, no impide que una Ley Foral de Presupuestos, aprobada por el Parlamento de Navarra, modifique los tributos forales.

3, 2, a) y b) – puesto que, ambas normas tienen el mismo rango. Por tanto, la aplicación preferente de este Texto Refundido vendrá dada más por su condición de disposición legal con pretensión omnicompreensiva que por su verdadera eficacia normativa.

Habiendo expuesto la función de esta norma en el ordenamiento interno de la Comunidad Autónoma gallega vamos a señalar las innovaciones más importantes en relación a su contenido.

III. PRINCIPIOS GENERALES.

El Título Preliminar del Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia está dedicado a los principios generales de la Hacienda Pública¹⁴ y en él no se detectan novedades significativas, reproduciéndose la literalidad de los anteriores preceptos contenidos en la Ley 11/1992, con algún maquillaje terminológico y alguna cuestión de redacción. Y es precisamente esta ausencia de novedades la que llama la intención, pues una nueva norma de Régimen Financiero y Presupuestario constituye una magnífica ocasión para regular determinadas cuestiones, cuyo tratamiento jurídico es, a nuestro juicio, deficiente. Junto con la consagración de principios del gasto público como la eficacia y la eficiencia, lo que tuvo lugar en la Ley del 1992, este título preliminar se refiere, fundamentalmente, a las siguientes materias

La definición de un concepto jurídico de Hacienda Pública, recogido especialmente en el art. 1 del Texto Refundido. Aun en nuestro convencimiento de que no es función del legislador *definir* categorías o instituciones – los conceptos jurídicos son realidades *prelegge* - lo cierto es que este precepto recoge la definición que PALAO TABOADA denomina “objetiva” de la Hacienda Pública, y que también se contiene en el art. 2 de la Ley General Presupuestaria estatal; Hacienda Pública es el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico y financiero cuya titularidad le corresponde, en este caso, a la Comunidad Autónoma de Galicia. Pero, a diferencia de la norma estatal, el Texto Refundido gallego realiza una enumeración de materias que ella considera “propias de la Hacienda Pública de Galicia”. El Texto Refundido viene a reproducir el contenido del art. 44 del Estatuto de Autonomía de Galicia¹⁵. Lo curioso es que dentro de éstas, se encuentran algunas cuya inclusión entre la materia estrictamente *financiera* viene siendo cuestionada; es el caso de los arts 1, 2,c), d) y e), que se refieren al “régimen del patrimonio” de la Comunidad Autónoma, a la “contratación en régimen de Derecho Administrativo” y a la regulación de los ingresos en régimen de Derecho Privado. Así por ejemplo, aunque auto-

¹⁴ PALAO TABOADA, C., *Derecho Financiero y Tributario*, op. cit., pags. 20 y 21.

¹⁵ Véase al respecto, FERREIRO LAPATZA, J.J., “Art. 44”, *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia*, Dirigidos por J.L. Carro Fernández-Valmayor, MAP, Madrid, 1991, pags. 799 y ss.

res como SAINZ DE BUJANDA¹⁶ y VICENTE-ARCHE¹⁷ considerasen que la gestión del patrimonio de los entes públicos es una *función financiera* imputable a la Hacienda Pública, otras opiniones como la de CALVO ORTEGA se manifiestan en el sentido de entender que las normas de gestión del patrimonio del Estado o de las Comunidades Autónomas, no forman parte del Derecho Financiero – que es el derecho de la *actividad financiera*, es decir, de la Hacienda Pública -, porque dicha actividad de gestión “no tiene como fin propio y esencial el de la obtención de recursos dinerarios y el interés financiero no está protegido, en estos casos, con potestades exorbitantes”¹⁸. Y parece la postura más acertada, pues al margen de que lo obtenido, por ejemplo, por la explotación de los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma, constituya ingresos del Tesoro Público, la obtención de esos ingresos se hace en régimen de derecho privado, esto es, sin que la Administración que gestiona esos ingresos actúe protegiendo ningún específico interés público. No obstante, teniendo en cuenta la definición amplia que se da de la Hacienda Pública en el art. 1, 1 donde se incluyen todos los “derechos de contenido económico”, y teniendo en cuenta también que esta definición de Hacienda Pública está íntimamente relacionada con la figura del Presupuesto, donde se refleja la previsión de *todos* los ingresos, la inclusión dentro de la *Hacienda Pública* de estas materias, solución por la que opta el art. 1, 2 del Texto Refundido, parece lo más coherente.

El régimen de las disposiciones incluidas en las Leyes de Presupuestos y los principios presupuestarios¹⁹. El art. 3, 4, dedicado a reseñar la normativa reguladora de la actividad económico-financiera, incluye la autorización para que las Leyes de Presupuestos contengan disposiciones de vigencia temporal superior a un año – período de vigencia de los Presupuestos – o de vigencia permanente (quizás resultase más correcto decir vigencia indefinida, aunque ciertamente algunas disposiciones presupuestarias del Estado utilizaban el término “permanentes”²⁰). La incorporación, como algo normal, de disposiciones de vigencia indefinida a las leyes de presupuestos constituyó en su momento todo un logro, ya que durante cierto tiempo se dudó de esta posibilidad e incluso se confinó a los preceptos de vigencia indefinida en las disposiciones adicionales²¹. En realidad, la vigencia indefini-

¹⁶ SAINZ DE BUJANDA, F., *Sistema de Derecho Financiero I*, volumen primero, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, pags. 478 y ss.

¹⁷ VICENTE-ARCHE DOMINGO, F., “Hacienda Pública y Administración Pública”, op. cit., pag. 127.

¹⁸ CALVO ORTEGA, R., “Consideraciones sobre los presupuestos científicos del Derecho Financiero”, *HPE*, nº 1, 1970, pag. 132.

¹⁹ RODRIGUEZ BEREJO, A., “Sobre técnica jurídica y leyes de presupuestos”, en *Estudios de Derecho y Hacienda*, Homenaje a César Albiñana García-Quintana, IEF, Madrid, 1988, pags. 648 y 649.

²⁰ Así, el Real Decreto-Ley 24/1982, de 29 de diciembre.

²¹ Así se entendió que el principio presupuestario de anualidad debería extenderse no sólo a los estados de gastos e ingresos sino también al articulado. Era lo que ocurrió desde 1979 a 1987, con todas las leyes de presupuestos estatales posteriores a la Constitución. En tanto la Ley de Presupuestos para 1983 no había sido aprobada al cierre del ejercicio de 1982, fue necesario dictar el Real Decreto-Ley 24/1982, de 29 de diciembre, por el que se incorporaban como normas permanentes “determinados preceptos fiscales que en los últimos ejercicios se venían incluyendo en la ley presupuestaria”. A partir de esta norma se generaron dudas respecto a las normas a las que

da de todas las disposiciones incluidas en las leyes de presupuestos, sólo se estableció de forma expresa en los Presupuestos estatales, a partir de la Ley de Presupuestos para 1988, momento a partir del que se va a entender que tendrán vigencia indefinida las disposiciones incluidas en las leyes de presupuestos siempre y cuando no se les atribuya expresamente vigencia temporal. De esta manera se asumía el carácter de ley plena que la ley de presupuestos tendría, doctrina consolidada a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 39/1981, de 20 de julio (FJ 2º). La Ley de Régimen Financiero exige para las disposiciones de vigencia indefinida que se mencione expresamente esta condición, y que se incluyan las correspondientes tablas de derogaciones. La norma gallega sigue, por tanto, la regla inversa a la práctica implantada en las leyes presupuestarias estatales desde 1988; si en las Leyes de Presupuestos del Estado lo que hay que establecer expresamente es la vigencia temporalmente limitada de determinadas disposiciones, parece que en las leyes presupuestarias de la Comunidad Autónoma gallega hay que establecer expresamente la vigencia indefinida de sus disposiciones. Lo que se presume en los preceptos incluidos en las leyes de presupuestos gallegas es la vigencia temporal. Lo que, a nuestro juicio, no es correcto, porque lo que tiene vigencia temporal en las leyes de presupuestos son, exclusivamente, los estados de ingresos y gastos, y, a lo sumo, las disposiciones que interpretan su gestión y ejecución. Si la ley de presupuestos es una ley plena, y eso es algo completamente asumido, hay que presumir la vigencia indefinida de su contenido. Es verdad que resulta mucho más favorecedor para la seguridad jurídica del ciudadano que la ley aclare expresamente el alcance de su eficacia temporal *ad futurum*, pero tal aclaración, cuando no se trate de estados de ingresos y gastos, debe ser acerca de la eventual vigencia temporal limitada. El Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia está operando como si el principio de anualidad de los estados de ingresos y gastos del Presupuesto se proyectase también sobre el contenido jurídico del mismo, y ello, obviamente, no es así.

Disposiciones de carácter competencial. Los artículos 5 a 9 contemplan las disposiciones de carácter competencial, reproduciendo fielmente – y salvo algunas correcciones puramente estilísticas – los preceptos que figuraban en la Ley 11/1992 de 7 de octubre. Destaca entre todas el art. 5 , referido a la “reserva legal”, donde se señalan las materias referidas a ingresos y gastos públicos que se regularán por Ley del Parlamento de Galicia. Tengamos en cuenta, sin embargo, que no estamos ante una “reserva legal” sino ante una mera “preferencia legal”. Esta supuesta “reserva” no es tal, ya que está establecida en una norma ordinaria, como la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario, por lo que no vincula al legislador ordinario. Cualquier norma con rango de ley, posterior a la Ley de

se atribuía vigencia indefinida frente a las que la tenían sólo anual. Con una finalidad eminentemente clarificadora, las Leyes de Presupuestos de 1986 y 1987 incluyeron en las disposiciones adicionales las normas de vigencia indefinida. Incluir los preceptos de vigencia indefinida en las disposiciones adicionales supone pervertir la función de éstas, que no es otra que adoptar preceptos que regulan regímenes jurídicos especiales, a modo de “adición” o “matización” a la parte dispositiva de la ley; véase VIVER I PI-SUNYER, C., “La parte final de las leyes”, en GRETEL, *La forma de las leyes*, Barcelona, Bosch, 1986, pag. 137.

Régimen Financiero podría desconocer el contenido del art. 5. Sólo puede hablarse con propiedad de “reserva legal” respecto a las materias contenidas en el art. 5 del Texto Refundido que nos ocupa, cuando esas materias además estén reservadas a la ley en la Constitución o en el Estatuto de Autonomía. Así ocurre en la mayoría de los casos – Presupuestos – art. 134 Constitución y art 53, 1 del Estatuto -, establecimiento de tributos – art. 133, 2 de la Constitución y art 51, a) del Estatuto , emisión de deuda – art. 135 de la Constitución y art 51, c) del Estatuto , régimen del patrimonio – art. 132, 3 de la Constitución y art 43 del Estatuto -, establecimiento, modificación y supresión de recargos -art 51, b) del Estatuto-. Pero en otros supuestos podrían suscitarse dudas; así, por ejemplo, es dudoso que podamos considerar sujeto a reserva de ley todo el régimen de coordinación presupuestaria con las Diputaciones Provinciales de Galicia. El mismo está previsto en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, como una facultad de “coordinación funcional” atribuida a la Xunta, exigiéndose simplemente la consolidación de los presupuestos de las Diputaciones Provinciales con los de la Comunidad Autónoma²². El resto de las medidas de coordinación aparecen en la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, que vino a sustituir a la vieja Ley 8/1989, de 15 de junio. Esta norma establece, en lo concerniente a las medidas de coordinación, y salvo lo relativo a la elaboración del presupuesto que sí es materia reservada a la ley, una simple preferencia de ley, derivada del efecto de congelación de rango que se desprende de las disposiciones incluidas en un texto con fuerza de ley, pero que no puede interpretarse como una “reserva legal”²³

La organización administrativa. Es en este punto donde se nota más la ausencia de disposiciones verdaderamente innovadoras. La necesidad de adaptación de la organización administrativa de la Comunidad Autónoma hubiera justificado, desde nuestro punto de vista, optar por una técnica normativa distinta a la del Texto Refundido y proceder a dictar una ley nueva, especialmente en lo concerniente a la tipología de los organismos autónomos.

Recordemos que la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), cuya regulación es aplicable a todas las Administraciones públicas – art. 1 - procedió a modificar las categorías de organismos públicos. A partir de la entrada en vigor de esta norma subsistirán exclusivamente los organismos autónomos de carácter administrativo, regidos por el derecho administrativo – art. 45 – y desapareciendo los de carácter comercial, industrial o financiero. La idea de la

²² Formalmente ello se articula, como se señala en el art. 53 del Texto Refundido, a través de la obligación de la Xunta de Galicia, de remitir al Parlamento, los presupuestos de las Diputaciones Provinciales, junto con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad.

²³ Sobre la interpretación de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto y las medidas previstas en el mismo para la coordinación con las Diputaciones Provinciales, véase, CARBALLEIRA RIVERA, M.T., en *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia*, Dirigidos por J.L. Carro Fernández-Valmayor, MAP, Madrid, 1991,pags. 891 y ss.

LOFAGE es que la función que venían desempeñando estos organismos de carácter comercial sea asumida ahora por las entidades públicas empresariales, regidas por el Derecho privado, “excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para la misma en esta Ley” - art. 53, 2 -. La LOFAGE contiene además un régimen transitorio - Disposición Transitoria Tercera, apartado tres -, que prevé un plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor para adaptar los organismos existentes al nuevo régimen de organización pública. Esta reordenación de los organismos públicos para su transformación ha supuesto la derogación de los arts. 4; 6, 1 b) y 6, 5 de la Ley General Presupuestaria. La Comunidad Autónoma, sin embargo, en el ejercicio de su poder de autoorganización, y como consecuencia de las posibilidades que le otorga el art. 28,1,1 del Estatuto de Autonomía, en cuanto a la capacidad para regular el “régimen jurídico de la Administración Pública de Galicia”, establece su propia configuración de organismos autónomos²⁴. Y así, el Texto Refundido conserva, además de los organismos autónomos de carácter administrativo, los de “carácter comercial, industrial, financiero o análogos”, - art. 11, 1 -, junto con las *sociedades públicas* estatales - art. 12 -. La posibilidad de perfilar un régimen de organismos autónomos propio vendría amparada por el citado art. 28, 1, 1 del Estatuto, que GARCIA LLOVET considera “de una extensión, a todas luces, excesiva”, y que debe reducirse y concretarse a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional²⁵. Así, la sentencia 14/1986, de 31 de enero, proclamaría que dentro de la competencia exclusiva del Estado “bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas” - art. 149,1, 18 de la Constitución - se incluiría el régimen de “...personificación de tales Administraciones para su constitución, funcionamiento y actuación”. Esta sentencia dispone además (FJ 9º) que el art. 149,1, 18 pretende “posibilitar el mantenimiento de un tratamiento unitario de las instituciones esenciales atinentes a las públicas administraciones”. Mantener, como hace el Texto Refundido, la figura de los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero y análogos, puede ir contra la doctrina del Alto Tribunal expresada en esta sentencia.

El mantenimiento de estos organismos provoca además problemas referidos a su régimen jurídico-tributario. Recordemos que como consecuencia de la reordenación de los organismos públicos introducida por la LOFAGE, se modificó a través del artículo 4, 1º y las Disposiciones Transitorias 1ª y 17ª de la Ley de Medidas fiscales, administrativas y de

²⁴ Para el Tribunal Constitucional “la potestad organizatoria que corresponde a las Comunidades Autónomas para organizar sus servicios...no deriva de la norma estatutaria...sino de la competencia por ellas asumida respecto a la organización de sus propias Administraciones, y en esta materia cada Comunidad Autónoma ha de respetar, en cualquier caso, las bases que, de acuerdo con lo establecido en el art. 149,1, 18º, corresponde fijar al Estado” (sentencia 76/1983, de 5 de agosto, FJ 38).

²⁵ GARCIA LLOVET, E., “Art. 27, 32”, *Comentarios al Estatuto de autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia*, op. cit., pag. 502.

orden social, 66/1997, de 30 de diciembre, el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Esta modificación se inspira en la idea de que los organismos autónomos de carácter administrativos, los únicos que tras la LOFAGE merecen tal calificación, estén exentos del Impuesto, mientras que las llamadas *entidades públicas empresariales* estarían plenamente sujetas, lo que es lógico y acorde con el principio de igualdad, si entendemos que operan *ad extra* sujetas a un régimen de Derecho Privado²⁶. Por lo tanto, los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogos, que el Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia conserva han perdido su exención en el Impuesto sobre Sociedades.

Y ello a pesar de que el art. 11, 3 del propio Texto Refundido disponga que los organismos autónomos de la Comunidad de Galicia (todos ellos) “gozarán de los beneficios fiscales que se establezcan para las entidades públicas de tal naturaleza”. Es obvio que este precepto pretende establecer un tratamiento fiscal de los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogos similar al que se dispone para los organismos autónomos de carácter administrativo, y que esta pretensión se extendería a todos los tributos, incluido el Impuesto sobre Sociedades. La cuestión que se suscita es hasta qué punto la Comunidad Autónoma puede influir en la determinación de un beneficio fiscal en un impuesto estatal. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1999, de 30 de septiembre se enfrenta a una disposición aprobada por el Parlamento de Cataluña regulando el régimen jurídico del Instituto de Desarrollo Comarcal, donde se dispone que el susodicho Instituto “goza de las exenciones y beneficios fiscales que corresponden a la Generalidad”. El Tribunal (FJ 4º) admite este precepto sólo si se interpreta que “tiene como único y exclusivo campo de aplicación el ámbito de competencia del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña”, es decir, que no afecta a los tributos de competencia estatal, por ejemplo, el Impuesto sobre Sociedades. Pero el voto particular del Magistrado Conde de Martín de Hijas, va más allá, y afirma que la sentencia debería haber señalado que el precepto es admisible “interpretado en el sentido de que sólo se refería a los tributos de la Generalitat, lo que entrañaría sin riesgos futuros de posibles interpretaciones contrarias, la declaración de inconstitucionalidad de la referencia del precepto a otros tributos”. En suma, el art. 11, 3 no podría decidir la exención de los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogos en el Impuesto sobre Sociedades, ni pretender, por tanto, mantener una exención que el legislador estatal ha suprimido.

²⁶ Esta modificación del art. 9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, preveía no obstante, la adaptación de los organismos autónomos de carácter comercial, industrial o financiero a lo establecido por la LOFAGE. La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, disponía en su Disposición Transitoria Tercera, apartado tres, que las entidades que como consecuencia de su adaptación pierdan su exención conservarán transitoriamente la misma, independientemente que la adaptación se haya producido con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 1998; véase FALCON Y TELLA-MARTIN FERNANDEZ-NATERIA HIDALGO- ROZAS VALDES-SERRANO ANTON; *Medidas Fiscales para 1998*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1998, pag. 156.

Convendría también haber emprendido una reforma verdaderamente innovadora de la Ley 11/1992, de Régimen Financiero y Presupuestario, para incluir entre los organismos que desarrollan funciones públicas a aquéllos constituidos bajo la fórmula de fundaciones. La cuestión es especialmente importante en lo relativo a la prestación del servicio público sanitario, pues la incorporación de este tipo de entidades a una ley de régimen financiero y presupuestario terminaría con una situación caracterizada por una manifiesta endeblez normativa que lleva a que, en la práctica, las fundaciones públicas se estén rigiendo por la Ley 7/1983, de 22 de junio, de fundaciones de interés gallego, modificada por la Ley 11/1991, de 8 de noviembre. Norma que obviamente no está pensada para disciplinar el régimen jurídico de entidades que prestan servicios públicos esenciales²⁷, aun cuando el Reglamento, aprobado por Decreto 248/1992, de 18 de junio, haya pretendido ensanchar su ámbito de aplicación, excediéndose de los límites legales y la Ley 10/1996, de 5 de noviembre, de actuaciones de entes y empresas participadas en las que tiene participación mayoritaria la Xunta de Galicia, las equiparase a ciertos entes públicos sólo a efectos de personal y contratación. Por otro lado, en el ordenamiento estatal se ha comenzado a disciplinar este tipo de entidades. Así, junto a las entidades públicas empresariales y a los organismos autónomos contemplados en la LOFAGE, la ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, incluyó la regulación de las fundaciones públicas sanitarias en su art. 111, con el fin de “acomodar técnicamente el contenido y espíritu de la LOFAGE a las peculiaridades del ámbito sanitario”²⁸, lo que sería posteriormente desarrollado por el RD 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión del Servicio Nacional de Salud. Al margen de la valoración que merezcan estas formas de gestión, por su condición de exponentes de la “huida del Derecho Administrativo”, lo peor que se puede decir de ellas es que carecen de una regulación que las equipare a las otras formas de organización pública.

Por último, se incluyen en este Título Preliminar, la mención a los convenios, acuerdos y transferencias. En concreto, el art. 13,1 pretende asegurar que en los convenios que se suscriban con otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios de exclusiva competencia de las mismas deberán establecerse las cláusulas precisas para asegurar en todo momento la aplicación de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario. La Ley no viene más que a precisar un requisito respecto a estos convenios

²⁷ La forma de fundación pública, estaba prevista como una de las maneras en que podía llevarse a cabo la gestión directa de los servicios locales y provinciales, en los arts. 67, 2 y 85 y 88 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; véase SOSA WAGNER, F., *La gestión de los servicios públicos locales*, Civitas, Madrid, 1992, pags. 58 a 64.

²⁸ De esta manera, las fundaciones públicas sanitarias se incorporan al conjunto de entidades de naturaleza o de entidad pública admitidas en derecho para la gestión del Sistema Nacional de Salud, a que se refiere el Decreto-Ley 10/1996, de 17 de junio, que daría lugar a la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

previstos en el art. 145, 2 de la Constitución, y 35 del Estatuto de Autonomía, en una materia en la que el Estatuto de Autonomía de Galicia se ha caracterizado por una regulación restrictiva, ya que el art. 35, 1 los limita a materias de “exclusiva competencia” de la Comunidad Autónoma, exigencia no contemplada en la Constitución²⁹. La Comunidad Autónoma de Galicia sólo puede celebrar este tipo de convenios sobre materias en las que goce de una competencia exclusiva, no sobre su total ámbito competencial. El Texto Refundido mantiene la pretendida cautela, ya contemplada en la Ley 11/1992, de que se garantice la aplicación de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario. Pero la eficacia de esta disposición es también dudosa, ya que de no respetarse, el art. 35,1 del Estatuto sólo contempla el reparo de las Cortes Generales, a quienes se deben comunicar el Convenio. Tal reparo, no afecta a la validez del mismo, y supone un control de tipo político y no jurídico, por lo que difícilmente se va a entrar en un análisis sobre la normativa aplicable³⁰.

IV. RÉGIMEN DE LOS RECURSOS Y LAS OBLIGACIONES

El Texto Refundido mantiene, en la misma línea que la Ley 11/1992, de régimen financiero y presupuestario de Galicia, un Título I dedicado al contenido de la Hacienda de la Comunidad. Partiendo de la visión objetiva que en esta ley se asume del concepto *Hacienda Pública*, la misma está integrada por los recursos (Capítulo I) y las obligaciones (Capítulo II).

En lo referente a los recursos de la Hacienda Autonómica, el art. 14 mantiene la misma redacción contenida en la Ley 11/1992 y que no es más que una reproducción del contenido del art. 44 del Estatuto de Autonomía. En este artículo 14 aparecen relacionados los “recursos”, equiparados a “derechos económicos”. Los mismos, en la clásica definición que nos diera hace ya algún tiempo el profesor SAINZ DE BUJANDA, han de entenderse como las “situaciones activas de cobro”, de contenido económico que se generan por apli-

²⁹ CAAMAÑO DOMINGUEZ, F., “Art. 35, 2”, *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia*, op. cit., pag. 696.

³⁰ Califica los efectos de la comunicación a las Cortes Generales “condición suspensiva de la eficacia” y no “requisito de validez”, MENENDEZ REXACH, A., *Los convenios entre Comunidades Autónomas*, IAL, Madrid, 1982, pag. 119. También CAAMAÑO DOMINGUEZ, F., “Art. 35, 2”, *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia*, op. cit., pag. 694.

³¹ SAINZ DE BUJANDA, F., “Hacienda Pública, Derecho Financiero y Derecho Tributario”, en *Hacienda y Derecho*, vol. I, IEP, Madrid, 1955, pags. 3 y ss.

cación de diversas instituciones financieras, y que se diferencian, por un lado, de esas mismas instituciones financieras – por ejemplo, una institución financiera es el Impuesto sobre emisiones contaminantes, o el Canon Hidrológico, o las Tasas por Expedición de Certificaciones, o la Deuda Pública a corto – . Las instituciones financieras sólo son “derechos económicos” cuando la Hacienda Pública decide acudir a ellas y aplicarlas efectivamente. Y por otro, los recursos, han de diferenciarse de los “ingresos”, pues estos son “fondos que afluyen al Tesoro público mediante el ejercicio de estos derechos”, por ejemplo, la recaudación por un determinado tributo³¹. Al incluir en un artículo los “recursos” como “derechos económicos”, la Hacienda gallega manifiesta su voluntad de acudir a diversas instituciones financieras para, mediante su aplicación, obtener ingresos³².

Y es en lo relativo al régimen de ingresos donde encontramos la primera novedad de peso en este Texto Refundido, con respecto al contenido de la Ley 11/1992, de 7 de octubre, de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia. En concreto, en lo referente a la prescripción de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad gallega. En efecto, el art. 23, 1 mantiene la prescripción quinquenal del derecho de la Hacienda gallega a reconocer y liquidar créditos a su favor y al cobro de los créditos reconocidos y liquidados. Ello supone, dicho sea de paso, mantener este régimen de doble plazo de prescripción que ya empieza a ser cuestionado³³. Pero, al margen de esto, el Texto Refundido introduce en su art. 23, 2, la salvedad de que “en todo caso, el plazo de prescripción a que se refiere el punto anterior será de cuatro años para todos los recursos derivados de los tributos propios de la Comunidad Autónoma.

Lo que ha hecho el Texto Refundido es incorporar una disposición que ya se había adoptado a través del art. 8 de la Ley gallega 7/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias, de Régimen Presupuestario, Función Pública y Gestión. De lo que se trata es de poner al día la normativa en materia de prescripción tributaria, e incorporar el plazo de prescripción de cuatro años establecido por el art. 24 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, la que, ha supuesto la modificación del art. 64 de la Ley General Tributaria por la Disposición Final Primera de la propia Ley 1/1998. Conviene recordar que el art.1,1 de la propia Ley de Derechos y Garantías establece su aplicación a todas las Administraciones Públicas. Y así debe ocurrir con todos los preceptos de

³² El Texto Refundido considera también ingresos, a efectos de disponer que se tutelen mediante los mecanismos inherentes a la potestad de autotutela, sobre todo la vía de apremio, por ejemplo, a las subvenciones a reintegrar – art. 78, 5 del Texto Refundido -.

³³ Es el caso de PALAO TABOADA, C., Para este autor, “en la doctrina española no se encuentra fácilmente una reflexión acerca de la justificación del sistema dual de prescripción”; Véase el comentario a la sentencia de la AN de 10 de junio de 1999 – *Revista de Estudios Financieros*, nº 199, pag. 166. No obstante este autor reconoce que este doble plazo de prescripción supone una garantía para el ciudadano, en el sentido de que la interrupción de uno de estos plazos – en concreto, del plazo para liquidar – no puede suponer interrumpir también el plazo para cobrar. En el mismo sentido, MARTIN CACERES, F., *La prescripción del crédito tributario*, Marcial Pons, Madrid, 1994, pag. 48 y ss.

la Ley, salvo aquellos que por su naturaleza estén dirigidos exclusivamente a la Administración del Estado³⁴. Por tanto, parece lógica la decisión de incorporar este plazo de prescripción de cuatro años a la normativa autonómica.

Fuente de innumerables controversias en lo relativo a este acortamiento del plazo de prescripción ha sido, en la normativa tributaria estatal, su régimen transitorio. Este se contiene, fundamentalmente, en el apartado 2 de la Disposición Final Séptima de la Ley 1/1998, cuando se dice que el plazo de cuatro años entra en vigor el 1 de enero de 1999. Pues bien; la Disposición Adicional Tercera del Texto Refundido asume una previsión de transitoriedad similar; la que se encontraba en la Disposición Final Primera de la Ley 7/1998, de 30 de diciembre, que establecía la aplicación del art. 8 en el ejercicio de 1999. Ello ha generado en la normativa estatal problemas que, sin lugar a dudas, se reproducirán en la autonómica. Sobre todo, si la supuesta “entrada en vigor” el 1 de enero de 1999, supone que el nuevo plazo se aplica incluso a las prescripciones en curso, es decir, si se cuentan cuatro años desde la última interrupción que se haya producido³⁵. Ello supondría en la práctica entender, como lo ha hecho el TS en su sentencia de 6 de febrero de 1999, que en materia de prescripción se aplica la legislación vigente al tiempo de consumarse la misma³⁶.

Salvo esta novedad referida a la prescripción, el texto normativo es absolutamente continuista. Una vez más la crítica principal que se puede formular al Texto Refundido es, precisamente, la condición de tal, y el que no se haya optado por una verdadera ley reformadora que actualizase determinadas cuestiones referidas a ingresos y obligaciones de la Hacienda Pública autonómica.

Así, en lo relativo a la **disponibilidad de bienes y derechos**, se establece en el art. 18, de modo absoluto, el principio de indisponibilidad de los créditos públicos y la consiguiente prohibición de enajenar, gravar o arrendar los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, “salvo en los supuestos y en las condiciones previstas en la ley” (art. 18,2) y la imposibilidad de conceder exenciones, condonaciones, rebajas o moratorias, en el pago

³⁴ LASARTE ALVAREZ, J., cita por ejemplo el art. 4 referido a las leyes tributarias que, obviamente no se aplica a las Haciendas Locales, como tampoco el art. 37 referido a las reclamaciones económico-administrativas, o el art. 26, relativo al Plan Nacional de Inspección. “Comentarios al art. 1 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes”, en *Comentarios a la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes*, CEF, Madrid, 1999, pag. 31.

³⁵ Esta es la opinión de FALCON Y TELLA, R., “Aspectos positivos y negativos de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes (II): especial referencia a la aplicación retroactiva del plazo de prescripción y a la indemnización del coste de los avales”, *Quincena Fiscal*, nº, 7, 1998, pags. 5 y 6.

³⁶ La propia administración tributaria, a través de la Res. de la DGT de 1 de abril de 1999, en respuesta a la Consulta 512/1999, en tiende que el nuevo plazo de cuatro años se aplica a partir del 1 de enero de 1999, cualquiera que sea la fecha de realización del hecho imponible.

de los derechos a favor de la Hacienda Pública gallega, “salvo en los casos y en la forma que se determinen en las Leyes”. La razón de ser de esta indisponibilidad es, tanto el valor preeminente del principio de reserva de ley en materia financiera, y, sobre todo, tributaria, como el interés público tutelado por las normas que regulan los ingresos públicos que, supuestamente sería, “el de procurar al Estado (u otro ente público territorial) los medios económicos necesarios para el ejercicio de su actividad y asegurar el mejor empleo de dichos medios para la consecución de los fines estatales”³⁷. Pero no es verdad que el interés público tutelado por las normas financieras impida siempre renunciar a todo o parte de un ingreso. Y así, la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos del Estado para 1989, dio nueva redacción al art. 39, 2 de la Ley General Presupuestaria, en el sentido de permitir a la Administración intervenir en los acuerdos o convenios concursales. En el mismo sentido la Ley 25/1995, de 20 de julio, dio nueva redacción al art. 129, 4 de la Ley General Tributaria. Por tanto, se “suaviza” la supuesta indisponibilidad del crédito tributario, y en ese sentido debería haberse orientado la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario gallega , al menos para reconocer facultades para suscribir convenios en procesos concursales. Como dice VARONA ALABERN, “...si es el interés público lo que fundamenta el principio de indisponibilidad del crédito tributario, es ese mismo interés el que ahora aconseja conceder facultades dispositivas a la Hacienda”³⁸.

En cuanto a las **prerrogativas de que está investida la Hacienda Pública para hacer efectivos sus créditos**, se reconoce la autotutela ejecutiva (art. 19) y la regla general de no suspensión del procedimiento de apremio (art. 20); garantías ambas tradicionales a favor de los entes públicos y justificadas por el Tribunal Constitucional en el principio constitucional de eficacia – sentencia 22/1984, de 17 de febrero, FJ 4º -. No resulta extraña la regulación contenida en el Texto Refundido. Y hasta cierto sentido es lógica pues sigue las principales orientaciones de la legislación del Estado, aunque no en todos los casos, ya que se sigue manteniendo – art. 20, 3 y 4 – la ejecución en vía de apremio cuando las reclamaciones formuladas en vía administrativa fuesen denegadas, permitiendo la suspensión “si el interesado demuestra que de la ejecución puedan derivarse perjuicios de imposible o difícil reparación”. Por el contrario, el art. 31, 2 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, establece para los derechos de carácter tributario la imposibilidad de que la Administración proceda a enajenar los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto de liquidación de la deuda ejecutada sea firme, no sólo en vía administrativa sino también en vía judicial. Pero no está de más proponer que el régimen de la suspensión de la ejecutividad de los actos y de los procedimientos administrativos de apremio deba ser objeto de una profunda renovación. En ese sentido, la vía abierta por el citado art. 31, 2 de la Ley 1/1998, aunque referido a los

³⁷ RODRIGUEZ BEREIJO, A., *Introducción al estudio del Derecho Financiero*, IEF, Madrid, 1976, pag. 54.

³⁸ VARONA ALABERN, J.E., *Extinción de la obligación tributaria: novación y confusión*, Lex Nova, Valladolid, 1998, pag. 64.

apremios tributarios, marca una línea a seguir; si no se pueden enajenar los bienes embargados hasta que no haya firmeza del acto de liquidación, el embargo se convierte en una medida cautelar, por lo que la suspensión de los actos, en este caso de liquidación tributaria, pasa a ser automática.

Y probablemente esa sea la línea a seguir; no se olvide que el privilegio de autotutela ejecutiva sólo tiene sentido si no existe oposición por parte de los particulares. Pero si existe, entra el juego del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que abarca el derecho a la suspensión y a la justicia cautelar. En ese caso, debe admitirse la suspensión automática de los actos, y la adopción de medidas cautelares, cuyo uso debería extenderse³⁹.

Además, entendemos que la redacción del art. 20, 3 del Texto Refundido permite una interpretación flexible de la suspensión de la ejecución del apremio cuando se deriven perjuicios de imposible o difícil reparación. Aunque se dice que la Administración “podrá” suspender, entendemos que deberá hacerlo, incluso de oficio, cuando se acredite la concurrencia de un *fumus boni iuris*, que es lo que late detrás de este art. 20, 3. Y evidentemente siempre que lo pida el interesado que acredite ese *fumus*. De hecho, el art. 20, 4 del Texto Refundido permite a la Administración suspender sin garantía si el interesado demuestra que ha existido en su perjuicio error material o aritmético en la determinación de la deuda que se le exija. A nuestro juicio deberían contemplarse también todos aquellos supuestos en que se invoque una causa de nulidad de pleno derecho en el acto de liquidación de la deuda, tal y como propone la sentencia de la AN de 27 de junio de 1999, para los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el art. 62 de la Ley 30/1992. Pero el principio *fumus boni iuris*, debe suponer además, como recientemente ha reconocido el TSJ de Valencia, en sentencia de 9 de abril de 1999, que, aunque el interesado no cumpla los requisitos exigidos para la suspensión relativos a justificar que la ejecución causaría perjuicios de difícil reparación y la constitución de una garantía suficiente, la “concurrencia de una acusada apariencia de buen derecho obvia el tener que acreditar un perjuicio de elevada intensidad”⁴⁰ y debe suponer la suspensión.

De no admitirse este efecto expansivo del *fumus boni iuris*, la normativa deberá en el futuro tender a flexibilizar la exigencia de acreditación de los perjuicios de imposible o difícil reparación. Aun cuando el Auto del TSJ de Cataluña de 25 de noviembre de 1996 estableció que debería recaer en la Administración la carga de la prueba de que la no suspensión provocaba perjuicios a los intereses públicos, esta tesis fue desautorizada por el TS en su sentencia de 9 de abril de 1999. Pero el TS en esta sentencia dice que basta que el particular que pide la suspensión aporte un “indicio” de prueba, y eso es lo que debería refle-

³⁹ Véase, al respecto, FALCON Y TELLA, R., “Tres propuestas en materia de suspensión”, *Quincena Fiscal*, nº 18, 1997, pag.5.

⁴⁰ *Gaceta Fiscal*, nº 177, junio 1999, pags. 149 a 151.

jarse en las normas. Debe ser la Administración la que a partir de los indicios de apariencia de buen derecho, pruebe “la grave perturbación a los intereses públicos”.

Por lo demás, y en lo relativo al **interés de demora**, el art. 21 lo fija en el importe del art. 58,2 de la LGT (“ interés legal del dinero vigente a lo largo del período en aquél se devengue, incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otra cosa”). La remisión de la norma autonómica a la Ley estatal, a efectos de fijar el interés de demora, se justifica por la doctrina del Tribunal Constitucional, que en sentencia 14/1986, de 31 de enero, manifestó sin ambages que “la determinación cuantitativa del interés de demora de estos créditos ha de merecer un tratamiento unitario en todo el territorio nacional” (FJ 11º), por lo que es al Estado a quien corresponde fijarlo.

En lo referente a las **obligaciones**, a las que se dedica el Capítulo II, tampoco se detectan novedades de importancia. El Capítulo se refiere al nacimiento y exigibilidad de las obligaciones públicas – con la mención a la conocida “regla del servicio hecho” – (art. 24), inembargabilidad de los derechos, fondos y valores de la Hacienda Pública (art. 25), los intereses a cargo de la Administración autonómica (art. 26) y la prescripción de las obligaciones públicas (art. 27).

También aquí debería haberse aprovechado la adopción de una Ley nueva para introducir ciertas modificaciones. Algunas evidentes, como cuando se dice en el artículo 27 que prescriben a los cinco años el derecho al reconocimiento o liquidación de toda obligación pública; debería puntualizarse que si se trata de una obligación de devolución de ingresos indebidos la prescripción será de cuatro años. Así lo impone el ya mencionado art. 24 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, que ha supuesto la modificación del art. 64 de la LGT por la Disposición Final Primera de la propia Ley 1/1998 y que, como dijimos, es aplicable a todas las Administraciones Públicas.

Otras modificaciones que se deberían haber emprendido son de mayor calado; así la inembargabilidad de caudales públicos puede ser puesta en entredicho⁴¹, y a nuestro juicio no debería extenderse a todos los bienes de la Hacienda de la Comunidad. Deberían quedar fuera los bienes patrimoniales, como lo ha reconocido para las Corporaciones Locales la sentencia del Tribunal Constitucional 166/1998, de 15 de julio. Esta resolución entiende que la inembargabilidad de bienes públicos debe limitarse a los de dominio público, a los que la Constitución en su artículo 132 otorga un tratamiento privilegiado en virtud de su afección al uso público; no ocurre lo mismo con los bienes patrimoniales (FJ 11, B). Hubiese sido también deseable un *aggiornamento* del régimen de intereses a satisfacer por la Administración. El art. 26 del Texto Refundido reproduce el art. 45 de la Ley General

⁴¹ Véase MARTIN QUERALT, J., “La ejecución de sentencias en el orden contencioso-administrativo”, *Tribuna Fiscal*, nº 94-95, 1998, pag. 5.

Presupuestaria en todos sus términos, incluso el mantenimiento del régimen de la necesidad de denuncia de mora. Pero este precepto que ha servido de modelo a la Ley 11/1992 y que se ha mantenido en su literalidad en el Texto Refundido está siendo cuestionado por diversos flancos. No sólo porque los intereses deberían a empezar a computarse desde la adopción de la sentencia, y no desde su notificación, que puede retrasarse⁴². Sino porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que tiene una, hasta cierto punto, desconcertante jurisprudencia sobre el tema, expresada por las sentencias 69/1996, de 18 de abril, 23/1997, de 11 de febrero y 141/1997, de 15 de septiembre, ha manifestado, sin embargo en la sentencia 23/1997, que la exigencia de esperar tres meses antes de abonar intereses podría ser contraria al principio constitucional de igualdad, por romper la regla general de que toda obligación líquida genera intereses desde el momento de su liquidez. Ello no da base a postular la necesidad de suprimir el plazo de tres meses que se contempla en el art. 26 del Texto Refundido. Pero sí se deberían haber introducido otras modificaciones; se debería haber recogido la doctrina que el propio Tribunal Constitucional defendió en la sentencia 69/1996, de 18 de abril, en el sentido de que la sentencia a partir de la cual han de contarse los intereses es la dictada en primera instancia. Y hubiera sido bueno tener en cuenta la previsión del art. 106, 1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En este precepto, y para el caso de obligaciones que nazcan de sentencias condenatorias a la Administración, se prevé que una vez transcurridos tres meses desde que la sentencia firme se comunique al órgano que debe cumplirla, pueda instarse la ejecución forzosa, pudiendo la autoridad judicial incrementar en dos puntos el interés legal a devengar. Nada de esto se ha recogido en la normativa autonómica.

V. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y GARANTÍAS

El título II del Texto Refundido incluye uno de los temas más importantes del régimen financiero y presupuestario; las llamadas operaciones de endeudamiento; término que ya se encontraba en la Ley 11/1992 (aunque, curiosamente, en la misma se decía “operaciones de endeudamientos”; el Texto Refundido corrige el plural)⁴³. El contenido del Título II del Texto Refundido equivale al Título IV de la Ley General Presupuestaria. Aunque este último lleva por título “De las operaciones financieras”; en ambos casos el Título comprende el régimen de lo que tradicionalmente se conoce como “Deuda Pública” – denominada en

⁴² Cierto es que fijar como fecha de referencia, la de la notificación supone una *plus* de seguridad jurídica, pero también es verdad que los riesgos de un retraso deliberado en las notificaciones son grandes para un particular que puede ver aumentada su deuda de intereses. La solución sería entender notificada la resolución, a efectos del cómputo de intereses, una vez transcurrido un plazo, que debería ser necesariamente breve.

⁴³ Este Título II, dedicado a las operaciones de endeudamiento y garantía tiene su origen en la segregación operada por la Ley 11/1992, de 7 de octubre, de régimen financiero y presupuestario de Galicia. Según su Exposición de Motivos, las operaciones de endeudamiento no deben tratarse conjuntamente con el contenido de la Hacienda Gallega, porque se estaría confundiendo lo que es éste contenido “con una de las posibles formas de financiación para el caso de que los recursos propios no sean suficientes para atender a las obligaciones previstas”.

el Texto Refundido gallego, “operaciones de endeudamiento” – y los avales concedidos por las entidades públicas territoriales. Quizás no sea técnicamente muy correcto que el Texto Refundido que nos ocupa denomine al Título II, “operaciones de endeudamiento”, pues los avales no suponen, en sí mismos, endeudamiento actual – aunque sí *potencial* – sino que, como correctamente señala el epígrafe del Capítulo II, son *garantías*⁴⁴.

Configurado como ingreso de las Comunidades autónomas en el art. 157, 1, e) de la Constitución y en los arts. 4,1 f) y 14 de la LOFCA, el art. 47 del Estatuto de Autonomía se refiere también a la Deuda Pública “para financiar gastos de inversión”. Se trata, como ha reconocido el Tribunal Constitucional en su sentencia 11/1984, de 2 de febrero, de una fuente de ingreso implícita en el concepto mismo de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, perfilado en el art. 156 de la Constitución (FJ 4º), por lo que es lógico que la norma que intenta plasmar las líneas maestras de la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Galicia le dedique buena parte de su articulado. A ello hay que añadir que al endeudamiento, como fuente de ingreso, han acudido con enorme profusión las Comunidades Autónomas en los últimos años⁴⁵, por lo que se trata de una institución que exige una regulación acorde con la importancia que ha llegado a alcanzar.

El concepto de Deuda Pública ha experimentado una importante modificación a partir de la entrada en vigor del Tratado de la Unión europea, concertado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. En el mismo se establecían una serie de requisitos de disciplina presupuestaria, que alcanzan el rango de disposiciones jurídicamente vinculantes; entre ellas la obligación de que la Deuda Pública del conjunto de las Administraciones de los Estados miembros no sobrepase el 60 % del PIB del país. A lo que se une la llamada “prohibición del auxilio financiero, por parte de los Estados miembros, en asunción de compromisos deudores de los gobiernos regionales⁴⁶. Estas limitaciones, que se encuadran entre las

⁴⁴ El Tribunal Constitucional ya había rechazado la naturaleza de operación de crédito público de los avales en la sentencia 179/1987, de 12 de noviembre. Para NAVARRO FAURE, A., “la diferencia entre ambos supuestos (deuda y aval) radica en su naturaleza jurídica, ya que el contrato de préstamo es, en definitiva, el substrato básico de las distintas modalidades de deuda pública, mientras que el aval constituye una operación de garantía personal en la que el ente público asume eventualmente, la posición deudora, pero no en calidad de prestatario”, *Aspectos jurídico-financieros del déficit público*, Generalitat Valenciana, Valencia, 1993, pag. 133.

⁴⁵ Para un estudio de las causas de la *eclosión* del recurso al endeudamiento por parte de las Comunidades Autónomas, véase SUAREZ PANDIELLO, J., “Las Comunidades Autónomas y su endeudamiento. Un test sobre sus causas”, en *La financiación de las Comunidades Autónomas*, Moldes, E.-Puy, P.; Minerva Ediciones, Santiago de Compostela, 1996, pags., 190 a 195, quien sitúa entre las causas del endeudamiento, las deficiencias del sistema de financiación que lleva a un desajuste en lo que reciben determinadas Comunidades Autónomas para gastos de inversión., y el crecimiento exponencial del gasto público. Para NAVARRO FAURE, A., la utilización ordinaria del recurso a la deuda pública se debe a la conjunción de dos elementos: por un lado, el crecimiento del gasto público, y por otro, la decisión política de no financiar ese aumento del gasto público por la vía tributaria o patrimonial; *Aspectos jurídico-financieros del déficit público*, Generalitat Valenciana, Valencia, 1993, pag. 140.

⁴⁶ LAGO MONTERO, J.M., “El endeudamiento de las Comunidades Autónomas tras el Tratado de la Unión Europea”, *La Constitución española en el ordenamiento comunitario europea (I)*, Vol. II, Dirección General de lo Contencioso, Madrid, 1995, pag. 2177.

medidas de control del déficit, pasan a tener carácter permanente una vez lograda la Unión Monetaria, a través del llamado Pacto de Estabilidad, jurídicamente vinculante⁴⁷

El Tratado de Maastricht viene a prohibir, además, los mecanismos privilegiados de colocación de la Deuda Pública, que hasta el momento eran frecuentes, por lo que, como señala PEREZ DE AYALA, este Tratado ha supuesto una modificación en el concepto de Deuda Pública. Hay un concepto jurídico-formal de Deuda Pública, que es el que se recoge en el art. 28 del Texto Refundido que comentamos (“capitales tomados a préstamo por la Xunta de Galicia o por sus organismos autónomos”), en la línea de la definición recogida en el art. 135 de la Constitución y en el 101 y siguientes de la Ley General Presupuestaria. Pero existe un segundo concepto, elaborado por la Ciencia de la Hacienda, según el cual “sólo merece calificarse como endeudamiento el que es contraído en virtud de una operación de préstamo o crédito contratada por el ente público en el mercado de capitales”. Este es el concepto que ha asumido el Tratado de la Unión Europea y el que ha de prevalecer en nuestro ordenamiento⁴⁸.

Sin embargo no se ha notado en nuestro ordenamiento autonómico una verdadera renovación normativa para adaptar la regulación del endeudamiento público de las Comunidades Autónomas a las directrices del Tratado de la Unión. El régimen contenido en el Título III, Capítulo Primero del Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario es el mismo que el que figuraba en la Ley 11/1997, de 7 de octubre. Además de la citada definición del endeudamiento, basada en una acepción jurídico-formal de la Deuda Pública, la norma mantiene las reglas del destino para gastos de inversión de las operaciones de más de un año (art. 30), límite que podría desaparecer sin problema, como propone LAGO MONTERO, al amparo de las disposiciones del Tratado de Unión europea⁴⁹. Se mantiene también en el art. 28, 2 del Texto Refundido el límite de una carga financiera inferior al 25 % de los ingresos corrientes. También aquí se debería haber sido más atrevido; a pesar de que este límite viene impuesto por el art. 14, 2 de la LOFCA, conven-

⁴⁷ Como se apuntó en la Conferencia de Dublín de septiembre de 1996. El Pacto de Estabilidad que obliga a los Gobiernos de la zona euro a presentar a la Comisión los llamados Programas de Estabilidad (el primero correspondiente al período 2000-2003).

⁴⁸ PEREZ DE AYALA, J.L., “La Unión económica y monetaria y sus repercusiones en el Derecho Financiero español”, *Sistema Fiscal Español y Armonización Europea*, Marcial Pons, Madrid, 1995, pag. 206.

⁴⁹ Aunque se trata de un límite, como señala LAGO MONTERO, J.M., “poco operativo en la práctica, dada la existencia de un presupuesto único y la vigencia del principio de caja única”, “El endeudamiento de las Comunidades Autónomas tras el Tratado de la Unión europea”, op. cit., pag. 2180 y 2183. Por eso se ha interpretado esta limitación por parte de algunos autores de una manera, un poco *sui generis*. Así, para FALCON Y TELLA, R., el destino del crédito a gastos de inversión puede entenderse cumplido, “por el mero hecho de que las operaciones de crédito no superen la suma de los gastos de inversión autorizados por el Presupuesto durante el ejercicio correspondiente, sin que sea posible el control sobre el efectivo destino de las sumas obtenidas en cada operación concreta, ya que dichas sumas se destinan genéricamente a la cobertura de los totales gastos autorizados”; “Las operaciones de crédito de las Comunidades Autónomas”, *Civitas, REDF*, nº 51, 1986, pag. 365.

dría precisar a qué operaciones de endeudamiento afecta y en qué momento se han de medir los ingresos corrientes a que se refiere⁵⁰. *De lege ferenda*, se trata de un límite que debería desaparecer, teniendo que subsumirse en el límite comunitario de la Deuda Pública de todas las Administraciones del Estado, lo que requeriría articular reglas de distribución del montante total de la Deuda Pública entre las distintas Administraciones⁵¹.

La Deuda Pública de las Comunidades Autónomas sigue estando sujeta al régimen de autorizaciones para su emisión, impuesto también por el *bloque de constitucionalidad*, a través del art. 14, 3 de la LOFCA. Se suele decir que desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión europea el escenario ha cambiado notablemente; ahora es deuda pública la que se suscribe en el mercado de capitales⁵² y existe una limitación en el montante de la Deuda (60 %) del PIB , que afecta al conjunto de Administraciones Públicas. Todas ellas son, por tanto, competidoras, en el sentido de que el montante total de Deuda Pública se reparte entre todos los niveles de entidades territoriales. La emisión de Deuda se ha convertido en una especie de *juego de suma cero*, pues habrá un volumen máximo, *a repartir*, entre todas las Administraciones territoriales. Por eso se argumenta que el hecho de que el Estado tenga que autorizar genera una sospecha de falta de objetividad⁵³. Sin embargo el régimen de autorizaciones en materia de endeudamiento por las Comunidades Autónomas esta hoy más justificado que nunca. Recuérdese que el límite del endeudamiento, impuesto por el escenario europeo, afecta al volumen de deuda de las Comunidades Autónomas, pero que es el Estado quien responde de la política económica general, ante las instancias comunitarias. Este régimen de autorizaciones fue configurado por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 11/1984, de 2 de febrero y, sobre todo, 179/1987, de 12 de noviembre, en su sentido más amplio. En esta última resolución se entiende (FJ 5º) que las exigencias de autorización del art. 14 de la LOFCA se refieren a todo tipo de Deuda Pública. Y ello, a sabiendas de que algunos Estatutos de Autonomía (Cataluña, País Vasco) establecen unos criterios más flexibles. El Tribunal Constitucional ha entendido, en 1987, que deberían imponerse los criterios del art. 14 de la LOFCA, porque de lo contrario se permitiría excluir en materia de endeudamiento a una Comunidad Autónoma de las directrices de una política económica única para todo el Estado. Estas argumentaciones son ahora más válidas si cabe, si tenemos en cuenta que, a las justifica-

⁵⁰ Como, por otro lado, sí ocurre con la Deuda Pública de las Corporaciones Locales; véanse artículos 52, 53 y 54 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

⁵¹ LAGO MONTERO, J.M., “El endeudamiento de las Comunidades Autónomas tras el Tratado de la Unión europea”, op. cit., pag. 2184.

⁵² Véase al respecto el Informe *Los mercados de deuda pública ante la unión económica y monetaria*, Instituto de Estudios y Análisis Económico, Secretaría de Estado de Hacienda, 1993, en especial pags . 197 y ss. Véase también las consideraciones expuestas sobre mercado de deuda pública y libre movilidad de factores, como implicaciones de los acuerdos de Maastricht, en pags. 183 a 185.

⁵³ Sobre las mismas, TEJERIZO LOPEZ, J.M., “La coordinación del endeudamiento”, en *Coordinación financiera estatal, autonómica y local*, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1984, pags. 90 y ss.

ciones de política económica general que se pueden esgrimir para defender una aplicación estricta del régimen de autorizaciones del endeudamiento de las Comunidades Autónomas, se suma la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de los objetivos económicos de la Unión Monetaria. Y, en cualquier caso, las autorizaciones deben valorarse dentro del conjunto de medidas previstas en el art. 14, 4 de la LOFCA, de coordinación del volumen de Deuda Pública estatal con el endeudamiento autonómico y local, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y de las técnicas de distribución entre los tres niveles de Gobierno central, autonómico y local del montante máximo de Deuda Pública a emitir, a la vista de la que ya exista en circulación. También se incluirán dentro de estas medidas los mecanismos de distribución entre las Comunidades Autónomas, del montante máximo de la Deuda Pública a emitir por las propias Administraciones autonómicas⁵⁴.

El Texto Refundido, fiel a lo que es su función como norma jurídica, se ha limitado sin embargo a modificaciones de escasa entidad. Respecto a las operaciones de endeudamiento, la única innovación que se detecta es que, en algunos preceptos – por ejemplo, art. 34 relativo a la contabilización y art. 35, referido a los requisitos para la transmisión de los títulos -, se suprime la mención a los *pagarés*, pasando a hablarse de *títulos de pago*. La única justificación radica en el desuso del término *pagaré* en el ámbito de las operaciones de crédito de las Comunidades Autónomas⁵⁵. Se opta por un término como el del título de pago, con la idea de abarcar títulos diferentes al pagaré. Pero lo cierto es que el pagaré es un título que, además de incorporar una promesa de pago, constituye una “técnica de colocación de capitales a corto y medio plazo”⁵⁶, por lo cual es especialmente adecuado para configurarse como instrumento de Deuda Pública. En cualquier caso la cuestión es puramente terminológica– prevalecerá siempre el régimen jurídico positivo frente al *nomen iuris* que le de el legislador -, y, además, la mención a los pagarés o títulos de pago cuando se habla de Deuda Pública no se hace para atribuirle las consecuencias jurídicas de un tipo documental determinado, sino para calificarlos como títulos a corto plazo. En ese sentido los *títulos de*

⁵⁴ LAGO MONTERO, J.M., “El endeudamiento de las Comunidades Autónomas tras el Tratado de la Unión europea”, op. cit., pags.2185 y 2186. Estas necesidades de coordinación y de un poder especial al respecto a favor del Estado son resultado de una evidencia; quien responde del cumplimiento de los compromisos de endeudamiento ante la Unión Europea es el Estado. Sin embargo, las limitaciones del volumen de Deuda Pública afectan a todas las Administraciones Públicas. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, tienen en la capacidad de emitir deuda una de las más claras manifestaciones de su autonomía financiera. Véase al respecto, sobre la relación entre competencias de Comunidades Autónomas y el desarrollo y ejecución de normas comunitarias, la clásica sentencia del TC 252/1980, de 20 de diciembre.

⁵⁵ El uso de la palabra *pagaré* en la normativa del Estado para referirse a instrumentos de deuda pública se inicia con el RD 1849/1981, de 20 de agosto, creándose de esta manera unos títulos que inicialmente tuvieron la única finalidad de financiar gastos de inversión, aunque con posterioridad se convirtieron en el arquetipo de títulos emitidos a corto plazo, con un plazo de amortización inferior a tres años. Sobre el tema, véase nuestro trabajo, “Régimen jurídico de las nuevas modalidades de deuda pública; pagarés y letras del Tesoro”, *RDFHP*, nº 205, 1990.

⁵⁶ Véase al respecto. ARROYO MARTINEZ, I., *Voz “pagaré”, Enciclopedia Jurídica Básica*, Vol. III, op. cit., pag. 4726.

pago siguen teniendo un plazo de vencimiento igual o inferior a dieciocho meses y, al igual que antes, los pagarés son ejemplo de *deuda a corto*. A nuestro juicio, al margen de cuestiones terminológicas, habría aspectos que sí deberían haber sido objeto de reforma en lo referente a las emisiones de Deuda Pública a corto plazo; por ejemplo, la posibilidad que el art. 34 sigue manteniendo respecto a estos títulos de pago de que el resultado de sus emisiones se impute en los presupuestos por el resultado neto del ejercicio, lo cual no es más que una técnica de maquillaje presupuestario, tendente a no engrosar los presupuestos anuales, pero contraria a la información que éstos deben proporcionar.

El Capítulo II de este título se refiere a las garantías, y en concreto a la figura de los avales que las entidades públicas pueden prestar. La figura, en continua expansión, constituye una modalidad de “endeudamiento indirecto”, aunque también podríamos decir que de “endeudamiento diferido”. En efecto, como dijimos, en el caso del aval la entidad pública puede también asumir la posición deudora, pero no por “tomar a préstamo” capitales, sino por garantizar una deuda, y sólo cuando ocasionalmente el avalado no satisfaga la obligación garantizada. Eso es algo que, tanto la Ley 11/1992, como el Texto Refundido han intentado asegurar, estableciendo en el art. 43, 1, el carácter subsidiario de los avales de la Comunidad Autónoma, de forma que los mismos, “obligarán al Tesoro sólo en el caso de no poder satisfacerlos el deudor principal o el primer avalista”⁵⁷. Sin embargo, la rotunda afirmación del Tribunal Constitucional, en su sentencia 179/1987, de 12 de noviembre de no considerar determinadas formas de avales – en concretos, segundos avales a empresas privadas – como una modalidad de Deuda Pública, por no constituir “apelación al crédito público”, ni una operación de obtención de recursos para subvenir a necesidades financieras, ha hecho que a este tipo de endeudamiento *potencial* no se le aplique el régimen de la Deuda Pública, en concreto respecto a una cuestión tan importante como las reglas de autorización. Y si bien este pronunciamiento del Tribunal Constitucional tenía sentido porque basaba todo su razonamiento en rechazar que la autorización estatal para emitir Deuda Pública tuviera que referirse a todas aquellas situaciones en que las Comunidades Autónomas pueden resultar deudoras en operaciones de crédito, ello se debía a que el Tribunal estaba abrazando un concepto “jurídico-formal” de Deuda. Esta idea, como vimos, no se cohonestaba con la definición del endeudamiento que se desprende del Tratado de la Unión Europea. Por eso sería bueno extender a este tipo de operaciones las reglas y directrices reservadas para las operaciones de créditos, lo que por otra parte se apunta a la hora de disciplinar para los avales una reserva de ley *blanda* (art. 41), como la prevista para la Deuda Pública (art. 29, 2), en el sentido de que basta que la Ley autorice el importe máxi-

⁵⁷ Véase al respecto, PALAO TABOADA, C., *Derecho Financiero y Tributario*, op. cit., pag. 99.

mo⁵⁸ y no los aspectos básicos de sus elementos esenciales, como ocurre con la reserva de ley tributaria. Aunque para la Deuda Pública la autorización según el citado art. 29, 2 del Texto Refundido tenga que ser por Ley, y para los avales baste la Ley de Presupuestos⁵⁹.

A pesar de ello, también en lo relativo a los avales las novedades detectables en el Texto Refundido son escasas. La única es el añadido de un párrafo nuevo al art. 42, 5, dedicado a los avales de los organismos autónomos, donde se establece un régimen especial más flexible para un organismo autónomo concreto, el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)⁶⁰. La razón de esta especialidad es que el art. 45, 1 del Texto Refundido, siguiendo el modelo del art. 109 de la Ley General Presupuestaria estatal, prevé la concesión de avales por los organismos autónomos sólo a sociedades públicas o mercantiles, en cuyo capital dichos organismos autónomos participen. Pero este modelo de “aval participado” no puede reproducirse respecto a organismos autónomos, como el IGAPE, cuyo fin primordial es la promoción y el fomento de inversiones productivas. Por eso se establece que, respecto a los avales prestados por este Instituto, no es necesaria la existencia de una participación en las entidades avaladas. Si la *especialidad* se limitase a esto, podríamos decir que el Texto Refundido ha introducido una salvedad razonable, pero lo cierto es que se ha aprovechado para *flexibilizar* el régimen de los avales a conceder por el IGAPE en cuestiones difícilmente justificables. Así, las condiciones de las operaciones que pueden ser avaladas por el Instituto se fijarán por el Consello de la Xunta a propuesta de la Consellería de Economía e Facenda, con la única exigencia de publicidad formal, a través del DOGA, tanto de los acuerdos de fijación de las condiciones como de la propia concesión del aval. Si bien la discrecionalidad con que aquí se dota al Consello de la Xunta para fijar las condiciones para la concesión de estos avales puede estar justificada por el importante componente de apreciación técnica que conllevan estas decisiones, y la misma – entendemos – podría ser controlada judicialmente, cuando, por ejemplo, incurriese en desviación de poder, creemos que el margen de decisión es demasiado amplio. El control de esta decisión exige que la norma habilitante dibuje ciertos contornos que, en el supuesto del art. 47, 1 del Texto Refundido, se echan en falta⁶¹.

⁵⁸ También con relación a la reserva de ley en materia de Deuda Pública se observa una apología de su flexibilización, especialmente profusa en los últimos años. Es el supuesto de la Exposición de Motivos de la Ley 11/1992, donde se justifica la atribución de amplias competencias sobre Deuda Pública a la Consellería de Economía e Facenda – determinación de su forma de emisión, plazo y tipo de interés, reembolso anticipado etc... – por “la necesidad de dotar de la agilidad necesaria dichas operaciones de gestión en el marco de las modernas técnicas de ingeniería financiera”.

⁵⁹ Sobre el diferente grado de intensidad de la reserva de ley respecto al tributo y respecto a la Deuda Pública, GUERRA REGUERA, M., “Ingresos financieros por operaciones de crédito: la Deuda Pública”, *Derecho Presupuestario. Deuda Pública e Ingresos Patrimoniales*, Coord. Javier Lasarte, Ed. Comares, Granada, 1998, pag.204.

⁶⁰ Creado por Ley 5/1992, de 10 de junio.

⁶¹ Véase la clásicas sentencias del TS de 13 de febrero de 1971 y 12 de enero de 1973.

VI. RÉGIMEN PRESUPUESTARIO Y TESORERÍA.

Las disposiciones relativas al llamado “ciclo presupuestario”, son, sin duda, el *núcleo duro* de cualquier norma que pretenda disciplinar el régimen financiero de una determinada entidad pública. En este caso, la norma que comentamos, que adopta la forma de un Texto Refundido, se llama además de *Régimen Financiero y Presupuestario*, lo que nos da una muestra del alcance de las normas presupuestarias dentro de su contenido. Al régimen de los *Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma* se dedica el Título III, con un esquema similar al de la Ley 11/1992, y que responde al esquema del *iter* del Presupuesto; “contenido y aprobación” (Capítulo I), “de los créditos y sus modificaciones” (Capítulo II), “ejecución y liquidación” (Capítulo III), junto con las normas espaciales de aplicación para los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo y para las sociedades públicas (Capítulos IV y V). A lo que hay que unir un Título IV, referido a la Tesorería, ya que la inclusión de esta última materia en un título específico se debe a la intención de la norma de separar la gestión presupuestaria de la de tesorería.

El Presupuesto constituye la expresión máxima de la autonomía financiera de una entidad pública, instrumento básico de la planificación y gestión de la actividad financiera, y al mismo tiempo, en su faceta normativa, una disposición que, según la jurisprudencia constitucional que hemos citado, alcanza la condición de Ley plena⁶². A los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Gallega se refiere el art. 53,1 del Estatuto de Autonomía. Tampoco en este punto contiene el Texto Refundido innovaciones reseñables, a diferencia de la Ley 11/1992, donde sí se introdujeron novedades importantes, respecto, por ejemplo, a modificaciones presupuestarias, gastos plurianuales, fases de gestión del Presupuesto, reglamentación de pagos a justificar y de los anticipos de caja fija... Repitamos una vez más que poco se podía hacer a través de un Texto Refundido, pero la verdad es que la norma que comentamos se ha limitado a modificaciones de escasa entidad. Además de las meramente estilísticas, se ha pulido la redacción de algunos preceptos, por ejemplo, para evitar reiteraciones; así en el art. 78, concerniente a la tramitación de las solicitudes de subvenciones se suprime el requisito de aportar una declaración expresa de no tener contraída ninguna deuda, por ningún concepto, con la Xunta de Galicia. Y es que ya existe una exigencia general de justificación por parte de todo aquél que aspire a ser beneficiario de una subvención, y que se contempla en el art. 79. También se han adaptado ciertas remisiones normativas como la contenida en el art. 53, que se refiere a los Presupuestos de las Diputaciones Provinciales. La mención contenida en la Ley de 1992 a la Ley 8/1989, de 15 de junio, sobre delimitación y coordinación de las competencias de las Diputaciones Provinciales de Galicia, se sustituye por la de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de

⁶² Sobre la relación entre Presupuestos y autonomía financiera, véanse, entre otros, MARTINEZ LAGO, M.A., *Manual de Derecho Presupuestario*, Colex, Madrid, 1992, pags. 200 a 203.

Administración Local de Galicia. Se detectan sin embargo, en el Texto Refundido, algunas incorrecciones terminológicas, consecuencia de haber enmendado incorrectamente la nomenclatura utilizada en la normativa anterior; así es más correcto hablar de “nivel de desagregación económico” como se hacía en el anterior art. 56, 4 y no de “nivel de desglose”, como se hace ahora.

Pero, al margen de estas alteraciones legales de menor entidad, las incorporaciones normativas más importantes del Texto Refundido en lo referente a presupuestos y tesorería se circunscribe a diversos ejemplos de lo que se conoce como “modificaciones presupuestarias”.

En primer lugar respecto a los **gastos plurianuales**. El tipo de operación que podría dar lugar a este tipo de obligación, cuya eficacia, como dice FERREIRO LAPATZA, queda demorada hasta que los sucesivos Presupuestos consignen los créditos que cada año serán necesarios para su cumplimiento⁶³, se ha ido ensanchando progresivamente. Y si bien en un principio se creía que, junto con los clásicos gastos *duraderos* o de tracto sucesivo, como las inversiones de capital o los arrendamientos de inmuebles, podrían dar lugar a gastos plurianuales las transferencias de capital o la carga financiera de la deuda, después se empezó a admitir que también las transferencias corrientes y los activos financieros podrían generar este tipo de gasto de eficacia diferida. Es por eso, que en el ordenamiento estatal, el art. 51 de la Ley de *acompañamiento* 50/1998, de 30 de diciembre, modificó, con eficacia desde el 1 de enero de 1999, el art. 61 de la Ley General Presupuestaria, para ampliar los supuestos en los que podrían existir disposiciones presupuestarias de tipo plurianual. En el mismo sentido, el Texto Refundido incorpora, en su art. 58, entre los nuevos supuestos que pueden generar gastos plurianuales, además de las transferencias de capital y los activos financieros, los convenios para la financiación universitaria, y cualquier gasto en bienes y servicios, “cuya contratación, bajo las modalidades establecidas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no pueda ser estipulada o resulte antieconómico por plazo de un año”. Este último supuesto deja un margen amplísimo para evaluar la necesidad de un gasto plurianual y debe por ello ser rechazado. Parece ser intención de este precepto incluir aquí la controvertida fórmula del “abono total” en la contratación de obras, prevista en el artículo 100,2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas, a la que se refiere el art. 61, 5 de la Ley General Presupuestaria, pero se echa de menos una mayor precisión.

Una valoración más favorable merecen sin embargo las otras novedades introducidas respecto a los gastos plurianuales; así en cuanto al número de ejercicios a los que se pueden aplicar estos gastos, aun manteniendo la regla general de que son cuatro se prevé un recorte importante para los llamados “trabajos específicos y no habituales” en los que los ejercicios serán dos. Asimismo, se especifica que los porcentajes máximos que se pueden

⁶³ FERREIRO LAPATZA, J.J., *Curso de Derecho Financiero Español*, Marcial Pons, Madrid, 1991, pag. 631.

comprometer por cada ejercicio (70 % en el segundo, 60 % en el tercero y 50 % en el cuarto y quinto) se aplicarán a “nivel de concepto”, que es el nivel de vinculación “normal” – art. 56, 2-. Incluso se prevé una segunda limitación; esos mismos porcentajes se aplicarán sobre el conjunto de conceptos, cuando un nivel de vinculación esté constituido por una pluralidad de éstos. Se consigue así que el gasto plurianual, que es una institución destinada a flexibilizar el rigor del principio de especialidad temporal, no incida simultáneamente en las reglas de especialidad cualitativa. En estas cuestiones creemos que el Texto Refundido ha tomado la delantera a lo que es actualmente la regulación estatal recogida en la Ley General Presupuestaria.

Novedades también en lo relativo a la llamada **generación de créditos** (art. 69). La redacción de la Ley 11/1992 contemplaba – al igual que el art. 71, 1, a) de la Ley General Presupuestaria – la posibilidad de generar créditos por aportaciones de personas físicas o jurídicas para financiar conjuntamente con la Comunidad o con sus organismos autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos encomendados a los mismos. Pero no se contemplaba, de modo incomprensible, la posibilidad de que esos gastos se financiasen exclusivamente con aportaciones de otras Administraciones Públicas. Posibilidad que incorpora el Texto Refundido. Convendría plantearse si esta mención a generaciones de créditos por aportaciones de Administraciones Públicas incluye las aportaciones de la Unión Europea; la respuesta debe ser positiva, porque el párrafo 3, de este mismo art. 69, admite la generación de créditos a partir de fondos de la Unión Europea. Pero debería haberse dicho expresamente, porque el Texto Refundido – así el citado art. 69, 3 -, suele diferenciar entre la “Unión Europea” y las Administraciones Públicas; la Unión no cuenta con Administración propia en los Estados miembros.

Para permitir generaciones de créditos con aportaciones de Administraciones Públicas, se suprime la exigencia de la financiación conjunta, lo que, de paso, abre la vía a la posible financiación de obras exclusivamente con aportaciones por parte de personas físicas o jurídicas particulares. En estos supuestos también cabrán generaciones de créditos.

Se incluye, también en lo relativo a las generaciones de créditos, un supuesto especial de vinculación; las generaciones producidas por prestaciones de servicios – art. 69, 1, c) – sólo pueden destinarse a financiar gastos corrientes en bienes y servicios, del Capítulo II de Presupuestos, para establecer así una relación de coherencia entre la causa de la generación del crédito y el destino del gasto generado. Y una excepción adicional a la regla de que las generaciones de crédito se efectúan en el mismo ejercicio en que se ha producido el ingreso. Cuando se trate de fondos procedentes de la Unión Europea o de la Administración Central del Estado que los cofinancien, al igual que ocurre con ingresos que generen crédito producidos en el último trimestre del año, el crédito puede generarse en el ejercicio siguiente (art. 69, 3).

Por último, en cuanto a las **incorporaciones de remanentes**, se fija una excepción en lo relativo a la vinculación temporal de esas incorporaciones. Así, en lo atinente a créditos

financiados por el Fondo de Compensación Interterritorial o por fondos o subvenciones finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas, los eventuales remanentes se incorporarán durante todo el tiempo en que persista el derecho a la percepción del ingreso que los financia.

A ello hay que unir algunas novedades ya incluidas en la Ley 11/1992, destinadas a la “protección presupuestaria” de la realización de determinadas obras públicas o de determinados gastos sociales. Así, la posibilidad de que proyectos de inversión de suficiente importancia cuantitativa y cualitativa – siempre apreciada discrecionalmente – pueden declararse *vinculantes*, lo que supondrá que no podrán ser objeto de otro destino sin autorización previa, o la inclusión como créditos ampliables, de “los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas”.

No se han llevado a cabo, por lo que se ve, reformas de peso en el régimen presupuestario de la Comunidad. Subsisten defectos importantes, si tomamos como punto de comparación la Ley General Presupuestaria. Así, por ejemplo, no se entiende porque no se exige el dictamen preceptivo del Consello Consultivo, para remitir al Parlamento los proyectos de ley de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, paralelamente a lo que hace el art. 64, 1 de la Ley General Presupuestaria, respecto al Consejo de Estado. De esta manera, se podría condicionar la concesión de los anticipos de tesorería previstos en el art. 63, a la existencia de dictamen favorable del Consello Consultivo. Pero también es cierto que el Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario mejora en algunos puntos el Texto estatal. A nuestro modo de ver, entre otras, en las siguientes cuestiones. Así, el plazo para remitir al Parlamento el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma termina el 20 de octubre (art. 52, ante el silencio del Estatuto de Autonomía en su art. 53, 1), frente al estatal que termina el 31 del mismo mes (art. 134, 3 de la Constitución). Aunque la diferencia es de días, ello que redundará en que el Parlamento disponga de más tiempo para analizar el proyecto. También conviene aplaudir el hecho de que el Texto Refundido de la Comunidad Autónoma de Galicia disponga de una regulación pormenorizada de la prórroga de los Presupuestos, y de los estados de gastos que se deben elaborar para ordenar dicha prórroga. Por cierto, que el artículo 54, 5 del Texto Refundido establece que la prórroga no sólo alcanza a los estados de gastos sino al “texto de la Ley de Presupuestos”, tomando partido en una polémica doctrinal todavía no resuelta⁶⁴. Y sobre todo, hay que aplaudir que el art. 73 describa de manera clara, las distintas fases del Presupuesto de gastos y del de ingresos. Eso no ocurre en la Ley general Presupuestaria, y

⁶⁴ Así, para LOZANO SERRANO, C.-MARTIN QUERALT, J., la prórroga de los Presupuestos se extiende a la totalidad de los mismos, puesto que “la Ley de Presupuestos es contemplada como un conjunto unitario por el ordenamiento”; *Curso de Derecho Financiero y Tributario*, Tecnos, Madrid, 1998, pag. 768. En contra de admitir una prórroga indiscriminada de la parte dispositiva de la Ley de Presupuestos, MARTINEZ LAGO, M.A., *Manual de Derecho Presupuestario*, op. cit., pags. 139 y 140. En contra también, PALAO TABOADA, C., *Derecho Financiero y Tributario*, op. cit., pag. 76.

para buscar una definición normativa de la autorización del gasto, disposición o reconocimiento de la obligación, hay que ir a disposiciones de rango ínfimo como la Instrucción de Contabilidad para la Administración general del Estado, aprobada por Orden Ministerial de 1 de febrero de 1996.

El Título IV recoge, sin ninguna novedad destacable, el régimen de la Tesorería de la Comunidad. El Texto Refundido mantiene íntegramente el régimen que en su momento implantó la Ley 11/1992, sobre la unidad de dirección y coordinación de todas las cajas y cuentas tesoreras.

VII. CONTROL INTERNO, CONTABILIDAD Y RESPONSABILIDADES CONTABLES

Finalmente, el Título V contiene un capítulo I dedicado al control interno y un capítulo II, dedicado a la contabilidad. El Título VI, por su parte, se refiere a las responsabilidades contables.

La regulación del control interno, tanto en lo relativo a la función interventora (con carácter pleno, mediante actuaciones limitadas o por muestreo), como en lo concerniente al control financiero (ordinario y permanente) se encontraba ampliamente recogida en la Ley 11/1992. Esta regulación, obviamente, se mantiene en el Texto Refundido. Y se mantienen también preceptos que, en términos generales, merecen una valoración favorable; así por ejemplo debe ser saludado positivamente un artículo como el 102, 1, referido a las consecuencias de la omisión de la fiscalización previa en la aprobación del gasto o el reconocimiento de la obligación, consecuencia que será la imposibilidad de reconocer la obligación. Esta valoración positiva debe efectuarse, además, teniendo en cuenta que no existe un precepto similar en la Ley General Presupuestaria (en el orden estatal debemos acudir al texto del RD 2188/1995 y, subsidiariamente, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Procedimiento Administrativo Común⁶⁵).

Al igual que ocurría en la mayoría de los aspectos del Texto Refundido vistos hasta ahora, las novedades son escasas. Existe una cierta profusión de correcciones ortográficas y estilísticas, que no han evitado que se hayan introducido algunas incorrecciones terminológicas. Así, a nuestro juicio, es más correcto hablar de “rendición de la Cuenta General de la Comunidad”, como hacía el art. 110 d) de la Ley 11/1992, y no de “rendimiento de la cuenta”, como hace la versión del Texto Refundido, publicado en el BOE.

⁶⁵ En concreto, se entiende que la omisión del trámite de fiscalización previa, allí donde sea necesario, da lugar a la anulabilidad del acto de autorización, según el art. 63, 1 de la Ley 30/1992, pudiendo el mismo, sin embargo, ser convalidado con base en el art. 67 del mismo cuerpo legal; CHECA GONZALEZ, C., *El control de la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Extremadura*, Asamblea de Extremadura, Cáceres, 1993, pag. 22.

Por lo demás, la única novedad reseñable se refiere a la superación de la incompatibilidad que aparentemente existía entre la función interventora y el control financiero de carácter permanente. Por un lado, en el art. 94, dedicado a los supuestos en que cabe el control interno, se añade un nuevo párrafo, el 4, con la idea de salvaguardar la posibilidad de sujetar a la función interventora a los organismos autónomos, sociedades y entes públicos sujetos a control financiero, hay que entender que en sus dos modalidades de control ordinario y permanente, puesta que la norma nada dice. Por tanto, el Texto Refundido retrocede en lo que había sido una tendencia consolidada a partir de la Ley 11/1992; la de que el control financiero permanente sustituyese a la función interventora. Según el 94, 4, por acuerdo de la Xunta y a propuesta del Conselleiro de Economía e Facenda, la función interventora podrá extenderse a los órganos que estén siendo controlados mediante procedimientos de auditoría. Lo que se complementa con la mención en el art. 106, de que los organismos en él mencionados⁶⁶, serán objeto de control financiero permanente “siempre que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4, del art. 94 de esta Ley, no esté establecida la función interventora”. Ello es elogiabile; no era de recibo que determinados entes – el caso más palmario era del de los organismos autónomos de carácter administrativo – pudiesen quedar al margen de la función interventora, y del mecanismo de control por antonomasia, que es la fiscalización previa. Pero quizás, dejar a la libérrima decisión de la Xunta acerca de cuando se aplica la función interventora y cuando se deja de aplicar no sea tan digno de elogio.

Por lo demás no se observan, en lo concerniente al control interno, ni en el Capítulo II, referente a la Contabilidad, ni en el Capítulo III, dedicado a las responsabilidades contables, incorporaciones que merezca la pena citar.

VIII. EPÍLOGO

Hemos visto en estas páginas, comentando el Decreto-Legislativo 1/1999, de 7 de octubre que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia, como el recurso a un instrumento normativo que, por definición, no tiene como objetivo innovar el ordenamiento, ha supuesto una importante limitación a la hora de enfrentarse con algunas cuestiones que merecerían una modificación. Entre la alternativa de recopilar lo que se había venido introduciendo, especialmente a través de las leyes de presupuestos, dando así carta de *respetabilidad* a las reformas establecidas en la norma presupuestaria, y la otra alternativa, de dictar una nueva Ley de Régimen Financiero y Presupuestario, se ha optado por la primera. Por ello, las novedades verdaderamente importantes son pocas; estamos ante un texto más importante por lo que no ha regulado o no ha

⁶⁶ Esos organismos son; los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, las Consellerías, servicios, organismos autónomos de carácter administrativo, sociedades y entes públicos, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica en que así se determine, en los términos del art. 106, 2 del Texto Refundido, y el Ente Público Radiotelevisión de Galicia.

podido regular, que por lo que efectivamente ha disciplinado. Por eso la descripción que se ha efectuado no puede considerarse la reseña de un fracaso; más bien la crónica de una magnífica ocasión perdida.

Decreto legislativo 1/99, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

A disp. adic. oitava Lei 6/98, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da CA de Galicia para 1999, autorizou o Goberno galego para a elaboración, no prazo dun ano, do texto refundido da Lei 11/92, do 7 de outubro, de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

En uso da dita autorización redactouse o correspondente texto refundido, no que se incorporan ó texto inicial da Lei 11/92 as modificacións sufridas por esta desde a súa entrada en vigor, así como algunhas actualizacións terminolóxicas e correccións gramaticais que non inciden no fondo da disposición.

En consecuencia, de acordo co previsto no art. 10.1º a) EA Galicia, aprobado pola LO 1/81, do 6 de abril, e no art. 4.4º Lei 1/83, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, de acordo co Consello Consultivo de Galicia, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 7/10/99,

DISPOÑO:

Artigo único.-De conformidade coa disp. adic. oitava Lei 6/98, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da CA de Galicia para 1999, apróbase o TR Lei 11/92, do 7 de outubro, de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, que se insire a continuación.

Disposición adicional única.-Remisións normativas á Lei 11/92.

As remisións e referencias normativas á Lei 11/92, do 7 de outubro, de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, entenderanse feitas, no sucesivo, ó TR da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Disposición derradeira única.-Entrada en vigor.

O presente D.Lex. e o TR que se aproba entrarán en vigor o día seguinte ó da súa publicación no DOGA.

Santiago de Compostela, sete de outubro de mil novecientos noventa e nove.

MANUEL FRAGA IRIBARNE

Presidente

JOSÉ ANTONIO ORZA FERNÁNDEZ

Conselleiro de Economía e Facenda

TÍTULO PRELIMINAR**Principios xerais****Artigo 1º.-Concepto.**

1. A Facenda pública de Galicia está constituída polo conxunto de dereitos e obrigas de contido económico e financeiro dos que a súa titularidade lle corresponde á CA de Galicia.

2. Constitúen materias propias da Facenda pública de Galicia, con independencia da normativa que as regule, as seguintes:

- a) O procedemento orzamentario nas súas distintas fases de elaboración, xestión e liquidación.
- b) O sistema de contabilidade a que debe someterse a actuación económica dos órganos competentes do sector público galego.
- c) O réxime do seu patrimonio.
- d) A contratación en réxime de dereito administrativo.
- e) A regulación dos seus ingresos de dereito público e privado.
- f) As normas de asignación e xestión dos recursos públicos e o control de eficacia e eficiencia no seu emprego.
- g) O oneramento e a concesión de avais e outras garantías.
- h) A organización e regulación da Tesourería.
- i) Os procedementos xerais de funcionamento dos órganos responsables da Facenda pública galega.
- j) As prerrogativas da Facenda pública galega e as responsabilidades derivadas da actuación dos seus órganos e do persoal ó seu servizo.
- k) Calquera outra que tivese relación co contido da Facenda pública galega.

Artigo 2º.-Criterios e fins.

1. A distribución e xestión dos recursos públicos realizarase tendo en conta criterios de eficacia e eficiencia.

2. A acción do Goberno para a prestación de servizos públicos e a dotación de infraestruturas públicas básicas e sociais da Comunidade farase conforme os principios de equidade, solidariedade e equilibrio territorial.

Artigo 3º.-Normativa reguladora.

1. Constitúe o obxecto desta lei a regulación da actividade económico-financieira da CA de Galicia, sen prexuízo do que se dispoña noutras leis especiais.

2. A actividade económico-financieira da CA de Galicia rexerese:

a) Por esta lei e polas demais leis especiais e normas concordantes que sobre a materia dicte o Parlamento de Galicia.

b) Polas leis de orzamentos xerais da CA.

c) Polas normas regulamentarias que se dicten no desenvolvemento desta lei.

3. Terán carácter supletorio as demais normas do ordenamento xurídico administrativo e, no seu defecto, o dereito privado respectando a prelación de normas do dereito civil galego.

4. As leis anuais de orzamentos xerais da CA poderán conter normas relacionadas coa súa actividade económico-financieira con vixencia permanente ou con vixencia temporal superior ó período anual ó que estas correspondan.

Cando nas ditas normas legais concorra algunha destas circunstancias deberá terse en conta o seguinte:

- a) De tratarse de normas de vixencia permanente, establecerase así de forma expresa incluíndo, se é o caso, a táboa de derogacións motivada pola entrada en vigor da nova norma legal.
- b) De tratarse de normas de vixencia temporal, definirase con precisión o seu prazo de vixencia e as normas de ordenamento xurídico que queden afectadas, así como os efectos sobre estas á entrada en vigor da nova normativa ó longo do prazo no que esta sexa aplicable.

Artigo 4º.-Principios orzamentarios e control.

1. A actividade económico-financieira da CA de Galicia estará sometida ó réxime de orzamento anual e ós principios de control interno, de contabilidade e de unidade de caixa que se determinan nesta lei.

2. Tódalas actividades que dean lugar ó recoñecemento de dereitos e obrigas de contido económico ou ó manexo de fondos públicos deberán estar controladas ou intervidas conforme as normas desta lei e sometidas ó réxime de rendemento de contas ó Consello de Contas e ó Tribunal de Contas, de acordo coas disposicións que os regulan.

3. A Intervención Xeral da CA será o órgano encargado da execución das funcións de control interno e de contabilidade reguladas nesta lei.

4. A CA de Galicia, de acordo cos procedementos legais establecidos, poderá esixirle-las indemnizacións económicas que sexan procedentes ós responsables da custodia e do manexo dos fondos públicos polos prexuízos que puidesen ocasionar, con independencia das demais responsabilidades de carácter civil, penal ou disciplinario en que puidesen incorrer.

Artigo 5º.-Reserva legal.

Regularanse por lei do Parlamento de Galicia as seguintes materias:

- a) Os orzamentos xerais da CA e a concesión de créditos extraordinarios e suplementos de créditos da Xunta de Galicia e dos organismos autónomos nos termos recollidos nesta lei.
- b) O establecemento, a modificación ou a supresión dos seus propios tributos e das exencións e bonificacións que os afecten.
- c) O establecemento, a modificación e a supresión das recargas sobre os impostos do Estado.
- d) A emisión e o réxime da débeda pública e demais operacións de crédito.
- e) O réxime de patrimonio da CA.
- f) A creación e supresión dos organismos autónomos nos termos que se prevén nesta lei.
- g) Os convenios e acordos de cooperación con outras CCAA previstos no art. 35 EA.
- h) O réxime e a concesión de avais e outras garantías pola CA.
- i) A coordinación orzamentaria das deputacións provinciais de Galicia, en concordancia coa Lei 5/97, do 22 de xullo de Administración local de Galicia.
- j) As demais materias relativas A Facenda pública galega que, segundo as leis, se deban regular con este rango.

Artigo 6º. Competencia do Consello de Xunta

Será competencia do Consello da Xunta no marco das materias reguladas nesta lei:

a) A determinación das directrices básicas de política económica e financeira, de acordo co EA de Galicia.

b) A elaboración dos orzamentos xerais da CA.

c) A autorización dos gastos que segundo as leis requiran a súa aprobación.

d) A aprobación dos regulamentos para a súa aplicación.

e) Calquera outra que precise coñecemento ou aprobación de Xunta e a competencia da cal non lle estea reservada ó Parlamento de Galicia.

Artigo 7º. Competencia da Consellería de Economía e Facenda.

Será competencia da Consellería de Economía e Facenda.

a) A administración, xestión e recadacións dos dereitos da Facenda da CA.

b) A ordenación de pagamento nos termos establecidos na presente lei.

c) A elaboración do anteproxecto de lei de orzamentos xerais da CA.

d) O control de eficacia e eficiencia respecto dos obxectivos previstos nos orzamentos xerais da CA.

e) O exercicio das demais funcións de control interno reguladas nesta lei e a dirección e execución da contabilidade pública.

f) A execución ou dirección da política económica e financeira aprobada pola Xunta, na forma que esta determine.

g) O desenvolvemento das actividades inherentes ó exercicio da tutela financeira sobre os entes locais, que ten atribuída a CA no art. 49ª do EA.

h) As funcións executivas en materia de ordenamento e control das institucións de crédito corporativo público e territorial e das caixas de aforro que operen no seu territorio, nos termos previstos no art. 30 EA.

i) As demais funcións e competencias que lle asigne a normativa legal vixente.

Artigo 8º.- Competencia das concellerías.

Será competencia das concellerías:

a) A elaboración do seu anteproxecto de orzamento.

b) A administración e xestión dos créditos para gastos incluídos nos orzamentos e que estean adscritos a elas.

c) A autorización dos gastos propios da consellería, agás que aquela estea reservada ó Consello da Xunta.

d) A proposta do pagamento de obrigas á Consellería de Economía e Facenda.

e) As demais que lles confira a normativa legal vixente.

Artigo 9º.- Competencia dos organismos autónomos.

1. Son funcións dos organismos autónomos da CA no ámbito das súas respectivas competencias:

a) A elaboración do seu anteproxecto de orzamentos de gastos e ingresos.

b) A administración, xestión e recadación dos seus propios dereitos económicos.

c) A autorización dos gastos contidos nos seus orzamentos e a ordenación dos seus pagamentos.

d) As demais que lles atribúan as normas legais vixentes.

2. O previsto no n.º 1 anterior enténdese sen prexuízo do que puidese establecerse no uso do disposto no art. 11.º2.

Artigo 10.º.-Prerrogativas.

Á CA Galicia, no exercicio das competencias ás que se refire a esta lei, corresponderanlle en todo momento as mesmas prerrogativas e idéntico trato fiscal que a lei teña establecidos para o Estado.

Artigo 11.º.-Organismos autónomos.

1. Para o exercicio da actividade económico-financeira, a CA de Galicia, no seo da súa propia Administración pública, poderá crear organismos autónomos.

Os organismos autónomos son entes institucionais de dereito público que realizan funcións ou actividades da competencia da CA en réxime de descentralización administrativa. Terán personalidade xurídica e patrimonio propios, independentes dos da Xunta de Galicia, e poderán ser de dúas clases:

a) Organismos autónomos comerciais, industriais, financeiros ou análogos, que serán aqueles que realicen de forma principal actividades desta natureza ou calquera outra de carácter mercantil.

b) Organismos autónomos administrativos, que serán todos aqueles nos que non concorra ningunha das circunstancias indicadas na alínea anterior.

2. A creación e supresión dos organismos autónomos realizarase por lei.

3. Ós organismos autónomos seranlles aplicables os preceptos desta lei e os demais que se dicten sobre materias non reguladas nela, e gozarán das prerrogativas e dos beneficios fiscais que se establezan nas leis para as entidades públicas de tal natureza.

Artigo 12.º.-Sociedades públicas autonómicas.

1. Son sociedades públicas da CA de Galicia para os efectos desta lei:

a) As sociedades mercantís no capital das cales exista participación maioritaria, directa ou indirecta, da CA ou dos seus organismos autónomos e as demais entidades de dereito público da CA.

b) As entidades de dereito público con personalidade xurídica propia que por lei teñan que adecua-la súa actividade ó ordenamento xurídico privado.

2. As sociedades públicas da CA de Galicia rexeranse polas normas de dereito mercantil, civil ou laboral, agás nas materias nas que lles sexa aplicable a esta lei.

3. A creación das sociedades ás que se refire a letra a) do n.º 1 anterior, así como os actos de adquisición ou perda da posición maioritaria, medida esta nos termos indicados na dita letra, requirirán acordo do Consello da Xunta.

4. A actividade das sociedades públicas galegas coordinarase a Administración da Facenda pública da CA, nos termos previstos nas leis.

Artigo. 13.º.-Convenios, acordos e transferencias.

1. Nos convenios con outras CCAA para a xestión e prestación de servizos da súa exclusiva competencia, e nos acordos de cooperación que se subscriban a teor do disposto nos n.ºs. 1 e 2 do art. 35.º EA, deberán establecerse as cláusulas precisas para asegurar en todo momento a aplicación desta lei no caso de que se proceda a comprometer recursos da Facenda pública galega para o seu desenvolvemento.

2. Nos casos en que, conforme o disposto no art. 36º EA, se lle transfiran ou deleguen á CA facultades e competencias non asumidas nel, que pola súa natureza dean orixe ó manexo e á distribución dos fondos públicos, seranlle aplicables á xestión financieira dos ditos fondos os preceptos desta lei, sen prexuízo das formas de control que reserve o Estado para si.

TÍTULO I

Do contido da Facenda da Comunidade

CAPÍTULO I

Dos recursos

Artigo 14º.-Recursos da Facenda autonómica.

Constitúen dereitos económicos da Facenda pública galega:

1. Os rendementos dos impostos, das taxas e das contribucións especiais que estableza a CA.
2. Os rendementos dos tributos cedidos polo Estado.
3. A participación nos ingresos do Estado por impostos directos e indirectos, incluídos os monopolios fiscais.
4. As dotacións para a nivelación dos servizos mínimos.
5. O importe dos prezos derivados dos servizos prestados pola Comunidade ou pola concesión de canons por aproveitamentos especiais, xa sexan de propia creación ou como consecuencia de traspasos dos servizos estatais.
6. Os ingresos procedentes do Fondo de Compensación Interterritorial ou doutros fondos de análoga natureza.
7. As recargas sobre impostos estatais.
8. Calquera outra asignación a favor da CA recollida nos orzamentos xerais do Estado ou nos doutros entes públicos.
9. O produto da emisión da débeda pública e do recurso ó crédito.
10. Os rendementos do patrimonio da CA.
11. Os legados, as doazóns e calquera outro ingreso de dereito privado.
12. O produto das multas e sancións impostas no ámbito da súa competencia.
13. Se é o caso, as participacións que establezan as leis nos ingresos por tributos do Estado para recupera-los custos sociais producidos por actividades contaminantes ou que deterioren o medio ambiente ou que xeren riscos de especial gravidade para o medio físico e humano de Galicia.
14. As subvencións que poida recibila CA.
15. Calquera outro recurso de dereito público ou privado que obteña ou lle corresponda á CA.

Artigo 15º.-Destino.

Os recursos da CA galega e de cada un dos seus organismos autónomos estarán destinados a satisfacerlo conxunto das súas obrigas respectivas, salvo que por lei se estableza a súa afectación para fins determinados.

Artigo 16º.-Administración dos recursos.

1. A administración xeral dos recursos da Facenda pública galega, así como a dirección e a coordinación xeral dos seus procedementos, correspóndenlle á Consellería de Economía e Facenda, cos controis que a lei estableza.

2. Na mesma forma, correspóndelles ós órganos rectores dos organismos autónomos e demais entes públicos con personalidade xurídica propia a administración dos recursos específicos que lles correspondan para o cumprimento dos seus fins.

3. As persoas ou entidades que teñan ó seu cargo a administración dos recursos da Facenda pública galega dependerán da Consellería de Economía e Facenda ou dos órganos de administración dos organismos autónomos, e demais entes públicos, en todo o relativo á súa xestión, aplicación e rendemento de contas.

4. Estarán obrigadas á prestación de fianza aquelas persoas ou entidades que manexen fondos ou valores públicos, na contía e forma que determinen as disposicións regulamentarias.

Artigo 17º.-Xestión dos tributos.

1. A xestión, incluíndo tódalas fases do procedemento, dos tributos propios da CA, dos impostos cedidos e das recargas sobre impostos do Estado que poida establecé-la CA axustarase:

a) Ás disposicións do EA.

b) Ó disposto na presente lei.

c) Ás demais leis do Parlamento de Galicia.

d) Ás disposicións regulamentarias aprobadas pola Xunta en desenvolvemento desta lei e demais leis citadas.

e) Ás normas de desenvolvemento que as leis ou os regulamentos lle autoricen dictar ó conselleiro de Economía e Facenda.

f) Á Lei xeral tributaria e ás disposicións dictadas no seu desenvolvemento, coa consideración de dereito supletorio nos casos nos que sexa preceptiva a súa aplicación.

2. Na xestión dos tributos cedidos polo Estado terase en conta ademais o que dispoña a correspondente normativa.

Artigo 18º.-Dispoñibilidade de bens e dereitos.

1. A xestión dos bens patrimoniais e dos seus rendementos, tanto da CA coma dos seus organismos autónomos, axustarase ó disposto nas leis do Parlamento de Galicia aplicables en cada caso.

2. Non poderán ser alleados, gravados nin arrendados os dereitos da Facenda da CA, salvo nos supostos e nas condicións previstas nas leis.

3. Tampouco se concederán exencións, condonacións, rebaixas nin moratorias no pagamento dos dereitos a favor da Facenda pública galega, salvo nos casos e na forma que se determinen nas leis.

Artigo 19º.-Garantías.

1. Para realiza-lo cobro dos tributos e demais recursos de dereito público que lle correspondan, a Facenda pública galega estará en posesión das prerrogativas legalmente establecidas, gozando en todo momento das mesmas facultades e garantías cás demais administracións públicas de ámbito estatal ou territorial.

2. As certificacións acreditativas do descuberto ante a Facenda da CA das débedas por tributos e demais ingresos de dereito público, expedidas polos funcionarios competentes segundo os regulamentos, serán títulos suficientes para inicia-lo seu cobro pola vía de constrinximento e terán a mesma forza executiva cá S. xudicial para proceder contra os bens e dereitos dos debedores.

3. A efectividade dos dereitos da Facenda da CA non recollidos no nº. 1 do art. 21º esixirase de acordo coas normas de procedemento aplicables en cada caso.

Artigo 20º.-Suspensión do procedemento de constrinximento.

1. En ningún caso se poderán suspender os procedementos administrativos de constrinximento en virtude de recursos interpostos polos interesados, se non se realiza o pagamento do débito, se conigna o seu importe ou se garante este na forma regulamentariamente establecida.

2. Se contra os ditos procedementos se establecesen reclamacións en concepto de terceira ou por outra acción de carácter civil, por persoa que non teña ningunha responsabilidade coa Facenda da CA en virtude de obriga ou xestión propia ou transmitida, suspenderanse os ditos procedementos só na parte que se refira ós bens ou dereitos controvertidos, unha vez que se efectuase o seu embargamento ou se é o caso, a súa anotación preventiva no rexistro público correspondente, e substanciarase este incidente na vía administrativa como trámite previo á xudicial.

3. Cando as reclamacións formuladas en vía administrativa fosen denegadas, proseguirá o procedemento de constrinximento a non ser que da execución poidan derivarse prexuízos de imposible ou difícil reparación; en tal caso Administración pública poderá acorda-la suspensión daquel, sempre que se adopten as medidas regulamentarias de aseguramento dos respectivos créditos.

4. Así mesmo poderá suspenderse o procedemento de constrinximento sen os requisitos establecidos no punto 1 deste art. se o interesado demostra que existiu no seu prexuízo erro material ou aritmético na determinación da débeda que se lle esixa.

5. Poderán aprazarse ou fraccionarse as cantidades debidas á Facenda da CA nos casos e cos procedementos que regulamentariamente se establezan. As ditas cantidades devengarán xuros de demora e deberán garantirse excepto nos casos seguintes:

a) Cando sexan inferiores á cifra que, por norma xurídica de rango suficiente, fixe a Consellería de Economía e Facenda.

b) Cando o debedor careza de bens ou créditos suficientes para garanti-la débeda e a execución do seu patrimonio afectase ó mantemento da capacidade productiva e do nivel de emprego da actividade do sector económico respectivo, ou ben produciase graves crebas para o interese da CA, se así o acorda o conselleiro de Economía e Facenda.

Artigo 21º.-Xuros de demora.

1. As cantidades debidas a Facenda da CA polos conceptos recollidos neste capítulo devengarán xuros de demora desde o día seguinte ó do seu vencemento. Inclúense neste punto as cantidades recadadas a través de entidades colaboradoras, contas restrinxidas, oficinas liquidadoras e demais entidades recadadoras por conta da Facenda da CA que non sexan ingresadas na Tesourería nos prazos establecidos.

2. O tipo de xuro aplicable será o que corresponda en aplicación do disposto no art. 58º.2 da Lei xeral tributaria.

Artigo 22º.-Integridade da Facenda.

1. Non se poderá transixir sobre os dereitos da Facenda da CA, nin someter a arbitraje as contendas que se susciten respecto deles, senón mediante D. acordado pola Xunta de Galicia.

2. A subscrición pola Facenda da CA dos acordos de convenios en procesos concursáís previstos na LAC e na Lei de suspensión de pagamentos requirirá unicamente autorización do conselleiro de Economía e Facenda.

3. Os actos e contratos realizados en prexuízo da Facenda da CA polos que resulten debedores dela serán rescindibles conforme as disposicións legais que lles sexan aplicables.

Artigo 23º.-Prescrición.

1. Salvo o establecido polas leis reguladores dos diferentes recursos, prescribirá ós cinco anos o dereito da Facenda da CA:

a) A recoñecer ou liquidar créditos ó seu favor, computándose o citado prazo desde o día no que o dereito puido exercitarse.

b) Ó cobro dos créditos recoñecidos ou liquidados, que se contará desde a data da súa notificación ou, se esta non fose preceptiva, desde o seu vencemento.

2. En todo caso, o prazo de prescrición a que se refire o punto anterior será de catro anos para tódolos recursos derivados dos tributos propios da CA.

3. A prescrición quedará interrompida:

a) Pola interposición de reclamacións ou recursos de calquera clase.

b) Se o debedor recoñecese fidedignamente a débeda.

c) Se a administración esixise directamente o seu pagamento por escrito.

4. Os dereitos declarados prescritos serán dados de baixa en contas, logo da tramitación do oportuno expediente, no que, se é o caso, se declarasen as responsabilidades a que houbese lugar, salvo que procedese a súa tramitación en peza separada na forma disposta no título VI desta lei.

5. Autorízase o conselleiro de Economía e Facenda para que poida dispoñe-la non liquidación de débedas ou a anulación e baixa en contabilidade de débedas xa liquidadas cando a súa execución resulte antieconómica. Para estes efectos, a dita consellería determinará previamente o límite cuantitativo no que se considere que se produce tal efecto.

CAPÍTULO II**Das obrigas****Artigo 24º.-Nacemento e esixibilidade.**

1. As obrigas económicas da CA e dos seus organismos autónomos nacen da lei, dos negocios xurídicos e dos actos e feitos que, conforme a dereito, as xeren.

2. O pagamento das obrigas só lle será esixible á Facenda da CA na medida que resulte da execución dos seus orzamentos, de S. xudicial firme ou de operacións de Tesourería legalmente autorizadas.

3. Cando as ditas obrigas teñan por causa prestacións ou servicios á Administración da CA, o pagamento non poderá realizarse mentres o acreedor non cumpra ou garanta, conforme a lei, a súa respectiva obriga.

Artigo 25º.-Inembargabilidade.

1. Os tribunais, xuíces e autoridades administrativas non poderán despachar nin dictar mandamento de execución ou providencia de embargamento contra os dereitos, fondos, valores e demais bens da Facenda da CA.

2. O cumprimento das resolucións que determinen obrigas a cargo da CA ou dos seus organismos autónomos corresponderalle exclusivamente á autoridade administrativa que sexa competente.

Se non existise crédito no orzamento en vigor ou fose insuficiente o dispoñible solicitarase do Parlamento dentro dos tres meses seguintes á notificación da resolución, a concesión dun crédito extraordinario ou dun suplemento de crédito.

Artigo 26º.-Xuros.

Se o pagamento das obrigas da CA non se lle fixese efectivo ó acredor no prazo dos tres meses seguintes ó día da notificación da resolución xudicial ou do recoñecemento da propia obriga, este terá dereito ó aboamento dos correspondentes xuros de demora sobre a cantidade debida ó tipo establecido no nº. 2 art. 21º, sempre que reclame por escrito o cumprimento da obriga.

Artigo 27º.-Prescrición.

1. Salvo o establecido nas leis especiais, prescribirán ós cinco anos:

a) O dereito ó recoñecemento ou á liquidación de toda obriga, computándose o prazo desde o momento no que esta sexa esixible conforme, á dereito.

b) O dereito a esixi-lo pagamento das obrigas recoñecidas ou liquidadas. O prazo contarase desde a data de notificación do recoñecemento ou da liquidación da respectiva obriga.

2. O pedimento por escrito do recoñecemento ou do cumprimento da obriga, ou da efectividade do seu pagamento, por parte dos acredores lexítimos, ou dos que se subroguen nos seus dereitos, mediante a presentación dos documentos xustificativos do seu dereito, interromperá a prescrición, segundo o disposto no CC, salvo o establecido en leis especiais.

3. As obrigas que prescribisen serán dadas de baixa nas contas respectivas, logo de tramitación do oportuno expediente.

TÍTULO II**Das operacións de endebedamento****CAPÍTULO I****Das operacións de endebedamento****Artigo 28º.-Endebedamento.**

Constitúe o endebedamento público os capitais tomados a préstamo pola Xunta de Galicia ou polos seus organismos autónomos. A emisión de débeda pública ou a conversación doutras operacións de crédito, a súa administración, conversión ou extinción, así como a prescrición dos capitais e dos seus xuros, regularanse polas disposicións desta lei.

Artigo 29º.-Denominación e autorización.

1. As operacións de crédito e a emisión de débeda pública poderanas levar a cabo a CA ou os seus organismos autónomos, recibindo no primeiro caso a denominación de «Débeda da Comunidade Autónoma de Galicia» e no segundo a de «Débeda dos organismos autónomos».

2. O endebedamento, tanto da CA coma dos seus organismos autónomos, terá que ser autorizado por lei, a cal, sen prexuízo de fixar calquera outra característica das operacións de endebedamento por realizar, deberá sinala-lo importe máximo autorizado. A Xunta de Galicia poderá determinar ó longo do período de autorización límites inferiores ó dito importe se así o aconsellasen circunstancias de política económica.

Artigo 30º.-Destino.

1. A débeda e demais operacións de crédito concertadas pola CA ou polos seus organismos autónomos por prazo superior a un ano destinaranse exclusivamente ó financiamento de gastos de capital.

2. A contía das anualidades de amortización incluído capital e xuros, non poderá exceder do 25% dos ingresos correntes previstos nos orzamentos xerais da CA en cada ano.

Artigo 31º.-Débeda de Tesourería.

1. No endebedamento que a CA leve a cabo con persoas físicas ou xurídicas para atender necesidades transitorias de Tesourería, calquera que sexa a forma como se documente, o prazo de reembolso será inferior a un ano.

Na lei de orzamentos de cada ano autorizarase o límite máximo destas operacións para cada exercicio.

2. O produto da débeda de Tesourería a que se refire o nº anterior contabilizarase independentemente nas contas de operacións do Tesouro. Os gastos e xuros que motive seranlle imputados ó orzamento da CA antes do peche do exercicio, e á devandita débeda seralle aplicable, de proceder, o establecido nos arts. 38º e 39º desta lei.

3. En todo caso, a partir do momento no que o montante total anual destas operacións transitorias exceda do 5% do estado de gastos, deberáselle dar conta trimestralmente ó Parlamento da evolución daquelas.

Artigo 32º.-Importe máximo.

1. Nas autorizacións de endebedamento incluídas na Lei de orzamentos xerais da CA e noutras leis especiais, o importe máximo autorizado deberá entenderse, agás disposición contraria, como variación neta da posición debedora da CA ou de cada un dos organismos autónomos da que a dita autorización se refira, computada ó remate do período ó que se estenda a autorización.

2. Queda excluído do disposto no par. anterior a débeda de Tesourería a que se refire o art. 31º.

Artigo 33º.-Autorización da emisión ou contracción.

1. As emisións de débeda pública ou operacións de crédito que realicen a CA ou os seus organismos autónomos terán que ser autorizadas, en todo caso, polo conselleiro de Economía e Facenda dentro dos límites sinalados pola lei, ó que lle corresponderá así mesmo autoriza-las súas características técnicas e o seu tipo de xuro, se estes non fosen determinados pola súa lei de creación.

Tales actos de endebedamento, cando este teña un prazo de vencemento superior a un ano, poderán ser formalizados dentro do exercicio orzamentario no que a lei autorice a súa creación ou do exercicio seguinte.

2. Cando se trate de conseguir unha mellor administración da débeda pública emitida ou das operacións de crédito formalizadas, a Xunta de Galicia, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, poderá acorda-la súa conversión ou renegociación, e daralle conta ó Parlamento de Galicia dentro dos trinta días seguintes e sempre que non se altere o equilibrio financeiro daquelas, nin se prexudiquen, se é o caso, os dereitos económicos dos posuidores.

Artigo 34°.-Contabilización.

Sen prexuízo do disposto no art. 36°, o produto das emisións continuas de títulos de pagamento ou calquera outro título emitido pola CA con vencemento igual ou inferior a dezaoto meses, así como o importe das amortizacións destes, contabilizaranse independentemente en contas de Tesourería, aplicándose o saldo neto das ditas operacións, ó remate do exercicio orzamentario, ó orzamento da CA.

Os gastos por xuros ou de calquera outra natureza derivados da súa emisión ou amortización aplícanse ó orzamento seguindo as normas xerais determinadas nesta lei.

Artigo 35°.-Subscrición e transmisión.

1. A débeda pública poderá, estar representada por títulos-valores ou calquera outro documento que formalmente a recoñeza.

2. Na subscrición e transmisión da débeda pública negociable só será preceptiva a intervención de fedatario público cando aquela estea representada por títulos valores e así o dispoña a lexislación aplicable a estes. Non será preceptiva, en todo caso, para as operacións con títulos de pagamento ou títulos análogos emitidos pola CA ou os seus organismos autónomos nos que os títulos-valores se extingan pola súa transformación en anotacións en conta.

Artigo 36°. Aplicación orzamentaria.

O produto que se obteña da débeda pública e demais operacións de crédito, así como a súa amortización e xuros, aplicarase ó orzamento da CA ou dos seus organismos autónomos correspondentes, sen prexuízo do disposto no art. 34°.

Artigo 37°.-Competencia e atribucións do conselleiro de Economía e Facenda.

Coas limitacións que se derivan do contido do presente capítulo, facúltase o conselleiro de Economía e Facenda para:

1. Proceder a autoriza-la emisión ou contracción de débeda pública e demais operacións de crédito da CA ou dos seus organismos autónomos respectivos, determinando a súa representación en títulos-valores, títulos de pagamento ou outros documentos que formalmente a recoñezan; sinalar ou concerta-lo seu prazo, tipo de xuro e demais características; e formalizar, se é o caso, en representación da CA, tales operacións, podendo delega-la dita representación nun funcionario da consellería cando a formalización da operación se realice no estranxeiro.

2. Utilizar para a colocación de emisións de débeda pública calquera técnica financeira relativa á súa oferta, xuros, prazo ou calquera outra condición delas, sempre que o seu uso non represente a creación de situacións distintas ás derivadas das prácticas usualmente aceptadas nos mercados financeiros.

3. Proceder de acordo coas condicións da emisión ou da contracción, ou de mutuo acordo cos acredores, ó reembolso anticipado total ou parcial da débeda pública ou dos préstamos concertados ou á modificación dalgunha das súas condicións cando a situación do mercado ou outras circunstancias así o aconsellen.

4. Calquera outra operación usual no mercado financeiro, sempre que non prexudique os acredores ou se realice de común acordo con estes e non estea expresamente excluída pola normativa aplicable.

5. Encomendárllle-lo exercicio das facultades expostas nos números anteriores en relación coa débeda pública emitida ou contraída polos organismos autónomos ós seus correspondentes órganos rectores.

Artigo 38°.-Beneficios.

1. A débeda pública da CA gozará dos mesmos beneficios cá débeda pública do Estado e suxeitarase ás demais normas que lle sexan aplicables segundo a súa modalidade e características, e conforme o previsto polas leis.

2. Os títulos ó portador da débeda pública que fosen roubados ou furtados, ou que sufrisen extravío ou destrución, seralles aplicable o procedemento previsto pola lexislación mercantil, agás que se dictasen procedementos administrativos especiais que total ou parcialmente substituísen a aquel.

Artigo 39°.-Prescripción.

A obriga de reembolso dos capitais da débeda pública e o pagamento dos seus xuros prescribirán de acordo co procedemento e cos prazos establecidos pola normativa vixente para a débeda pública do Estado.

CAPÍTULO II

Das garantías

Artigo 40°.-Garantía por aval.

1. A CA poderá afianza-las obrigas derivadas de créditos concertados por persoas naturais ou xurídicas, públicas ou privadas, con domicilio social en Galicia, mediante o outorgamento do correspondente aval da Tesourería, na forma establecida nesta lei.

2. Os citados avais autorizaraos a Xunta de Galicia, por proposta do conselleiro de Economía e Fazenda, e serán publicados no *Diario Oficial de Galicia*.

Artigo 41°.-Importe.

O importe máximo dos avais que poderá concede-la CA durante o ano será determinado na Lei de orzamentos xerais da CA.

Artigo 42°.-Beneficiarios.

1. A CA poderá avala-las operacións de crédito que a favor dos seus organismos autónomos, sociedades públicas e corporacións locais sitas no seu territorio concedan as entidades de crédito legalmente establecidas.

Así mesmo poderalles prestar un segundo aval ás empresas privadas que teñan fixado o seu domicilio social ou a radicación dos seus negocios en Galicia.

2. Os créditos avalados na forma indicada no n.º anterior, no caso de que os beneficiarios sexan empresas privadas, soamente poderán ter como finalidade financia-la creación, reconversión e reestructuración de medianas e pequenas empresas que, mediante a presentación dun plan económico-financieiro, demostren a capacidade e dimensionamento necesario para facer viable a súa continuidade. Neste suposto cada aval individualizado non poderá exceder do 2% do límite global autorizado na Lei de orzamentos xerais da Comunidade.

3. A Intervención Xeral da CA controlará a debida aplicación dos créditos avalados.

Trimestralmente daráselle conta ó Parlamento dos avais existentes, dos novos avais concedidos e, se é o caso, dos riscos efectivos ós que a Tesourería da CA lles tivese que facer fronte.

Artigo 43º. Obrigas.

1. Os avais outorgados pola CA terán carácter subsidiario e obrigarán á súa Tesourería polo importe do principal e dos xuros só no caso de non poder satisfacelos o debedor principal ou o primeiro avalista.

2. Poderá converirse a renuncia ó beneficio de excusión previsto no art. 1.830 CC se se garantisen créditos concertados polos seus organismos autónomos e entes públicos, corporacións locais existentes no seu territorio ou, para cada caso, se se autorizase a dita renuncia por lei do Parlamento de Galicia.

3. Os avais outorgados pola CA documentaranse na forma na que regulamentariamente se determine e devengarán a favor da súa Tesourería a comisión que para cada caso se estableza.

Artigo 44º. Autorización legal.

Para a concesión de calquera outra forma de aval da non prevista no presente capítulo será precisa autorización mediante a correspondente lei, a que determinará polo menos a identidade dos avalados e o límite e prazo do correspondente aval.

Artigo 45º.-Avais dos organismos autónomos.

1. Os organismos autónomos e entes públicos poderán prestar avais dentro do límite máximo fixado con esta finalidade para cada exercicio pola correspondente lei de orzamentos xerais, sempre que os beneficiarios sexan sociedades públicas ou mercantís no capital das cales participen. Dos avais que concedan, así como da situación dos existentes, deberán renderlle conta anual á Consellería de Economía e Facenda.

Sen embargo, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá conceder avais, dentro do límite máximo fixado, a aquelas empresas privadas, participadas ou non por este instituto, e para aquelas operacións que reúnan as condicións e cumpran os requisitos que se establezan por acordo do Consello da Xunta de Galicia por proposta da Consellería de Economía e Facenda. O citado acordo publicarase no *Diario Oficial de Galicia*.

Así mesmo, ós avais concedidos en virtude deste artigo deberá dárseles publicidade no *Diario Oficial de Galicia*.

2. Os avais así concertados cumprirán as condicións establecidas no art. 43º.1 desta lei, salvo acordo da Xunta no que autorice a renuncia do beneficio de excusión previsto no art. 1.830 CC.

TÍTULO III

Dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma

CAPÍTULO I

Contido e aprobación

Artigo 46º.-Concepto.

1. Os orzamentos xerais da CA constitúen a expresión cifrada, conxunta e sistemática:

a) Das obrigas que, como máximo, se poderán recoñecer e os dereitos que se prevexan liquidar por parte da CA e dos seus organismos autónomos durante o exercicio orzamentario.

b) Dos obxectivos que se pretendan conseguir coa utilización dos recursos financeiros consignados neles.

c) Das estimacións dos fluxos financeiros das sociedades públicas.

d) Da totalidade dos gastos e ingresos dos demais entes públicos.

e) Dos beneficios fiscais estimados.

2. Os orzamentos xerais da CA enmarcaranse nun escenario plurianual que conteña as liñas básicas da actuación a medio prazo do sector público galego.

3. Os orzamentos xerais da CA presentaranse e aprobaranse de forma que os estados de gastos non superen os recursos totais previstos nos respectivos estados de ingresos.

4. Logo da autorización do conselleiro de Economía e Facenda poderán xestionarse e contabilizarse como operacións extraorzamentarias aquelas nas que a actividade da CA e dos seus organismos autónomos se limite á realización de funcións de intermediación na súa xestión.

Artigo 47º.-O exercicio orzamentario.

O exercicio orzamentario coincidirá co ano natural e a el imputaráselle:

a) Os dereitos liquidados no seu transcurso, calquera que sexa o período ó que correspondan.

b) As obrigas recoñecidas ata o 31 de decembro do correspondente exercicio, como consecuencia de adquisicións, obras, subministracións, prestacións de servizos ou outro tipo de gastos realizados con cargo ós créditos respectivos dentro do correspondente ano natural, sen prexuízo do disposto no punto 2 do art. 60º.

Artigo 48º.-Contido.

1. Os orzamentos xerais da CA estarán integrados:

a) Polo orzamento da CA

b) Polos orzamentos dos organismos autónomos.

c) Polos orzamentos de explotación e capital das sociedades públicas.

d) Polos orzamentos dos demais entes Públicos a que fai referencia o art. 12º desta lei.

2. Os orzamentos xerais da CA conterán:

- a) Os estados de gastos, nos que se especificarán na forma establecida os créditos necesarios para darlle cumprimento ás obrigas.
- b) Os estados de ingresos, nos que se detallarán as estimacións dos dereitos económicos que se liquidarán durante o exercicio orzamentario.
- c) Os estados financeiros dos organismos Autónomos comerciais, industriais ou financeiros a que fai referencia o artigo 11º desta lei.
- d) Os estados financeiros das sociedades públicas.

Artigo 49º.-Estructura.

Os orzamentos xerais da CA axustaranse, en canto á súa estrutura, ás seguintes regras.

Primeira.

a) Os estados de gastos confeccionaranse aplicando unha clasificación funcional por programas. Así mesmo, as clasificacións orgánica e económica informarán, respectivamente, sobre o axente que realiza o gasto e a súa natureza.

b) Para cada programa de gasto estableceranse os obxectivos que se pretenden conseguir cos recursos que se lle asignen, así como sempre que sexa posible os indicadores de seguimento que se consideren adecuados para analiza-lo grao de consecución dos destes.

c) Presentaranse con separación os gastos correntes e os gastos de capital e a súa clasificación económica rexerese polos seguintes criterios:

1. Nos créditos para gastos correntes distinguiranse os de funcionamento dos servizos, os gastos financeiros e as transferencias correntes.

2. Nos créditos para gastos de capital distinguiranse os de investimentos reais, as transferencias de capital e as variacións de activos e pasivos financeiros.

Segunda.

Os estados de ingresos presentarán unha clasificación económica distinguindo os correspondentes a operacións correntes e as operacións de capital.

Artigo 50º.-Competencias das consellerías.

1. Correspóndelle á Consellería de Economía e Facenda determinar con carácter xeral as estruturas básicas dos orzamentos e os demais estados financeiros correspondentes á CA, ós seus organismos autónomos e ós demais entes e sociedades públicas.

2. As distintas consellerías adoptarán as ditas estruturas básicas e desenvolveranas en función das súas propias necesidades de xestión e das dos organismos autónomos, entes e sociedades públicas a elas adscritas.

3. Os obxectivos e indicadores de seguimento ós que fai referencia o art. 49º. Primeira. b) estableceranos as consellerías, os organismos autónomos e demais entes públicos, de acordo coa Consellería de Economía e Facenda.

Artigo 51º.-Elaboración dos orzamentos xerais.

O procedemento para a elaboración dos orzamentos xerais da CA axustarase ás seguintes normas:

1. Os órganos estatutarios da CA e as consellerías remitiranlle á de Economía e Facenda antes do 1 de xullo os seus respectivos estados de gastos debidamente documentados e axustados ás normas que lles sexan aplicables e ás directrices establecidas pola Xunta.

2. Dentro do mesmo prazo e coas mesmas formalidades indicadas no punto anterior, cada unha das consellerías remitirá:

a) Os anteproxectos de orzamentos de gastos e ingresos dos organismos autónomos que teñan adscritos, formando un só orzamento para cada organismo, incluíndo nos que teñan carácter comercial, industrial ou financeiro os estados financeiros a que fai referencia o art. 82º da presente lei.

b) Os anteproxectos de orzamentos de ingresos e gastos dos entes públicos ós que fai referencia o art. 12º desta lei que lle estean adscritos.

c) Os anteproxectos de orzamentos de explotación e capital das sociedades públicas que teñan adscritas.

3. O anteproxecto de orzamento de ingresos da CA no que se recolla a estimación dos recursos derivados das fontes xerais de financiamento elaborarao a Consellería de Economía e Facenda.

4. Tendo en conta os estados de ingresos e gastos mencionados e o marco macroeconómico no que se contaña a previsible actividade económica do exercicio orzamentario seguinte, a Consellería de Economía e Facenda formulará o anteproxecto de Lei de orzamentos xerais da CA e someterao a acordo da Xunta.

5. Xunto co anteproxecto de lei de orzamentos xerais da CA remitiráselle ó Consello da Xunta a seguinte documentación:

a) A conta consolidada dos orzamentos xerais da CA.

b) Unha memoria explicativa do seu contido e das principais diferencias existentes neles en relación co orzamento en vigor.

c) A liquidación dos orzamentos do ano anterior e un avance dos do exercicio corrente.

d) Un informe económico e financeiro.

e) Un anexo de investimentos reais, que conterà a valoración dos proxectos de investimento público que se van realizar e a súa distribución territorial. No caso de investimentos plurianuais, indicarase o investimento de cada ano.

Dentro do dito anexo de investimentos reais distinguiranse os proxectos de investimento en vinculantes e non vinculantes. Os créditos destinados a proxectos de investimento ós que se lles dea carácter vinculante non poderán destinarse ó financiamento doutros proxectos, agás por autorización do conselleiro de Economía e Facenda. Trimestralmente comunicaráselle á Comisión 3ª, de Economía, Facenda e Orzamentos, do Parlamento de Galicia a relación das autorizacións realizadas, no caso de as haber.

f) Un anexo de transferencias.

g) Un anexo de persoal.

Artigo 52º.-Remisión ó Parlamento.

O proxecto de lei de orzamentos xerais da CA, xunto coa documentación establecida no nº 5 do artigo anterior, remitiráselle ó Parlamento de Galicia antes do 20 de outubro para os efectos do art. 53º.1 EA de Galicia.

Artigo 53º.-Orzamentos das deputacións provinciais.

A Xunta remitíralle igualmente ó Parlamento de Galicia os orzamentos das deputacións provinciais, para os efectos previstos na disp. adic. terceira do EA e na Lei 5/97, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

Artigo 54º.-Prórroga dos orzamentos xerais.

Se a lei de orzamentos xerais non fose aprobada polo Parlamento de Galicia antes do primeiro día do exercicio económico no que teña que aplicarse, consideraranse automaticamente prorrogados os do exercicio inmediato anterior.

1. A Consellería de Economía e Facenda poderá elaborar, se é o caso, os correspondentes estados de gastos nos que se detallarán os importes dos créditos prorrogados. Os ditos importes serán o resultado de realizar nos créditos iniciais do orzamento prorrogado as operacións seguintes:

a) Excluiranse aqueles gastos que correspondan a actuacións que deban quedar ultimadas ó finalizo do exercicio os orzamentos do cal se prorrogan, así como aqueles que non se consideren necesarios para o exercicio que se inicia.

b) Nos indicados estados de gastos incluíranse aqueles créditos que correspondan a actuacións de urxente iniciación ou cobertura, sempre que teñan cabida dentro das baixas motivadas polo indicado na alínea a) anterior.

c) O conselleiro de Economía e Facenda determinará qué modificacións orzamentarias das realizadas durante o exercicio os orzamentos do cal se prorrogan se consolidarán nos estados de gastos a que fai referencia a alínea a).

2. Durante o período de prórroga seralles a aplicable ós estados de gastos resultantes do disposto no nº. anterior o contido no capítulo II deste título III.

3. Unha vez aprobados os orzamentos xerais da CA procederase a imputarlles a estes as operacións realizadas durante o período de prórroga, de acordo coas instrucións que para o efecto dicte a Consellería de Economía e Facenda.

No caso de non existir nos orzamentos aprobados créditos ós que lles imputar expedientes de gasto tramitados durante o período de prórroga, a consellería ou o organismo autónomo afectado propoñeralle á Consellería de Economía e Facenda aqueles créditos do orzamento aprobado con cargo ós cales deberá efectuarse a imputación.

4. A Consellería de Economía e Facenda confeccionará así mesmo os estados de ingresos que terán vixencia durante o período de prórroga e que se elaborarán en función das previsións que poidan derivarse ben da liquidación dos orzamentos de ingresos do exercicio prorrogado ou de calquera outro dato válido para sustenta-las ditas previsións, sempre que non supoña a introducción de ningún cambio na normativa legal vixente durante o exercicio do cal se prorroga o orzamento.

5. O texto da Lei de orzamentos correspondente ós que se prorrogan tamén se prorrogará nos seus propios termos, excepto aquelas disposicións que polas súas propias características só puidesen ter exclusiva vixencia durante o respectivo ano natural.

Artigo 55º.-Dereitos e obrigas recoñecidas.

1. Os dereitos liquidados e as obrigas recoñecidas aplicaranse ós orzamentos polo seu importe íntegro, quedando prohibido atender obrigas mediante minoración dos dereitos que se van liquidar ou xa ingresados, a non ser por autorización expresa dunha lei.

2. Exceptúanse do disposto no punto anterior as devolucións de ingresos que se declaren indebidos por tribunal ou autoridade competentes.

3. Para os efectos deste artigo entenderase por importe íntegro o que resulte despois de aplicar os beneficios fiscais que sexan procedentes, os que deberán ser obxecto de contabilización independen-

te. O importe dos beneficios fiscais que afecten ós tributos propios da CA incluíranse na lei de orzamentos xerais da CA.

CAPÍTULO II

Dos créditos e das súas modificacións.

Artigo 56º.-Autorización de créditos.

1. Os créditos consignados nos estados de gastos destinaranse exclusivamente ás finalidades específicas para as que foron autorizados pola lei de orzamentos ou polas modificacións aprobadas conforme esta lei.

2. Os créditos autorizados nos programas de gastos teñen carácter limitativo e vinculante no nivel de concepto. Sen embargo, os créditos destinados a gastos de persoal, excepto os que se refiren a incentivos ó rendemento, e os gastos en bens correntes e servicios terán carácter vinculante no nivel de artigo.

3. No orzamento correspondente ós servicios transferidos do Insalud a vinculación anterior entenderase referida ós seus grupos de programas, atendidos o alcance e grao de pormenor da súa estrutura na citada clasificación, en tanto en canto a dita estrutura difira da establecida con carácter xeral para a CA.

4. En todo caso terán carácter vinculante, co nivel de desagregación económica co que aparezan nos estados de gastos, os créditos destinados a atencións protocolarias e representativas e os declarados ampliables conforme o art. 64º desta lei.

Artigo 57º.-Nulidade de obrigas.

1. Non poderán adquirirse compromisos de gastos por contía superior ó importe dos créditos figurados nos estados de gastos, sendo nulos de pleno dereito os actos administrativos e as disp. xerais con rango inferior a lei que infrinxan a expresada norma, sen prexuízo das responsabilidades a que haxa lugar.

2. Exceptúanse do disposto no nº. 1 anterior aqueles compromisos de gastos que regulamentariamente se determinen, cando a imputación corresponda a créditos ampliables ou que se adquiran como consecuencia das necesidades propias do normal funcionamento dos servicios e o seu importe exacto sexa de difícil previsión por corresponder a obrigas de tracto sucesivo.

Artigo 58º.-Gastos plurianuais.

1. Poderán adquirirse compromisos de gastos de carácter plurianual, aínda que a súa execución deba iniciarse no exercicio seguinte, cando o seu contido coincida cos que a seguir se especifican:

a) Investimentos e transferencias de capital.

b) Transferencias correntes derivadas de normas con rango de lei.

c) Gastos en bens e servicios dos que a súa contratación, baixo as modalidades establecidas na Lei de contratos das administracións públicas, non poida ser estipulada ou resulte antieconómica por prazo dun ano.

d) Arrendamentos de bens inmoables que vaian ser utilizados por organismos ou servicios da CA.

e) Cargas financeiras derivadas de operacións de endebedamento da CA ou dos seus organismos autónomos.

f) Activos financeiros.

g) Convenios con universidades e outras institucións ou centros docentes cando aqueles deban executarse durante cursos académicos coincidentes con dous exercicios orzamentarios.

2. A autorización ou, realización dos gastos de carácter plurianual subordinarase ás créditos que para cada exercicio se consignen nos orzamentos xerais da CA.

3. O número de exercicios ós que poden aplicarse os gastos incluídos nas letras a), b), c), f) e g) do nº. 1 non poderá ser superior a catro, quedando reducido a dous anos nos traballos específicos e non habituais.

O gasto que nestes casos se comprometa con cargo a exercicios futuros non poderá exceder do resultado de aplicar ó crédito inicial, no nivel de concepto, as seguintes porcentaxes: no exercicio inmediato seguinte o 70%, no seguinte exercicio o 60% e nos exercicios terceiro e cuarto o 50%.

O total dos importes comprometidos con cargo a exercicios futuros no conxunto dos conceptos que definen un nivel de vinculación non poderá supera-las porcentaxes arriba indicadas, calculadas sobre o crédito inicial, dese conxunto de conceptos.

4. Tamén poderá ser diferido o pagamento do prezo de compra das adquisicións de bens inmobles cando o importe exceda de 350 millóns de ptas., sen que en ningún caso o desembolso inicial no momento de asina-la da escritura poida ser inferior ó 30% do prezo, podendo distribuírse libremente o resto ata en catro anualidades sucesivas ós respectivos vencementos dentro das limitacións do punto anterior.

5. Con independencia do establecido nos nºs. anteriores para os programas e proxectos de gastos de capital que se especifiquen nas leis de orzamentos, poderán adquirirse compromisos de gastos que teñan que estenderse a exercicios futuros ata o importe que para cada unha das anualidades se determine.

Para estes efectos, cando nos créditos orzamentarios se encontren incluídos proxectos das características sinaladas anteriormente, as porcentaxes a que se refire o nº. 3 deste art. aplicaranse sobre os ditos créditos, unha vez deducida a anualidade correspondente a estes proxectos.

6. O Consello da Xunta, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, poderá modifica-las porcentaxes sinaladas no nº. 3 deste art. e os importes que se fixen conforme o disposto no nº. 5, así como modifica-lo número de anualidades en casos especialmente xustificados, a petición da correspondente consellería e logo dos informes que se estimen oportunos, e, en todo caso, do da dirección xeral competente en materia de orzamentos.

7. Os compromisos de gastos de carácter plurianual a que fai referencia o presente artigo serán adecuadamente contabilizados de forma independente.

Artigo 59º.-Anulación de créditos.

1. Os créditos destinados a atender gastos que no último día do exercicio orzamentario non este-an afectados ó cumprimento de obrigas recoñecidas quedarán anulados de pleno dereito, salvo as excepcións recollidas no art. 71º da presente lei.

2. Malia o indicado no número anterior, a anulación de créditos que por disposición legal teñan o carácter de incorporables non impedirá a continuación da tramitación en forma provisional de expedientes de gastos con base nos mesmos, condicionados a que ó dictarse o acordo de autorización do compromiso de gasto exista crédito adecuado e suficiente.

En ningún caso esta tramitación provisional poderá xerar dereitos a favor de terceiros.

Artigo 60º.-Regulación de obrigas.

1. Con cargo ós créditos consignados nos estados de gastos só poderán contraerse obrigas derivadas de adquisicións, obras, prestacións de servizos e demais gastos en xeral realizados no ano natural do correspondente exercicio orzamentario.

2. Sen embargo, aplicaráselles ós créditos do orzamento vixente no momento da expedición de ordes de pagamento as seguintes obrigas:

a) As que resulten do recoñemento e da liquidación de atrasos a favor do persoal que perciba as súas retribucións con cargo ós orzamentos xerais da CA.

b) As derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en exercicios anteriores.

Naqueles casos nos que non exista crédito adecuado no exercicio corrente, por iniciativa da consellería correspondente, o conselleiro de Economía e Facenda poderá determinar os créditos ós que se lles deberá imputar-lo pagamento destas obrigas.

Artigo 61º.-Normativa aplicable.

1. As modificacións dos créditos orzamentarios axustaranse ó disposto nesta lei e nas leis anuais de orzamentos.

2. Todo acordo de modificación orzamentaria deberá indicar expresamente, ademais da sección ou ente público a que se refira, o programa, servizo ou organismo autónomo, artigo, concepto e sub-concepto, se é o caso, afectados por ela, incluso naqueles casos nos que o crédito se consigne ou sexa vinculante no nivel de artigo.

As limitacións establecidas no art. 68º desta lei entenderanse referidas no nivel de concepto para aqueles casos nos que a vinculación establecida o sexa no nivel de artigo.

A correspondente proposta de modificación orzamentaria deberá expresar ineludiblemente a súa incidencia na consecución dos obxectivos previstos, así como as razóns que a xustifican.

Artigo 62º.-Créditos extraordinarios e suplementos.

1. Cando deba realizarse algún gasto con cargo ós orzamentos xerais da CA que non poida demorarse ata o exercicio seguinte e non exista crédito nos estados de gastos, ou sexa insuficiente e non ampliable o consignado, o conselleiro de Economía e Facenda, logo de informe da dirección xeral competente en materia de orzamentos, someterá ó acordo da Xunta, para a súa remisión ó Parlamento, un proxecto de lei de concesión dun crédito extraordinario no primeiro caso ou dun suplemento de crédito no segundo, no que se especificarán necesariamente os recursos con que se financiará o gasto que por estas causas se xera, e o detalle do concepto orzamentario que se debe crear ou que é suplementado.

2. Malia o indicado no punto anterior, se a necesidade de crédito extraordinario ou de suplemento de crédito se produce nun organismo autónomo e estes non supoñen aumento nos créditos do orzamento da CA, observaranse as seguintes normas:

a) A súa concesión será facultade do conselleiro de Economía e Facenda se o seu importe non excede do 5% do orzamento de gastos do organismo autónomo correspondente, e da Xunta de Galicia cando, superando a dita porcentaxe, non excede o 10% do citado orzamento de gastos. As ditas porcentaxes aplicaranse de forma conxunta e acumulada para ámbalas dúas clases de modificacións de crédito e ó logo do mesmo exercicio orzamentario.

b) No expediente de modificación orzamentaria emitirá informe a consellería á que estea adscrito o organismo autónomo que o promova, xustificando debidamente a necesidade e urxencia do gasto e propoñendo os recursos con que se financiará o incremento que se propón.

c) A Xunta de Galicia daralle conta trimestralmente ó Parlamento de Galicia dos créditos extraordinarios e suplementos de crédito concedidos ó abeiro do previsto na alínea a) deste número.

Artigo 63º.-Anticipos de Tesourería.

A Xunta de Galicia, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, poderá excepcionalmente conceder anticipos de Tesourería para atender gastos inaprazables, ata un límite do 2% dos créditos autorizados pola Lei de orzamentos xerais da CA, nos seguintes casos:

a) Cando, dentro da tramitación do expediente de crédito extraordinario ou suplemento de crédito, recaese acordo favorable da Xunta para remitirille ó Parlamento o correspondente proxecto de lei.

b) Cando se promulgue unha lei na que se establezan obrigas que para o seu cumprimento sexa precisa a concesión dun crédito extraordinario ou dun suplemento de crédito.

c) Se o Parlamento de Galicia non aprobase o proxecto do lei de concesión de crédito extraordinario ou do suplemento de crédito, o importe do anticipo de Tesourería será cancelado mediante minoración nos créditos que ocasionen menor trastorno nos servicios públicos da respectiva consellería ou organismo autónomo.

Artigo 64º.-Créditos ampliáveis.

1. Malia o disposto nos arts. 56º e 57º desta lei, terán excepcionalmente a condición de créditos ampliáveis:

a) Aqueles que se especifiquen de maneira singular na lei de orzamentos xerais da CA e coas condicións que nela se determinen.

b) Os que se destinen a cubri-los gastos dos servicios traspasados pola Administración do Estado, cando sexan ampliadas as transferencias nas respectivas materias e polo importe do custo efectivo de tódalas ampliacións, mentres este non se integre na base de cálculo para obte-la porcentaxe da participación nos ingresos do Estado.

c) As cotas de SS e a prestación familiar, así como as achegas que, se é o caso, lle corresponda efectuar á CA ó réxime de previsión social dos seus funcionarios.

d) Os que se destinen ó pagamento de xuros, amortizacións do principal e gastos derivados da débeda pública emitida pola CA ou a operacións de crédito concertadas por ela.

e) Os créditos destinados á cobertura de necesidades de toda orde motivadas por sinistros, catástrofes ou outros de recoñecida urxencia, correspondentes a gastos en bens correntes e de servicio.

f) Os destinados ó pagamento de productos farmacéuticos procedentes de receitas médicas.

g) Os créditos dos que a súa execución corresponda a unha consellería e que a súa contía se module pola achega doutras consellerías ou organismos autónomos, logo de retención do crédito correspondente nos estados de gasto afectados. A estes créditos non lles serán aplicables as limitacións a que se refire o art. 68º desta lei.

2. O expediente de ampliación de créditos deberá establece-la fonte de financiamento da dita ampliación, distinguindo se este se financia con retencións noutros créditos, con maiores recursos que

se vaian obter, con remanente de Tesourería, con endebedamento dentro dos límites autorizados ou con outras formas de financiamento que non entrañen déficit orzamentario.

Artigo 65º.-Competencias do Consello da Xunta.

1. Correspóndelle ó Consello da Xunta, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, e por iniciativa das consellerías correspondentes:

a) Autorizar transferencias de créditos entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servicios ou organismos autónomos dunha mesma consellería.

b) Autorizar transferencias de créditos entre un ou varios programas incluídos na mesma función, correspondentes a servicios ou organismos autónomos de diferentes consellerías.

c) Autorizar transferencias de crédito entre programas incluídos en distintas funcións, correspondentes a servicios ou organismos autónomos de diferentes consellerías, sempre que se trate de reorganizacións administrativas ou que se produzan como consecuencia da aplicación dos recursos procedentes do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ou do Fondo Social Europeo.

d) Autorizar transferencias de créditos por proposta do conselleiro de Economía e Facenda das dotacións non utilizadas nos programas das distintas seccións do orzamento ós distintos conceptos do programa de imprevistos e funcións non clasificadas, habilitando os créditos que sexan necesarios para a súa posterior reasignación.

2. De cada modificación acordada en virtude do disposto neste artigo daráselle conta de modo singular, no prazo máximo de trinta días, á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos, con remisión de copia do correspondente expediente.

Artigo 66º.-Facultades da Consellería de Economía e Facenda.

Correspóndenlle ó conselleiro de Economía e Facenda, ademais das competencias xenéricas atribuídas ós titulares das consellerías, as seguintes de carácter específico:

a) Resolve-los expedientes de modificacións orzamentarias, nos supostos nos que estes estean atribuídos ós titulares das distintas consellerías e exista discrepancia na consellería respectiva co informe da Intervención Delegada.

b) Autorizar transferencias de crédito entre un ou varios programas incluídos na mesma ou distinta función, dentro do mesmo grupo de funcións, correspondentes, a servicios ou organismos autónomos dunha mesma consellería, coa creación de novos conceptos orzamentarios, se isto fose preciso.

c) Autorizar transferencias de créditos desde o programa de imprevistos e funcións non clasificadas ós conceptos e artigos dos demais programas de gasto, calquera que sexa a función ou sección a que corresponda.

A consellería ou o organismo autónomo que solicite a transferencia deberá xustificar-la imposibilidade de atender-las insuficiencias mediante reaxuste dos seus créditos. Para tal efecto deberá procederse a unha revisión de conxunto dos oportunos programas de gasto, poñendo de manifesto as desviacións que na consecución dos obxectivos previstos motivaría a modificación orzamentaria proposta.

d) Introducir , logo de informe da consellería correspondente, as variacións que sexan precisas nos orzamentos de servicios transferidos do Inerser e do Insalud, co obxecto de adaptalos ós resultados da aprobación polas Cortes Xerais dos orzamentos xerais da SS.

- e) Autoriza-las incorporacións de crédito previstas no art. 71º desta lei.
- f) Autoriza-las xeracións de crédito previstas nos arts. 69º e 70º desta lei.
- g) Autoriza-las ampliacións de crédito cando estes teñan tal carácter por disposición de lei.

h) Introducir nos estados de gastos as modificacións precisas para adecua-los créditos afectados por transferencias finalistas procedentes dos orzamentos xerais da Administración do Estado e das comunidades europeas, e os demais recursos de igual carácter e procedencia. Esta autorización implicará o aumento ou a diminución das consignacións previstas, así como a incorporación ou creación dos correspondentes conceptos orzamentarios se así procede.

Artigo 67º.-Facultades dos conselleiros.

1. Os titulares das consellerías poderán autorizar, logo de informe da Intervención Delegada correspondente, as transferencias de créditos entre diferentes conceptos do capítulo II, dun mesmo programa, correspondentes a un mesmo ou diferente servicio ou organismo autónomo dependente da consellería, sempre que non afecten a créditos de atencións protocolarias ou representativas, nin supoñan desviación na consecución dos obxectivos previstos para o programa respectivo.

En tanto o capítulo II teña carácter limitativo e vinculante no nivel de artigo, esta autorización comporta a creación, se é o caso, de novos conceptos orzamentarios dos previstos na clasificación económica.

2. En caso de discrepancia co informe emitido pola intervención delegada sobre a modificación orzamentaria proposta, remitiráselle o expediente á Consellería de Economía e Facenda para os efectos previstos no art. 66º a) da presente lei.

3. Os presidentes dos órganos estatutarios da CA terán as mesmas competencias establecidas neste art. en relación coas modificacións orzamentarias do seu respectivo orzamento, sen prexuízo do principio de autonomía orzamentaria do Parlamento de Galicia.

4. En todo caso, unha vez autorizadas as modificacións orzamentarias incluídas nos nºs. 1 e 3, remitiráselle á dirección xeral competente en materia de orzamentos da Consellería de Economía e Facenda, para instrumenta-la súa execución.

Artigo 68º.-Limitacións.

1. As transferencias de crédito de calquera clase estarán suxeitas ás seguintes limitacións:

- a) Non, afectarán ós créditos ampliáveis nin ós extraordinarios concedidos durante o exercicio.
- b) Non poderán minorarse os créditos incorporados como consecuencia de remanentes de exercicios anteriores nin os que fosen incrementados con suplementos ou transferencias, agás cando afecten a créditos de persoal.
- c) Non poderán incrementarse créditos que como consecuencia doutras transferencias fosen obxecto de minoración, agás cando afecten a créditos de persoal.

2. Respecto do orzamento dos servicios transferidos do Insalud as limitacións contidas nas alíneas b) e c) anteriores entenderanse referidas ós orzamentos totais da entidade xestora, aínda cando estes se desenvolvan de modo descentralizado a través dos distintos centros de gastos.

3. As anteriores limitacións non afectarán as transferencias de créditos que se refiran ó programa de imprevistos e funcións non clasificadas, nin serán aplicables cando se trate créditos modificados como consecuencia de reorganizacións administrativas, de acordos de transferencias de servicios ou

que amparen gastos financiados exclusivamente ou cofinanciados coas comunidades europeas.

4. Os créditos correspondentes a financiamento condicionado estarán suxeitos ás limitacións específicas que lles sexan aplicables; de non existir estas seralles aplicable o determinado no nº 1 deste art.

Artigo 69º.-Xeración de crédito.

1. Poderán xerar crédito nos estados de gastos dos orzamentos os ingresos efectivos, os dereitos liquidados e os compromisos firmes de ingresos derivados das seguintes operacións:

a) Achegas doutras administracións públicas ou de persoas físicas ou xurídicas para financiar gastos que pola súa natureza estean comprendidos nos fins ou obxectivos encomendados á CA ou ós seus organismos autónomos.

b) Alleamento de bens da CA ou dos seus organismos autónomos.

c) Prestación de servizos.

d) Reembolso dos préstamos destinados a atencións sociais e á promoción e ó fomento da actividade económica e cultural de Galicia.

e) Créditos do exterior para financiar investimentos públicos.

2. As xeracións de crédito a que se fai referencia no número anterior unicamente poderán realizarse polo exceso de ingreso sobre as cifras inicialmente orzadas, e cando se deriven das operacións incluídas na alínea c), destinaranse unicamente ó financiamento dos gastos correspondentes no capítulo II do orzamento.

3. As xeracións de crédito efectuaranse no mesmo exercicio no que se produciu o ingreso, agás cando este teña lugar no último trimestre do ano ou cando se trate de fondos procedentes da Unión Europea ou da Administración Central do Estado que os cofinancien, casos no que se poderá xerar crédito no exercicio seguinte, sempre que se xustifique a imposibilidade de ter tramitada a xeración no mesmo exercicio no que se produciu o ingreso. Neste caso, o límite ó que se refire o punto anterior entenderase referido ó orzamento de orixe.

Artigo 70º. Reposición.

Os ingresos derivados do reintegro, de pagamentos indebidos con cargo a créditos orzamentarios poderán repoñer estes últimos nas condicións que se establezan regulamentariamente.

Artigo 71º.-Incorporacións.

1. Malia o disposto no art. 59º desta lei, poderán incorporarse ós estados de gastos do orzamento correspondente ó exercicio inmediato seguinte:

a) Os créditos extraordinarios e os suplementos de crédito, así como as transferencias de crédito, que se concedesen ou autorizasen, respectivamente, no último mes do exercicio orzamentario e que, por causas xustificadas, non puidesen ser utilizados durante este.

b) Os créditos que recollan compromisos de gastos anteriores ó último mes do exercicio orzamentario e que non puidesen executarse á fin do exercicio económico por causas xustificadas.

Será preciso que tales compromisos de gastos acadasen a fase de disposición en contabilidade antes do último mes do exercicio.

c) Os créditos destinados a operacións de capital.

- d) Os créditos autorizados en función da efectiva recadación de dereitos afectados a estes.
- e) Os créditos xerados polas operacións enumeradas no art. 69º deste lei.

2. Os remanentes incorporados, segundo o previsto no número anterior unicamente poderán ser aplicados dentro do exercicio orzamentario no que a incorporación se acorde, a excepción dos que correspondan a créditos financiados polo Fondo de Compensación Interterritorial ou por fondos ou subvencións finalistas procedentes da Unión Europea ou doutras administracións públicas, que poderán ser incorporados en canto persista o dereito á percepción do ingreso que os financia.

Nos supostos a) e b) do dito número a incorporación farase para os mesmos gastos que motivaron en cada caso a concesión, a autorización e o compromiso.

3. Os créditos correspondentes a financiamento condicionado serán incomparables de acordo coa normativa que lles sexa aplicable en cada caso. De non existir esta, rexeranse polas normas desta lei.

4. O conselleiro de Economía e Facenda poderá acordar, con carácter xeral, a incorporación automática ó exercicio seguinte dos créditos a que se refire a alínea d) do número 1 anterior.

- 5. Das incorporacións a que se refiren os nºs. 1 e 3 daráselle conta ó Parlamento.

CAPÍTULO III

Execución e liquidación

Artigo 72º.-Autorización de gasto.

1. Correspóndelles ós órganos estatutarios, agás o que establezan outras leis aplicables, ós conselleiros e demais órganos da CA que tivesen dotacións diferenciadas nos seus estados de gastos autoriza-los gastos referentes ós servizos o seu cargo, excepto nos casos reservados polas leis á competencia da Xunta de Galicia, así como autoriza-los actos de disposición de créditos e de recoñecemento de obrigas, e propoñerlle ó conselleiro de Economía e Facenda a ordenación dos correspondentes pagamentos.

2. Coa mesma reserva legal correspóndelles ós presidentes ou directores dos organismos autónomos da CA a autorización e disposición de gastos e créditos, respectivamente, o recoñecemento de obrigas e o ordenamento dos pagamentos que lles correspondan a estes.

3. Regulamentariamente, o Consello da Xunta de Galicia poderá establece-las competencias e os trámites que debe realizar directamente a Consellería de Economía e Facenda, respecto da contabilidade e da tesourería para os organismos autónomos e entes que polas súas características se estime oportuno sen prexuízo da normativa que lles sexa aplicable.

4. As facultades ás que se fai referencia neste artigo poderán ser obxecto de delegación ou des- concentración nos termos que regulamentariamente se estableza.

Artigo 73º.-Fases do gasto.

A xestión económica e financeira dos dereitos e créditos incluídos nos orzamentos da CA e dos seus organismos autónomos estruturarase de acordo coas seguintes fases:

- a) Orzamento de gastos.

1. A autorización do gasto, que é o acto en virtude do cal a autoridade competente acorda a realización dun gasto, calculado en forma certa ou aproximada, reservando para tal fin a totalidade ou unha parte do crédito orzamentario legalmente destinado a garanti-lo cumprimento das obrigas que poidan ser consecuencia daquel, tida en conta a súa natureza económica.

2. A disposición, que é o acto en virtude do que se acorda, concerta ou determina, segundo os casos, despois de cumprí-los trámites que de acordo co dereito procedan, a contía concreta que debe alcanza-lo compromiso económico para a realización de todo tipo de prestacións.

Cos actos de disposición queda formalizada a reserva do crédito por un importe e unhas condicións exactamente determinados.

3. O recoñecemento da obriga, que é a operación de contraer en contas os créditos esixibles contra a CA de Galicia que deban acreditarse como contraprestación económica derivada dos acordos, dos concertos ou das normas resolutorias que determinen a disposición dun crédito, unha vez realizada e xustificada adecuadamente a correspondente prestación e efectuada a pertinente liquidación.

4. O ordenamento do pagamento, que é a operación en virtude da cal o ordenador competente, logo de proposta de pagamento realizada por quen recoñeceu a existencia da obriga, expide a orde de pagamento contra a Tesourería da CA a favor do respectivo acredor.

b) Orzamento de ingresos.

1. O compromiso de ingresos, que é o acto con base no que se recoñece en contas o dereito a liquidar un determinado recurso por unha contía certa se se cumpren aquelas condicións e trámites que se prevegan nas normas legais aplicables.

2. O contraído de recursos, que é o acto polo que se liquida este e se recoñece en contas o dereito definitivo á súa percepción pola súa exacta contía.

3. A recadación do recurso, que constitúe o proceso polo que a Tesourería da CA fai líquido e ingresa nas súas caixas o importe deste.

Artigo 74º.-Ordenación xeral dos pagamentos.

1. A ordenación xeral de pagamentos da CA correspóndelle ó conselleiro de Economía e Facenda, podendo delega-la dita competencia de acordo cos procedementos legais aplicables.

2. Co obxecto de facilita-lo servizo de ordenamento de pagamentos, poderanse establecer ordenamentos secundarios baixo a dependencia do conselleiro de Economía e Facenda ou da autoridade na que delegue as súas competencias sobre a materia.

3. Os servizos e as funcións dos ordenamentos de pagamentos dispoñeranse regulamentariamente por proposta do conselleiro de Economía e Facenda.

Artigo 75º.-Plan de disposición.

A expedición de ordes de pagamento con cargo ó orzamento da CA e dos seus organismos autónomos deberá axustarse ó plan que sobre disposición de fondos da Tesourería establece anualmente a Consellería de Economía e Facenda.

Artigo 76º.-Tramitación.

1. As ordes de pagamento expediranse unha vez que se xustificase documentalmente ante o órgano competente para recoñece-la respectiva obriga a realización da prestación ou o dereito do acredor, conforme os acordos polos que no seu día se autorizaron e comprometeron os correspondentes gastos.

2. Os ordenadores de pagamentos poderán recibí-las propostas e libra-las correspondentes ordes de pagamento mediante a utilización de procesos informáticos. Neste suposto a documentación xustificativa do gasto realizado poderá quedar naqueles centros nos que se recoñeceron as correspon-

dentes obrigas, para a súa posterior inclusión, se é o caso, na Conta Xeral da CA ou para a súa posta á disposición dos órganos de control competentes.

3. Nos casos establecidos no número anterior, ós ordenadores de pagamentos non lles serán esixibles responsabilidades que procedan de trámites anteriores á súa participación no proceso de xestión orzamentaria, considerándose nestes casos que a referencia que no art. 122º e seguintes desta lei se fai ás responsabilidades dos ordenadores de pagamento se entenderá referida ós órganos que recoñezan as obrigas ou propoñan o ordenamento do pagamento.

Artigo 77º.-Pagamentos para xustificar.

1. Terán o carácter de pagamentos para xustificar os fondos librados para atender gastos que non poidan ir acompañados da documentación xustificativa a que se fai referencia no artigo anterior.

2. Poderán expedirse ordes de pagamento para xustificar nos supostos seguintes:

a) Cando os documentos xustificativos non poidan achegarse antes de efectuada proposta de pagamento.

b) Cando se considere conveniente a utilización deste sistema para axilizar significativamente a xestión dos créditos.

c) Cando as ordes de pagamento teñan por obxecto satisfacer gastos en localidades onde non existan dependencias do organismo autónomo de que se trate.

3. A Consellería de Economía e Facenda, oídas as consellerías, logo de informe da Intervención Xeral, establecerá as normas xerais que regulen a expedición de ordes de pagamento para xustificar, así como os seus límites cuantitativos e os conceptos orzamentarios ós que son aplicables.

4. As ordes de pagamento cursadas co carácter de para xustificar aplicaranse ós créditos orzamentarios que correspondan e os seus perceptores quedarán obrigados a xustificar a aplicación das cantidades recibidas no prazo de tres meses, estando suxeitos ó réxime de responsabilidades previsto nesta lei. Nos casos excepcionais poderá concederse unha prórroga adicional por outro período igual para formalizar en todo ou en parte a citada xustificación.

5. No curso dos dous meses seguintes á data de recepción da documentación xustificativa a que se refiren os números anteriores, o órgano competente procederá á aprobación ou ó reparo da conta rendida.

6. Non terán a condición de pagamentos para xustificar as provisións de fondos de carácter permanente que se realicen a pagadorías, caixas e habilitacións para a atención de gastos periódicos ou repetitivos. Estes anticipos de caixa fixa terán a consideración de operacións extraorzamentarias e a súa contía global non poderá exceder do 10% do capítulo destinado a gastos correntes en bens e servizos do orzamento vixente en cada momento. Regulamentariamente, ordenarase o procedemento de concesión de anticipos de caixa fixa, a súa xustificación e imputación ó orzamento e demais aspectos relacionados con eles.

Artigo 78º.-Axudas e subvencións.

1. Para a concesión de axudas e subvencións con cargo ós orzamentos xerais da CA aplicaranse criterios de publicidade, concorrência e obxectividade.

Sen prexuízo de que a Xunta determine os criterios básicos, as consellerías correspondentes establecerán con carácter previo á disposición dos créditos as bases reguladoras aplicables á concesión.

O seu coñecemento público asegurárase na forma que se considere máis adecuada e deberán ser, en todo caso, publicadas no *Diario Oficial de Galicia*.

As citadas bases conterán como mínimo os seguintes extremos:

- a) Obxecto da subvención.
- b) Requisitos que deben reuni-los beneficiarios para a obtención da axuda ou das subvencións e forma de acreditarlos.
- c) Prazo e forma de xustificación por parte do beneficiario da aplicación definitiva dos fondos recibidos, incluso os librados, se é o caso, en concepto de anticipos.
- d) Forma e prazos de concesión da subvención, así como a posibilidade de conceder anticipos dela.

2. Non será aplicable o disposto no número anterior cando as axudas ou subvencións teñan asignación nominativa nos orzamentos xerais da CA ou a súa concesión e contía lle sexan esixibles en virtude de normas de rango legal.

3. A obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución da concesión.

En ningún caso o importe das subvencións ou axudas concedidas poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia coas concedidas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo da actividade subvencionada que debe desenvolver-lo beneficiario, nin supere o límite legalmente establecido para cada zona do territorio galego.

4. Os perceptores de subvencións ou axudas con cargo ós orzamentos xerais da CA estarán obrigados a xustifica-la aplicación dos fondos recibidos nos prazos e nas condicións establecidos na resolución da concesión.

5. Procederá o reintegro da axuda ou subvención percibido e maillos xuros de demora nos seguintes casos:

- a) Incumprimento da obriga de xustificación.
- b) Obtención da subvención sen reuni-los requisitos esixidos nas bases reguladoras para a súa concesión.
- c) Incumprimento da finalidade para a que a subvención foi concedida.

As cantidades que se vaian reintegrar terán a consideración de ingresos de dereito público, resultando da aplicación para a súa cobranza o previsto nos arts. 19º a 23º desta lei.

Malia o determinado nos puntos anteriores, por lei de orzamentos poderanse establecer condicións e criterios concretos en atención á escasa contía das axudas que se van conceder.

Artigo 79º.-Xustificantes.

Con independencia da súa contía e antes de que se proceda á tramitación da fase de proposta de pagamento realizadas por quen recoñeceu a existencia da obriga, os beneficiarios das subvencións terán que acreditar que se atopan ó corrente das súas obrigas tributarias e sociais e que non teñen pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da CA.

Artigo 80º.-Liquidación.

1. O orzamento de cada exercicio liquidarase en canto á recadación de dereitos liquidados e ó pagamento de obrigas recoñecidas ata o 31 de decembro do ano natural correspondente, e quedarán

a cargo da Tesourería da CA os dereitos pendentes de cobro e as obrigas pendentes de pagamento segundo as súas respectivas contraccións.

2. Non obstante, aplicaranse ó exercicio corrente os ingresos procedentes de dereitos liquidados que non sexan esixibles no momento do pechamento do exercicio orzamentario en virtude do aprazamento, dos fraccionamentos e das moratorias legalmente concedidas, así como os que se encontren dentro do prazo legal para realiza-lo ingreso en período voluntario. Neste suposto, deberase proceder a dar de baixa os indicados dereitos nas contas xustificativas da xestión de recursos imputables ó exercicio que se cerra, antes da súa inclusión nas contas do exercicio seguinte.

3. Os demais ingresos que se realicen unha vez cerrado o exercicio orzamentario respectivo quedarán desafectados do destino específico que, se é o caso, lles correspondese, sen prexuízo do seu recoñecemento e nova afectación con cargo ó orzamento do exercicio en curso, naquelas outras supostos que así se determinen.

Artigo 81º.-Remanentes de Tesourería.

1. O remanente de Tesourería da CA ou de cada un dos seus organismos autónomos administrativos con referencia a un exercicio orzamentario determinado estará formado pola suma das disponibilidades líquidas e maillos dereitos recoñecidos pendentes de cobro, menos as obrigas recoñecidas pendentes de pagamento, segundo a situación que os mesmos presenten ata o 31 de decembro do exercicio anterior.

2. Entenderase por remanente de Tesourería dispoñible aquel que non estea afectado ó financiamento específico de determinados gastos.

O remanente de Tesourería dispoñible poderá afectarse na súa totalidade ou en parte ó financiamento do orzamento inicial de gastos ou ó financiamento de modificacións orzamentarias, unha vez que sexa suficientemente comprobada a súa dispoñibilidade.

3. A diferenza que en cada momento exista entre o remanente dispoñible e o afectado ó financiamento do orzamento inicial ou de modificacións orzamentarias ó longo do exercicio constituirá o remanente líquido.

4. No caso de resultar un remanente de Tesourería negativo ó longo do exercicio, o organismo autónomo afectado instruirá o oportuno expediente de modificación orzamentaria ante a Consellería de Economía e Facenda, no que se propoñerá a baixa naqueles créditos que considere adecuados para o financiamento daquel.

No orzamento que non sexa de organismos autónomos, o Consello da Xunta, por proposta da Consellería de Economía e Facenda, dará de baixa créditos das distintas consellerías. De non ser posible, no orzamento seguinte compensaranse con menores gastos.

CAPÍTULO IV

Normas de especial aplicación para os organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financeiro ou análogo

Artigo 82º.-Orzamentos dos organismos autónomos.

1. Dos orzamentos dos organismos autónomos comerciais, industriais, financeiros ou análogos formarán parte os seguintes estados financeiros:

- a) Conta de operacións comerciais.
- b) Conta de explotación.
- c) Estado demostrativo da variación do fondo de manobra.
- d) Cadro de financiamento.

2. O resultado que se derive dos estados financeiros correspondentes ás alíneas a) e c) do número anterior terá o adecuado reflexo no orzamento de ingresos do organismo autónomo respectivo.

3. As operacións propias da actividade específica destes organismos, recollidas na conta de operacións comerciais, non estarán sometidas ó réxime de limitacións establecido no art. 56º desta lei para os créditos incluídos nos estados de gastos dos seus orzamentos.

4. A Consellería de Economía e Facenda establecerá as estruturas dos estados financeiros indicados adaptados ás súas distintas especialidades, así como os criterios xerais que se aplicarán para a imputación de gastos á conta de operacións comerciais, segundo o principio xeral de que, agás os gastos xerais de persoal, se lle poderán imputar a esta todos aqueles gastos que forman parte directa ou indirectamente do custo dos produtos vendidos, dos servizos prestados ou dos bens producidos.

5. O exercicio orzamentario coincidirá co ano natural, sen prexuízo dos axustes necesarios cando as operacións que realice o organismo autónomo estean vinculadas a un ciclo productivo distinto que non poderá ser superior a doce meses.

CAPÍTULO V

Normas de especial aplicación ás sociedades públicas

Artigo 83º.-Programas de sociedades públicas.

1. As sociedades a que se refire o nº 1 do art. 12º desta lei elaborarán anualmente un programa de actuación, investimentos e financiamento e a súa finalidade será a de mostra-la planificación xeral da súa actividade a un nivel de agregación adecuado que permita aprecia-los obxectivos que vai conseguirla sociedade a medio prazo e no ano económico correspondente ó exercicio orzado.

2. A estrutura dos programas de actuación, investimentos e financiamento determinaraa a Consellería de Economía e Facenda e terá, polo menos, o seguinte contido:

- a) Un estado no que se recollan os investimentos reais e financeiros que se prevexan dentro dun marco plurianual.
- b) Un estado no que, para o mesmo período, se conteñan as súas fontes de financiamento, con especificación das achegas de calquera clase que se prevexan recibir da CA ou dos seus organismos autónomos.
- c) Unha exposición dos obxectivos que se deben acadar no dito período plurianual e das características básicas da súa actividade económica.
- d) Unha memoria da avaliación económica dos investimentos programados durante o período.

3. Estas sociedades elaborarán ademais, anualmente, un orzamento de explotación, que detallará o contido da súa conta de explotación, e un orzamento de capital, no que se especificarán as orixes e a aplicación dos seus fondos.

4. Os orzamentos de capital mencionados no número anterior recollerán cun maior detalle as cifras contidas na primeira anualidade do programa de actuación, investimentos e financiamento, adaptando as ditas cifras ás posibilidades reais de financiamento que resulten do proceso de elaboración orzamentaria.

As estimacións contidas nos orzamentos de explotación e de capital das sociedades públicas remíranse, para o seu coñecemento e aprobación, ó Parlamento de Galicia formando parte dos orzamentos xerais da CA.

As sociedades públicas que se creen ó longo do exercicio adaptarán a súa actividade durante a parte do ano natural correspondente ó que prevexa o seu programa de actuación, investimentos e financiamento.

5. As variacións nos orzamentos a que se refire o nº 3 deste art. que non afecten a subvencións dos orzamentos xerais da CA e que supoñan incremento ou diminución dos gastos de persoal, investimentos reais ou financeiros e endebedamento neto sobre as inicialmente previstas serán autorizadas polo conselleiro de Economía e Facenda cando o seu importe non exceda do 10% de cada unha das clases de gastos antes indicados que se propoñan modificar, e pola Xunta de Galicia nos demais casos.

6. A estrutura básica dos orzamentos de explotación e capital estableceraa a Consellería de Economía e Facenda e desenvolveraa cada sociedade en función das súas necesidades seguindo as directrices do plan de contabilidade aplicable.

Artigo 84°.-Prazo e tramitación.

1. As sociedades públicas ás que se refire este capítulo elaborarán antes do 15 de maio de cada ano o programa de actuación, investimentos e financiamento que irá acompañado dunha memoria explicativa do contido do programa e das modificacións introducidas na programación plurianual en relación cos que se encontren en vigor.

No caso das sociedades a que se refire a letra a) do nº 1 do art. 12º desta lei, que se encontren en relación con outra ou noutras sociedades das que sexan socios en calquera dos supostos previstos no art. 42º Ccom, deberán presenta-lo programa de forma consolidada coas ditas sociedades.

No suposto das sociedades a que se refire a letra b) do nº 1 art. 12º desta lei, que sexan titulares da maioría das accións dunha ou varias sociedades, deberán presenta-lo programa consolidado coas ditas sociedades.

Non están obrigadas a presenta-lo programa de actuación, investimentos e financiamento aquelas sociedades das previstas na letra a) do nº 1 art. 12º desta lei que, de acordo coa LSA, poidan presentar balance abreviado, agás que reciban subvencións de explotación ou capital con cargo ós orzamentos xerais da CA.

2. Os programas a que se refire o nº 1 anterior someteranse á aprobación da Xunta de Galicia antes do 1 de xullo de cada ano, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, considerándose condicionadas as achegas, figuradas neles con cargo ós orzamentos xerais da CA, ás resultantes da tramitación e definitiva aprobación destes.

3. A Xunta daralle conta ó Parlamento de Galicia dos principios que informan os programas de actuación das sociedades públicas galegas.

Artigo 85°.-Remisión.

Os orzamentos de explotación e capital que se teñan que elaborar de acordo co disposto no nº 3 art. 83º desta lei seranlle remitidos polas correspondentes sociedades públicas á consellería da que dependan, que llos remitirá á de Economía e Facenda xunto co resto da documentación para a elaboración do anteproxecto de lei de orzamentos xerais a que fai referencia o art. 51º desta lei.

Estes orzamentos de explotación e capital irán acompañados:

- a) Dunha memoria xustificativa do seu contido con indicación de obxectivos.
- b) Da liquidación dos do exercicio anterior e un avance de liquidación dos do corrente.
- c) Do balance pechado do exercicio anterior, o avance do exercicio corrente e o provisional do exercicio ó que os ditos orzamentos correspondan.

Artigo 86°.-Supostos macroeconómicos.

1. Os convenios que a CA estableza coas sociedades públicas galegas ou participadas, ou con outras que, aínda non dependendo dela, sexan beneficiarias de avais ou reciban subvencións con cargo ós seus orzamentos xerais, incluírán, en calquera caso, as cláusulas correspondentes ás seguintes materias:

- a) Supostos macroeconómicos e sectoriais que sirvan de base ó contido do convenio.
- b) Obxectivos da política de persoal, rendibilidade, produtividade ou reestructuración técnica da explotación económica, así como os métodos de avaliación daquelas.
- c) Achegas ou avais da CA ou dos seus organismos autónomos.
- d) Procedementos para adapta-los obxectivos acordados ás variacións que se produzan no respectivo medio económico.
- e) Control pola CA da execución do convenio e da posterior explotación económica.

2. A subscrición do convenio non exclúe a elaboración e execución do programa e dos orzamentos de explotación e de capital a que se refire o art. 83° desta lei.

TÍTULO IV Da Tesourería

Artigo 87°.-Concepto.

1. Constitúen a Tesourería da CA de Calicia tódolos recursos financeiros, sexan diñeiro, valores, créditos e os demais produtos das operacións de endebedamento da CA e dos seus organismos autónomos que se xeren tanto por operacións orzamentarias coma extraorzamentarias.

2. As disponibilidades da Tesourería e as variacións que poidan sufrir están suxeitas ó réxime de intervención e deben ser rexistradas de conformidade coas normas de contabilidade pública. Poderán establecerse procedementos especiais de anotación en conta para aqueles movementos internos de efectivo entre as distintas contas operativas da Tesourería que determine o conselleiro de Economía e Facenda.

Artigo 88°.-Funcións.

Son funcións propias da Tesourería:

- a) A xestión recadatoria dos recursos e o pagamento das obrigas da CA e dos seus organismos autónomos.
- b) Instrumentar e servir ó principio de unidade de caixa, mediante a centralización de tódolos fondos e valores xerados por operacións orzamentarias e extraorzamentarias.
- c) Distribuír no tempo e no territorio as disponibilidades diñeirarias para a satisfacción puntual das obrigas da CA.

d) Velar pola obtención da axeitada rendibilidade dos recursos disponibles da CA sen menoscabo dos fins propios da Tesourería.

e) Responder dos avais contraídos pola CA conforme as disposicións desta lei.

f) As demais funcións que se deriven ou relacionen coas anteriores enumeradas.

Artigo 89º.-Situación dos fondos da Comunidade Autónoma.

1. Con carácter xeral a Tesourería da CA situará os fondos públicos no Banco de España ou nas entidades de crédito e aforro galegas ou que operen en Galicia, en contas das que, en todo caso, posuirá a titularidade.

2. A Tesourería da CA poderá instrumentar todas aquelas aperacións activas que considere convenientes para mante-la adecuada rendibilidade dos fondos ó seu cargo, guiada en todo caso polo principio de seguridade na súa colocación.

3. O réxime xeral de autorizacións para a situación e colocación de fondos, a natureza das contas, o control e a disposición dos fondos e dos servicios de colaboración que se vaian concertar coas entidades financeiras indicadas no parágrafo anterior establecerao a Consellería de Economía e Facenda.

Artigo 90º.-Situación dos fondos dos organismos autónomos.

1. Os fondos dos organismos autónomos situaranse en contas diferenciadas coa autorización expresa da Consellería de Economía e Facenda e baixo o control da Tesourería, utilizando rúbricas que conteñan a denominación xeral de Organismos autónomos da CA de Galicia, tendo a consideración, para tódolos efectos, de fondos da propia Tesourería.

2. Os ditos fondos poderán estar situados no Banco de España ou noutras entidades de crédito e aforro galegas ou que operen en Galicia, necesitando autorización expresa da Consellería de Economía e Facenda para a apertura de cada conta e para a determinación das súas condicións de funcionamento, logo de solicitude motivada, que poderá ordena-la súa cancelación ou suspende-la súa utilización se se comprobare que non subsisten as condicións que motivaron a autorización de apertura.

3. As entidades financeiras indicadas no punto, anterior teñen para coa Tesourería da CA, á súa solicitude, as mesmas obrigas de información que para coas consellerías e cos organismos autónomos titulares das contas abertas nelas.

4. A Consellería de Economía e Facenda poderá propoñerlle ó Consello da Xunta que as operacións de ingreso e de ordenación e realización material do pagamento dos organismos autónomos e dos entes públicos a que fai referencia a alínea b) do punto 1 do art. 12º desta lei se realicen pola Tesourería da Xunta, para o cal se establecerá o correspondente procedemento.

Artigo 91º.-Ingresos e medios de pagamento.

1. Os ingresos a favor da Tesourería poderán realizarse no Banco de España, nas caixas da propia Tesourería ou nas que se habiliten nos organismos autónomos e nas entidades colaboradoras daquela.

2. Os medios de pagamento admisibles polas caixas da Tesourería poderán consistir en diñeiro de curso legal, cheques nominativos, xiros, transferencias ou calquera outro medio de pagamento legalmente establecido. A Consellería de Economía e Facenda establecerá as condicións que terán que cumprir e o momento no que en cada caso se producirá a liberación da débeda.

3. A Tesourería poderá darlles cumprimento ás súas obrigas por calquera dos medios de pagamento a que se fai referencia no parágrafo anterior.

Artigo 92°.-Fluxos financeiros.

Para unha mellor xestión da Tesourería e unha adecuada análise do seu funcionamento, deberase elaborar trimestralmente un cadro de seguimento dos fluxos financeiros derivados da actividade da CA e dos seus organismos autónomos, no marco das previsións dun orzamento monetario.

TÍTULO V**Do control interno e da contabilidade****CAPÍTULO I****Do control interno****SECCIÓN PRIMEIRA****Aspectos xerais****Artigo 93°.-Control interno da actividade económico-financiera.**

1. O control interno da actividade económico-financiera da CA, dos seus organismos autónomos e entes públicos e das sociedades públicas exercerao a Intervención Xeral, sen prexuízo das competencias do Consello de Contas de Galicia e, se é o caso, do Tribunal de Contas.

2. A Intervención Xeral da CA exercerá as súas funcións de control interno con plena autonomía respecto dos órganos responsables da xestión controlada.

Artigo 94°.-O seu exercicio.

1. O exercicio do control interno realizarase a través da función interventora e do control financeiro.

2. A función interventora ten por obxecto controlar tódolos actos, documentos e expedientes da CA e dos seus organismos autónomos dos que puidesen derivarse dereitos e obrigas de contido económico, así como os ingresos e pagamentos que deles se deriven e, en xeral, a recadación, o investimento ou a aplicación dos fondos públicos, co fin de asegurar que a xestión dos órganos controlados se axuste ás disposicións aplicables a cada caso.

3. O control financeiro exercerao a Intervención Xeral de conformidade co previsto en cada caso e na forma que regulamentariamente se estableza respecto dos servicios da CA, dos organismos autónomos, dos entes públicos e das sociedades públicas para comproba-lo seu adecuado funcionamento tanto no aspecto organizativo coma no económico-financiero.

Así mesmo exercerase o control financeiro respecto das sociedades mercantís, empresas, entidades e particulares por razón das subvencións, créditos, avais e demais axudas da CA ou dos seus organismos autónomos, concedidos con cargo ós orzamentos xerais da CA. Neste caso o control financeiro terá por obxecto comprobar a adecuada e correcta obtención e utilización das indicadas subvencións e axudas e mailo cumprimento dos obxectivos que con elas se pretenden alcanzar.

4. Malia o disposto na alínea 3 deste art., por acordo da Xunta de Galicia, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, poderá establecerse o control interno realizado a través da función interventora en organismos autónomos, sociedades e entes públicos.

SECCIÓN SEGUNDA

Da función interventora

Artigo 95º.-Fases.

1. A función interventora exercerase a través das seguintes fases:

a) A fiscalización ou intervención previa de todo acto, documento ou expediente susceptible de producir dereitos e obrigas de contido económico ou movemento de fondos e valores.

b) A intervención formal do ordenamento do pagamento.

c) A intervención material do pagamento.

d) A intervención da aplicación das cantidades destinadas a obras, subministracións, adquisicións e servizos, que comprenderá o exame documental e, se é o caso, a comprobación material.

2. Son inherentes á función interventora as seguintes competencias:

a) Interpoñer recursos e reclamacións nos supostos recollidos nas disposicións vixentes.

b) Solicitar dos órganos competentes o asesoramento xurídico ou os informes técnicos que se precisen en función da natureza do acto, documento ou expediente intervido, así como os antecedentes e documentos necesarios para o exercicio da dita función.

Artigo 96º.-Principios.

1. A función interventora exercerase conforme os principios de autonomía funcional, exercicio desconcentrado, xerarquía interna e actuación contradictoria.

2. O exercicio da función interventora organizarase de forma desconcentrada a través das intervencións delegadas situadas ou próximas ós órganos sometidos a control. O interventor xeral da CA poderá avoga-lo exercicio da función respecto de calquera acto ou expediente que estime oportuno.

Regulamentariamente establecerase a competencia dos interventores delegados do interventor xeral da CA.

Artigo 97º.-Intervención limitada.

1. Non estarán sometidos a intervención previa os gastos en material non inventariable, subministracións menores, así como os de carácter periódico e demais de tracto sucesivo, unha vez intervido o gasto correspondente ó período inicial do acto ou contrato do que se deriven ou as súas modificacións, así como aqueloutros gastos que de acordo coa normativa vixente se fagan efectivos a través do sistema de anticipos de caixa fixa. Así mesmo, tampouco estarán suxeitas a intervención previa as subvencións que figuren nos orzamentos con asignación nominativa.

2. A Xunta de Galicia poderá acordar, logo de informe da Intervención Xeral da CA, que a intervención previa en cada unha das consellerías ou nos seus distintos servizos, organismos autónomos ou sociedades e entes públicos se limite a comproba-los extremos seguintes:

a) A existencia de crédito orzamentario e que este é o adecuado á natureza do gasto ou da obriga que se propón contraer.

Nos casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual compróbarase, ademais, se se cumpre o preceptuado no art. 53º desta lei.

b) Que as obrigas ou gastos as xeran órganos competentes.

c) Aqueloutros extremos que, pola súa transcendencia no proceso de xestión, determine o

Consello da Xunta, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, logo de informe da Intervención Xeral da CA.

Os interventores delegados poderán formula-las observacións complementarias que consideren convenientes, sen que estas teñan, en ningún caso, efectos suspensivos na tramitación dos expedientes correspondentes.

3. O disposto no nº anterior non será de aplicación respecto das obrigas ou dos gastos de contía indeterminada e daqueles outros que deban ser aprobados polo Consello da Xunta.

4. As obrigas ou os gastos sometidos á fiscalización limitada a que se refire o nº 2 deste art. serán obxecto doutra plena con posterioridade exercida sobre unha mostra representativa dos actos, documentos ou expedientes que deron orixe á referida fiscalización, mediante a aplicación de técnicas de mostraxe ou auditoría, co fin de verificar que se axustan ás disposicións aplicables en cada caso e determina-lo grao de cumprimento da legalidade na xestión dos créditos.

Os interventores delegados que realicen as fiscalizacións con posterioridade deberán emitir informe escrito no que fagan constar cantas observacións e conclusións se deduzan delas. Estes informes remitiránse ó titular da consellería para que formule, se é o caso, e no prazo de quince días, as alegacións que considere oportunas, e posteriormente elevaránse á Intervención Xeral da CA.

A Intervención Xeral da CA daralles conta ó Consello da Xunta e ós centros directivos que resulten afectados dos resultados máis importantes da fiscalización realizada con posterioridade, e, se é o caso, propoñerá as actuacións que resulten aconsellables para asegurar que a administración dos recursos públicos se axuste ás disposicións aplicables en cada caso.

5. Con independencia do disposto no número anterior, o conselleiro de Economía e Facenda, por proposta do interventor xeral da CA, poderá acordar en que casos a función interventora será exercida sobre unha mostra e non sobre o total de actos, documentos ou expedientes suxeitos á intervención previa.

A Intervención Xeral determinará nestes casos os procedementos que se deban aplicar para a selección, a identificación e o tratamento da mostra de procedemento.

6. A fiscalización previa dos dereitos será substituída pola inherente á toma de razón en contabilidade, e estableceranse as actuacións comprobatorias posteriores que determine a Intervención Xeral da CA.

Artigo 98º.-Documentación e prazo.

1. A Intervención exercerá a función interventora á vista do expediente orixinal completo unha vez reunidos tódolos xustificantes e emitidos os informes preceptivos e que estea, polo tanto, en disposición de que se dicte acordo por quen corresponda.

2. O expediente será fiscalizado no prazo de dez días contado a partir do seguinte ó da data de recepción, que se reducirá a cinco días computados de igual forma cando se declarase urxente a tramitación do expediente ou se aplicase o réxime especial de fiscalización previsto no nº 2 do art. 97º.

3. Cando a Intervención faga uso da facultad e a que se refire a alínea b) do nº 2 art. 95º, suspenderase o prazo mencionado no nº 2 anterior, debendo darlle conta da dita circunstancia ó órgano xestor propoñente do gasto.

Artigo 99º.-Reparos e reclamacións.

1. Se a Intervención se manifestase en desacordo co fondo ou coa forma dos actos, expedientes ou documentos examinados, deberá formula-los seus reparos por escrito. Os ditos reparos deberán ser

motivados con razoamentos fundados en normas que apoien o criterio sustentado e deberán conter tódalas obxeccións realizadas ó expediente.

2. Cando a desconformidade se refira ó recoñecemento ou á liquidación de dereitos a favor da Facenda da CA, as observacións formularanse en notas de reparos e, en caso de subsistir a discrepancia, mediante a interposición dos recursos ou das reclamacións que procedan.

Artigo 100º.-Suspensión do expediente.

1. Se os reparos afectan a autorización e disposición de gastos, o recoñecemento de obrigas ou o ordenamento de pagamentos, orixinarase a suspensión da tramitación do expediente, ata que aqueles non sexan emendados nos seguintes casos:

a) Cando se baseen na insuficiencia ou inadecuación do crédito ó que se lle propoña imputa-lo gasto, a obriga ou o pagamento.

b) Cando se aprecien graves irregularidades na documentación xustificativa das ordes de pagamento ou non se acredite suficientemente o dereito do perceptor.

c) Cando o gasto se lle propoña a un órgano que careza de competencia para a súa aprobación.

d) Cando se omitan, no expediente requisitos ou trámites que se consideren esenciais a xuízo da Intervención ou cando esta estime que a continuación do procedemento lles puidese causar crebas económicas á CA ou a un terceiro.

e) Cando o reparo sexa consecuencia de comprobacións de materiais de obras, subministracións, adquisicións e servicios.

2. A Intervención poderá fiscalizar favorablemente, malia os defectos que se observen no expediente, sempre que os requisitos ou os trámites incumpridos non sexan esenciais.

Nestes supostos a eficacia da fiscalización quedará condicionada á reparación daqueles defectos con anterioridade á aprobación do expediente. O órgano xestor remitiralle á Intervención a documentación xustificativa de que lle repararon os ditos defectos.

De non reparalo órgano xestor os defectos indicados, para a continuación do expediente considerase formulado o correspondente reparo.

O previsto neste número non será aplicable naqueles supostos nos que a fiscalización previa se realice de forma limitada, de conformidade co disposto no nº 2 art. 97º da presente lei.

Artigo 101º.-Discrepancia.

1. Cando o órgano ó que se dirixa o reparo o acepte, deberá repara-las deficiencias observadas e remitirille de novo as actuacións á Intervención.

2. Cando o órgano xestor non acepte o reparo deducido, formulará discrepancia, que deberá ser motivada con citas dos preceptos legais nos que sustente o seu criterio.

A discrepancia resolverase da seguinte forma:

a) Se o reparo fose formulado por unha intervención delegada, corresponderalle á Intervención Xeral da CA coñecer da discrepancia, e a súa resolución será obrigada para aquela.

b) Se o reparo fose formulado, pola Intervención Xeral da CA ou esta confirmase en todo ou en parte o dunha intervención delegada e subsista a discrepancia, corresponderalle á Xunta de Galicia adoptar unha resolución definitiva.

Artigo 102º.-Omisións.

1. Nos supostos nos que, de acordo co disposto neste capítulo, a fiscalización previa da aprobación do gasto ou do recoñecemento da obriga fosen preceptivas e se omitisen, non se poderá recoñecer-la obriga, nin tramita-lo pagamento nin intervir favorablemente estas actuacións ata que se coñeza ou resolva a dita omisión nos termos previstos neste artigo.

2. Se o interventor xeral da CA ou os seus delegados ó coñecer un expediente observasen algunha das omisións indicadas no número anterior manifestaranllo á autoridade que iniciase aquel e emitirán ó mesmo tempo a súa opinión respecto da proposta, co fin de que, unido este informe ás actuacións, poida o titular da consellería de que aquela proceda somete-lo actuado á decisión da Xunta de Galicia para que adopte a resolución a que houbese lugar.

Este informe, que non terá natureza de fiscalización, poñerá de manifesto, como mínimo os seguintes extremos:

-As infraccións do ordenamento xurídico que, a xuízo do interventor, se producisen no momento no que se adoptou o acto de aprobación do gasto sen fiscalización ou intervención previa.

-As prestacións que se realizasen como consecuencia do dicto acto.

-A posibilidade e conveniencia de revisión dos actos dictados con infracción do ordenamento.

Os interventores delegados daranlle conta do seu informe á Intervención Xeral da CA no momento da súa emisión.

3. Se o titular da consellería acordase somete-lo expediente á decisión da Xunta de Galicia, comunicarllo ó conselleiro de Economía e Facenda, por conducto da Intervención Xeral da CA, con dez días de antelación á reunión do Consello no que se coñeza o asunto.

Ó expediente unirase unha memoria que inclúa unha explicación da omisión da preceptiva fiscalización ou intervención previa e, se é o caso, as observacións que estime convenientes respecto do informe da Intervención.

A Secretaría do Consello comunicáralle á Consellería correspondente, á de Economía e Facenda e á Intervención Xeral da CA o acordo adoptado sobre o expediente para a súa toma de razón e cumprimento nos seus propios termos.

SECCIÓN TERCEIRA**Do control financeiro****Artigo 103º.-Finalidade e principios.**

1. O control financeiro ó que se refire o art. 94º desta lei ten por finalidade procurar que a xestión económico-financieira do sector público galego se adecúe ós principios de legalidade, economía, eficacia e eficiencia.

2. O control financeiro exercerase con plena autonomía e independencia respecto das autoridades e entidades das que se controle a súa xestión, e poderá realizarse en réxime ordinario ou en réxime permanente.

3. O control financeiro exercerase mediante a realización de auditorías ou outros tipos de control de conformidade co que se estableza regulamentariamente.

Artigo 104º.-Auditorías e clases.

1. As auditorías a que se refire o art. anterior consistirán na comprobación posterior da actividade económico-financieira do ente controlado, realizada de forma sistemática e mediante a aplicación de determinados procedementos de revisión a operacións ou actos, singulares seleccionados para o efecto.

2. As ditas auditorías, en función dos obxectivos e do alcance que para cada control se establezan, poderán ser das seguintes clases:

a) Auditoría financeira, que terá por obxecto a emisión dun dictame sobre se a información contable do órgano controlado se presenta de acordo cos principios, cos criterios e coas normas contables que sexan aplicables.

b) Auditoría de cumprimento, que ten por obxecto determinar se na xestión das operacións que dean lugar a dereitos e obrigas de contido económico, na xestión dos ingresos e pagamentos e mais na recadación, custodia, investimento ou aplicación en xeral dos recursos se cumpriu coa legalidade e coas normas e directrices, internas ou externas, que resulten aplicables.

c) Auditoría operativa, o obxecto da cal é a avaliación da eficacia e a eficiencia alcanzadas na xestión dos recursos públicos adscritos a unha entidade para o cumprimento dos seus obxectivos. Este sistema de auditoría será o utilizado para a avaliación do grao de cumprimento dos obxectivos físicos e financeiros previstos nos programas de gasto.

d) Auditorías de sistemas e procedementos, a finalidade das cales é recomendar e proponer mellores e modificacións parciais ou xerais, nos procedementos de xestión económico-financieira, sobre a base das posibles debilidades ou disfuncionalidades detectadas na súa revisión.

Artigo 105º.-Iniciación e desenvolvemento.

1. O control financeiro ordinario iniciárase por acordo do interventor xeral da CA, quen delimitará a clase e o alcance do control que se vai efectuar, e desenvolverase directamente por medio de funcionarios ou equipos de control destacados temporalmente para o efecto e dirixido por interventores dependentes do interventor xeral.

2. O control financeiro permanente realizarase de acordo coas seguintes características:

a) Exercerá a Intervención Xeral da CA a través das intervencións delegadas nos servizos, organismos, sociedades e entes públicos nos que se encontre establecido este réxime de control, sen prexuízo das actuacións de control ordinario que, con carácter excepcional e alcance limitado, poida realizar directamente o citado centro directivo.

b) As actuacións e os traballos necesarios para o seu desenvolvemento efectuaranse de forma permanente e continuada ó longo dos diferentes exercicios, e non se requirirá acordo expreso da Intervención Xeral da CA para a súa iniciación.

c) As ditas actuacións realizaranse, como regra xeral, sobre a base do principio de proximidade temporal respecto da actividade ou dos actos obxecto de control.

d) A Intervención Delegada encargada do control financeiro permanente deberá recibir información permanente, actualizada e detallada da actividade obxecto de control, dos seus obxectivos e do avance no seu cumprimento, na forma e coa periodicidade que a dita oficina determina, co fin de ter un coñecemento completo dela.

Artigo 106º.-Ámbito de aplicación.

1. O control financeiro permanente será aplicable nos seguintes entes do sector público de Galicia, sempre que, de conformidade co disposto no nº 4 do art. 94º desta lei, non estea establecida a función interventora:

- a) Os organismos autónomos da CA de carácter industrial, comercial, financeiro ou análogo.
- b) O ente público Radiotelevisión de Galicia.
- c) As consellerías, servicios, organismos autónomos de carácter administrativo, sociedades e entes públicos, calquera que sexa a súa denominación e forma xurídica, en que así se determina, de conformidade co previsto no punto seguinte.

2. A aplicación do réxime de control financeiro permanente ás consellerías, servicios, organismos, sociedades e entes nos que actualmente non se encuentre establecido efectuarase:

a) Mediante orde do conselleiro de Economía e Facenda por proposta da Intervención Xeral da CA, nos supostos de consellerías, servicios ou organismos autónomos nos que xa exista Intervención Delegada.

b) Mediante acordo da Xunta por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, nos supostos de servicios, sociedades ou entes públicos nos que non exista Intervención Delegada da Intervención Xeral da CA.

3. A relación de dependencia e as condicións de funcionamento dos interventores delegados no exercicio do control financeiro permanente serán as mesmas cás vixentes para a función interventora.

4. Para a aplicación do disposto neste art. as intervencións delegadas encargadas do control financeiro permanente poderán requirir información referida a:

- a) Dereitos e obrigas, compras e vendas.
- b) Investimentos e outros contratos.
- c) Cobros e pagamentos.
- d) Composición e detalle de saldos en contabilidade.
- e) Operacións que se vaian realizar ou en curso de especial significación ou importancia.
- f) Existencias de fondos, de materiais e de bens de calquera natureza.
- g) Calquera outro aspecto financeiro ou organizativo que se considere de interese en atención ás características do ente controlado.

As intervencións delegadas deberán recibir un exemplar das contas e doutros estados anuais, así como dos que se elaboren con outra periodicidade, e terán acceso directo ós sistemas de información dos que se deriven as ditas contas e estados.

5. Se no exercicio do control financeiro permanente se puxesen de manifesto graves irregularidades, daráselle conta á Intervención Xeral, propondo, se é o caso a substitución dese procedemento de control polo exercicio da función interventora.

6. Os interventores delegados deberán elaborar para cada ente un plan anual de actuación, que se someterá á aprobación da Intervención Xeral da CA.

O dito plan conterá o detalle das actuacións que se van realizar e o seu calendario de execución, así como a periodicidade dos informes e das datas previstas de emisión.

Os plans de actuación incluirán, en todo caso, a realización de:

- a) Auditoría permanente de cumprimento.
- b) Revisións de rexistros e procedementos contables e das existencias e dos movementos de fondos.

c) Auditoría financeira das constas anuais.

d) Auditoría de programas sobre o nivel de realización de obxectivos e análises das causas das desviacións.

Os citados plans incluirán ademais, se procede, a realización doutras auditorías operativas, de sistemas e procedementos ou outros tipos de control dos previstos no art. 104º desta lei, nos casos e co alcance nos que así se determine.

Artigo 107º.-Plan anual de auditorías.

1. O control financeiro ordinario enmarcará a súa actuación nun plan anual de auditorías que se debe realizar en cada exercicio, a elaboración do cal lle corresponde á Intervención Xeral da CA.

2. O plan comprenderá as entidades sobre as que se realizarán controis financeiros de carácter ordinario no exercicio económico a que se refira, con indicación, en cada caso, do tipo de control que se debe realizar e do seu alcance.

3. O plan terá carácter aberto e poderá ser modificado para a realización de controis específicos, en atención ós medios dispoñibles e por outras razóns debidamente ponderadas.

4. Para o desenvolvemento do control financeiro ordinario, a Intervención Xeral da CA poderá solicita-la colaboración de empresas privadas de auditorías, que deberán axustarse ás normas e instrucións que determine o dito centro directivo.

Para solicita-la dita colaboración será necesaria unha orde do conselleiro de Economía e Facenda, na que se especificará a insuficiencia dos servicios da Intervención Xeral da CA que xustifique a dita colaboración.

Artigo 108º.-Resultado e informes.

1. Do resultado das actuacións de control financeiro ordinario ou permanente emitirase informe coa estrutura, co procedemento e co contido que regulamentariamente se determine.

2. Os informes derivados das actuacións de control financeiro ordinario elevaránselle á Intervención Xeral da CA para a súa remisión ó conselleiro de Economía e Facenda e ós órganos responsables e de tutela dos servicios ou organismos controlados.

3. Os informes que teñan a súa orixe en actuacións de control financeiro permanente remitirán-selle ó titular da xestión e ademais á Intervención Xeral da CA cando estes teñan un carácter xeral ou fosen realizados por algunha circunstancia especial.

CAPÍTULO II
Da contabilidade

Artigo 109º.-Réxime.

1. A administración da CA, dos seus organismos autónomos e das sociedades públicas de Galicia queda sometida ó réxime de contabilidade pública nos termos previstos nesta lei.

2. A suxeición ó réxime de contabilidade pública comporta a obriga de renderlles contas das respectivas operacións e transaccións económicas, calquera que sexa a súa natureza, ó Tribunal de Contas e ó Consello de Contas de Galicia.

3. O disposto no par. anterior élle aplicable ó emprego dos fondos para xustificar e ó das trans-

ferencias correntes e de capital con cargo ós orzamentos xerais da CA, calquera que sexa o seu receptor.

4. As obrigas que se determinen no presente art. entenderanse sen prexuízo das facultades que a CE lle confire ó Tribunal de Contas.

Artigo 110º. Competencias da Consellería de Economía e Facenda.

É competencia da Consellería de Economía e Facenda a organización da contabilidade pública ó servizo dos seguintes fins:

- a) Rexistra-la execución dos orzamentos xerais da CA nas súas distintas fases
- b) Coñece-lo movemento e a situación da Tesourería.
- c) Reflecti-las variacións, a composición e situación do patrimonio da CA e do inventario de bens afectados ós fins dos organismos autónomos e das sociedades públicas.
- d) Proporcionárlle-los datos necesarios para a formación e o rendemento da conta Xeral da CA, así como das demais contas, estados e documentos que deban elaborarse ou remitirse ó Consello de Contas de Galicia e ó Tribunal de Contas.
- e) Facilita-los datos e outros antecedentes necesarios para a confección das contas económicas do sector público estatal.
- f) Rende-la información económica e financeira que sexa necesaria, para a toma de decisións tanto na orde política coma na de xestión.

Artigo 111º.-Funcións da Intervención Xeral como centro directivo.

A Intervención Xeral da CA é o centro directivo da contabilidade pública de Galicia e correspóndelle as seguintes funcións:

- a) Someter á decisión do conselleiro de Economía e Facenda o Plan de contabilidade pública de Galicia, ó que se adaptarán os organismos, as corporacións e as demais entidades comprendidas no sector público de Galicia, mantendo a debida coordinación co Plan xeral de contabilidade pública.
- b) Promove-lo exercicio da potestade regulamentaria no tocante á determinación da estrutura, xustificación, tramitación e rendemento de contas, informes e demais documentos relativos á contabilidade pública, podendo dictar para o efecto circulares e instrucións polos procedementos que se determinen nas leis e nos regulamentos.
- c) Aproba-los planos parciais ou especiais de contabilidade pública que se elaboren conforme o Plan de contabilidade pública de Galicia, ou o Plan xeral de contabilidade do sector privado, respecto das sociedades públicas.
- d) Inspecciona-la contabilidade de toda clase de organismos públicos da CA.

Artigo 112º.-Funcións como centro xestor.

1. Como centro xestor da contabilidade pública, correspóndelle á Intervención Xeral:
 - a) Forma-la Conta Xeral da CA e elabora-la memoria que a acompaña.
 - b) Preparar e examina-las contas que se lles deban render ó Consello de Contas de Galicia e ó Tribunal de Contas, e formula-las observacións que, se é o caso, se estimen necesarias.
 - c) Solicita-la presentación de contas, estados e outros documentos suxeitos a exame crítico.
 - d) Centraliza-la información deducida da contabilidade das corporacións, organismos, entidades

e demais axentes que integran o sector público de Galicia.

e) Elabora-las contas económicas do sector público de Galicia, de acordo co sistema de contas en vigor para todo o Estado.

f) Vixiar e impulsa-las actividades das oficinas de contabilidade de tódolos organismos e servizos da CA.

2. Tódolos informes e dictames económico-contables que deban emiti-las entidades sometidas ó réxime de contabilidade pública deberán ser solicitados a través da Intervención Xeral da CA.

3. Para os efectos previstos neste art., o rendemento de toda clase de contas polos procedementos ordinarios deberase realizar a través da Intervención Xeral.

Artigo 113º.-Soporte documental.

A contabilidade pública levarase en libros, rexistros e contas, segundo os procedementos técnicos establecidos que sexan máis convenientes pola índole das operacións e das situacións que neles deban anotarse, sen prexuízo de que as sociedades públicas se axusten ás disposicións do Ccom, ás que se dicten no seu desenvolvemento, e ó Plan xeral de contabilidade vixente para as empresas españolas.

Artigo 114º.-Contadantes.

Serán contadantes das contas que teñan que renderse ó Consello de Contas de Galicia e, se é o caso, ó Tribunal de Contas:

a) Os funcionarios que teñan ó seu cargo a xestión dos ingresos e a realización dos gastos, así como as demais operacións da Administración da CA.

b) Os presidentes ou directores dos organismos autónomos, sociedades públicas e demais entes que conforman o sector público de Galicia.

c) Os particulares que excepcionalmente, administren, recaden ou custodien fondos ou valores da CA, sen prexuízo de que sexan intervidas as respectivas operacións.

d) Os perceptores das transferencias a que se refiren os arts. 78º e 109º.3 desta lei.

Artigo 115º.-Forma e prazos.

As contas e a documentación que se lles deban render ó Consello de Contas de Galicia e ó Tribunal de Contas formaranse e cerraranse por períodos trimestrais, excepto as correspondentes ós organismos autónomos, sociedades públicas e demais entes que conforman o sector público de Galicia, que o serán anualmente.

Artigo 116º.-Sociedades públicas, entes e organismos.

A contabilidade pública das sociedades públicas, entes e organismos queda sometida á verificación ordinaria e extraordinaria a cargo dos funcionarios dependentes do interventor xeral da CA e dos que, se é o caso, designe o Tribunal de Contas ou o Consello de Contas.

Artigo 117º.-Publicidade e información.

1. A Consellería de Economía e Facenda publicará no *Diario Oficial de Galicia* os seguintes datos trimestrais:

a) Do movemento do tesouro por operacións orzamentarias e extraorzamentarias, e da súa situación.

- b) Das operacións de execución do orzamento da CA e das súas modificacións.
- c) Das demais que se consideren de interese.
- 2. Os organismos autónomos, as entidades públicas e as sociedades mercantís con participación maioritaria da Xunta remitiranlle trimestralmente á Consellería de Economía e Facenda un estado da súa situación financeira, de acordo coa estrutura que esta determine.
- 3. Trimestralmente, o conselleiro de Economía e Facenda daralle conta á Comisión 3ª, de Economía, Facenda e Orzamentos, do estado de execución orzamentaria.

CAPÍTULO III

Da conta xeral da Comunidade

Artigo 118º.-Documentación.

1. A Conta Xetal da CA de Galicia comprenderá tódalas operacións orzamentarias, patrimoniais e de Tesourería levadas a cabo durante o exercicio e constará dos seguintes documentos:

- a) Conta da Administración da CA.
- b) Conta dos organismos autónomos de carácter administrativo.
- c) Conta dos organismos autónomos de carácter industrial, comercial, financeiro ou análogo.
- d) Conta das sociedades públicas e demais entes públicos.
- e) Conta do patrimonio da CA e dos seus organismos autónomos.

2. Achegaráselle á Conta Xeral un estado no que se reflecta o movemento e a situación dos avais concedidos pola CA e polas súas sociedades públicas.

Artigo 119º.-Formación.

A Conta da Administración da CA formarase con base nos estados e documentos que determine a Consellería de Economía e Facenda e, en particular, polos seguintes:

- 1. A liquidación do orzamento, especificando os créditos iniciais e as súas modificacións, así como a liquidación dos estados de ingresos e gastos nas súas distintas fases de xestión orzamentaria.
- 2. Un estado demostrativo dos compromisos de gastos adquiridos con cargo a exercicios futuros, facendo uso do disposto no art. 58º desta lei.
- 3. Un estado demostrativo da evolución e situación dos valores que se deben cobrar e das obrigas que se deben pagar procedentes de exercicios anteriores.
- 4. A Conta Xeral de Tesourería que poña de manifesto a súa situación e as operacións realizadas durante o exercicio.
- 5. A Conta Xeral do endebedamento público.
- 6. O resultado do exercicio económico, que recollerá a determinación do superávit, o déficit ou nivelación da liquidación do orzamento, o remanente de Tesourería resultante e a variación dos activos e pasivos financeiros.

Artigo 120º.-Organismos autónomos.

1. Coas contas rendidas polos organismos autónomos e demais documentos que se lle deban render ó Consello de Contas de Galicia e ó Tribunal de Contas, a Intervención Xeral da CA elaborará estados anuais agregados que permitan ofrecer unha visión global da xestión realizada no exercicio pola totalidade daqueles.

2. Á Conta Xeral da CA unirase unha memoria na que se demostre o grao de cumprimento dos obxectivos previstos para cada un dos programas de gasto.

3. A Consellería de Economía e Facenda establecerá a estrutura e o contido das contas e estados a que fai referencia o número 1 anterior, así como das contas que deban rendelos demais entes do sector público de Galicia.

Artigo 121º.-Revisión e aprobación.

1. A Conta Xeral da CA de cada ano formarase antes do 31 de agosto do ano seguinte ó que se refire e remitirase logo de acordo da Xunta ó Consello de Contas de Galicia e ó Tribunal de Contas dentro dos dous meses seguintes á súa formación.

2. A Conta Xeral da CA deberá ser aprobada polo Parlamento de Galicia para efectos de dar cumprimento ó disposto na alínea b) do art. 10 EA.

TÍTULO VI
Das responsabilidades

Artigo 122º.-Suxeitos responsables.

1. As autoridades, os funcionarios e os empregados da CA en calquera dos seus servizos, organismos autónomos, entes públicos ou sociedades públicas que, por dolo, culpa ou negligencia adopten resolucións, executen accións ou incorran en omisións con infracción das disposicións desta lei, estarán obrigados a indemnizar á Facenda da CA polos danos e perdas que sexan consecuencia daqueles, con independencia da responsabilidade penal ou disciplinaria que lles poida corresponder.

2. Estarán suxeitos á obriga de indemnizar á Facenda da CA, ademais das autoridades, dos funcionarios e dos empregados ós que se fai referencia no número 1 anterior, os interventores, tesoureiros e ordenadores de pagamentos que, con dolo, culpa, negligencia ou ignorancia inescusable, non salvasen a súa actuación no correspondente expediente mediante observación escrita acerca da improcedencia ou ilegalidade do acto ou resolución.

Iso deixando a salvo o disposto no art. 76.3, da presente lei.

3. A responsabilidade de quen participe na resolución ou no acto será mancomunada, excepto cando concorra dolo, no que será solidaria.

Artigo 123º.-Tipificación das infraccións.

Constítuen infraccións que dan orixe á obriga de indemnizar segundo determina o artigo anterior:

- a) Incorrer no alcance ou malversación na administración de fondos da CA.
- b) Administra-los recursos e demais dereitos da Facenda da CA incumprindo as normas reguladoras da súa xestión, liquidación, inspección, recadación ou ingreso nas caixas da Tesourería.
- c) Comprometer gastos e ordenar agamentos sen crédito suficiente ou infrinxindo doutro modo as disposicións legais aplicables á execución e xestión dos orzamentos e das operacións de Tesourería.
- d) Dar lugar a pagamentos indebidos ó liquida-las obrigas ou ó expedir documentos en virtude das funcións que se teñan encomendadas.
- e) Non render contas regulamentarias esixidas ou presentadas con graves defectos.
- f) Non xustifica-la aplicación dos fondos a que se refire o art. 77º desta lei.

g) Calquera outro acto ou resolución dictada con infracción do disposto nesta lei ou da normativa aplicable á xestión e administración do patrimonio.

Artigo 124º.-Instrucción e resolución.

1. Sen prexuízo das competencias e do coñecemento dos feitos por parte do Consello de Contas de Galicia e do Tribunal de Contas, a responsabilidade polos actos, omisións e resolucións tipificados no artigo anterior será determinada e esixida mediante expediente administrativo instruído ó interesado.

2. O acordo de incoación, o nomeamento de xuíz instructor e a resolución do expediente corresponderánlle á Xunta cando se trate de persoas que, de conformidade co ordenamento vixente, teñan a condición de autoridade e ó conselleiro de Economía e Facenda nos demais casos.

3. Na tramitación do expediente daráselles audiencia ós interesados e a súa resolución conterà o pronunciamiento sobre os danos e perdas causados ós bens e dereitos da Facenda da CA, imponéndolles ós responsables a obriga de indemnizar na contía e no prazo que se determine.

Artigo 125º.-Execución.

1. Os danos e perdas declarados na resolución do expediente a que se retire o art. anterior terán a consideración de dereitos da Facenda da CA, gozarán do réxime previsto no art. 19º desta lei e poderá procederse ó seu cobro, se é o caso, pola vía de constrinximento.

2. A Facenda da CA terá dereito a esixi-lo xuro previsto no art. 21º desta lei sobre o importe dos alcances, malversacións, danos e perdas ós seus bens e dereitos, desde o día no que estes se causasen.

3. Cando, a consecuencia da insolvencia dos obrigados que deben indemnizar, haxa que proceder contra os responsables subsidiarios declarados como tales no expediente, os intereses a que fai referencia o punto anterior seranlles esixidos desde a data na que fosen requiridos para realiza-lo pagamento.

Artigo 126º.-Dilixencias previas.

Tan pronto como se teña noticia dun alcance, malversación, dano ou prexuízo á Facenda da CA, ou transcorresen os prazos sinalados no art. 77º desta lei sen que se xustificasen as ordes de pagamento ás que o este se refire, os superiores xerárquicos dos presuntos responsables e os ordenadores de pagamentos, respectivamente, instruirán as dilixencias previas oportunas e adoptarán, con igual carácter, as medidas necesarias para asegura-los dereitos da Facenda da CA, dándolles conta inmediata ó Consello de Contas de Galicia, ó conselleiro de Economía e Facenda e, se é o caso, ó Tribunal de Contas, para que procedan de acordo coas súas competencias e conforme os procedementos establecidos.

Disposicións adicionais

Primeira.-Definición de empresa pública.

Para os efectos desta lei, a definición que na normativa autonómica se fai de empresa pública entenderase referida, no sucesivo, ás sociedades públicas establecidas nesta.

Segunda.-Rendición de contas ó Parlamento.

A Consellería de Economía e Facenda, dentro dos primeiros quince días hábiles de cada mes, daralle conta a Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos de tódalas modificacións que se realicen de acordo co previsto nesta lei.

Terceira.-Vixencia do art. 23º, nº 2.

O nº 2 do art. 23º desta lei, na redacción dada polo art. 8º da Lei 7/98, do 30 de decembro, de medidas tributarias, de réxime orzamentario, función pública e xestión (DOG do 31. Corrección de erros no DOG do 12/2/99), terá a vixencia determinada na disp. derradeira primeira desa lei, sen prexuízo da que establezan leis futuras.

Disposición derogatoria.

Única.-Quedan derogadas as leis que se citan nas táboas adxuntas e cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ó establecido nesta lei.

1. En virtude da súa incorporación ó TR da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia quedan derogadas as seguintes normas:

-Lei 11/92, do 7 de outubro, de réxime financeiro e presupostario de Galicia.

-Disp. adic. terecira da Lei 14/92, do 29 de decembro, de presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1993.

-Arts. 8º, 23º, 38º, 39º e 40º da Lei 1/94, do 30 de marzo, de presupostos xerais da CA de Galicia para 1994.

-Disp. adic. novena, décima e décimo primeira da Lei 11/95, do 28 de decembro, de presupostos xerais da CA de Galicia para 1996.

-Arts. 4º e 5º da Lei 2/98, do 8 de abril, de medidas tributarias, de réxime orzamentario, función pública, patrimonio, organización e xestión.

-Arts. 3º, 4º, 5º, 6º e 8º da Lei 7/98, do 30 de decembro, de medidas tributarias, de réxime orzamentario, función pública e xestión.

2. En virtude do establecido na disp. derog. da Lei 11/92, do 7 de outubro, de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, está derogada a Lei 30/84, do 3 de abril, de xestión económica e financeira pública de Galicia.